



Defender el territorio





UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA



Embajada de Noruega



Defender el territorio

Defender el territorio

© Hacemos Memoria

© Programa Somos Defensores

ISBN: 978-628-7592-31-5

ISBNe: 978-628-7592-32-2

Primera edición: noviembre de 2022

Comité editorial: Juan Camilo Castañeda, Lourdes Castro, Patricia Nieto, Sirley Muñoz, Víctor Casas, Yhobán Camilo Hernández

Coordinación del proyecto: Juan Camilo Castañeda

Autores: Lina Álvarez Camargo, Óscar Veiman Mejía Giraldo, Carlos Alberto Murillo Porras, Jorge Escobar Banderas, María del Mar Giraldo Rendón, Juan Camilo Castañeda Arboleda, Alexandra Molina Trujillo, Carlos Andrés Orlas Sánchez, Natalia Duque Vergara, Alfredo González Núñez

Imagen de cubierta: *Maternidad*, serie Colombianas Ligeras, de Pedro Ruiz (2012); 30 x 23 cm, óleo sobre lienzo

Dibujo interior: *Libreta Pain De Mie N.º 9*, de Pedro Ruiz (2020); 21 x 15 cm, tinta sobre papel

Diseño y diagramación: Luisa Fernanda Bernal Bernal

Corrección: Juana Manuela Montoya Velásquez, Lina María Martínez Mejía

Contacto:

Hacemos Memoria

Calle 67 53-108 bloque 12, of. 427

Medellín, Colombia

www.hacemosmemoria.org

Programa Somos Defensores

Calle 19 4-88, of. 1302

Bogotá D. C., Colombia

www.somosdefensores.org

Se permite la reproducción total o parcial otorgando el crédito a los autores, sin modificar el material original ni usarlo con propósitos comerciales, salvo autorización escrita del Programa Somos Defensores y el proyecto Hacemos Memoria.

Las crónicas periodísticas que contiene este libro fueron reporteadas y elaboradas por los participantes del curso y proyecto “Colombia en transición: liderazgos sociales y construcción de paz”, ofrecido en el 2020 por Hacemos Memoria (Universidad de Antioquia) y el Programa Somos Defensores.

Cómo citar este libro: Hacemos Memoria y Programa Somos Defensores. *Defender el territorio*. Medellín: Nomos. 2022.

Contenido

Presentación	7
Prólogo	11
Las voces del Guayabero.....	15
Buscar a los desaparecidos para curar la tierra indígena de San Lorenzo	39
Los luceros cantan en el barrio Nuevo Milenio	63
Un abrazo a la montaña	85
Narrativas para colorear la Ciudad Blanca	109
Tierra Grata: el desafío de vivir en paz.....	131
Las hijas del trueno.....	153
Una bandera roja en el desierto de La Guajira	179

Presentación

Narrar el cuidado de los territorios

Organizaciones no gubernamentales, medios de comunicación, la academia, instituciones estatales y organismos internacionales registran y denuncian las agresiones que se perpetrúan contra las personas que defienden los derechos humanos y a los líderes y las lideresas sociales de Colombia. Se han publicado, además, numerosos y valiosos informes que exponen las causas de estas violencias, señalan la responsabilidad de diversos actores y recomiendan al Estado acciones para que los proteja.

Pese a ello, de acuerdo con los registros de Amnistía Internacional y Front Line Defenders, Colombia es el país más peligroso del mundo para quienes defienden los derechos humanos. Según el programa Somos Defensores, entre enero del 2018 y junio del 2022 asesinaron en el territorio colombiano a 716 personas que se dedicaban a esta labor.

En los últimos años, el registro y las denuncias de la violencia contra los líderes y las lideresas produjo una narrativa, especialmente en los medios de comunicación, en la que son

retratados únicamente como víctimas. Una representación inevitable en el contexto de las agresiones que sufren, pero que deja en un segundo plano sus luchas. Conocemos el problema, pero como sociedad ignoramos en buena medida quiénes son los líderes y las lideresas sociales, cuáles son sus acciones cotidianas, qué los motiva, a qué personas, poblaciones o causas defienden y en qué contextos lo hacen.

No en vano, en el *Informe del Relator Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos acerca de su visita a Colombia*, publicado en el 2019, el funcionario de las Naciones Unidas Michel Forst señaló como una de sus principales preocupaciones el hecho de que en Colombia no haya un reconocimiento público positivo del papel que cumplen los defensores y las defensoras en la democracia. Por el contrario, según el Relator Especial, ellos son deslegitimados y criminalizados por actores estatales, situación que favorece las agresiones contra esta población.

Ante esta problemática, Hacemos Memoria, de la Universidad de Antioquia, y Somos Defensores se aliaron en el 2020 con la intención de trabajar juntos en un proyecto que ayudara a visibilizar las luchas de los líderes y las lideresas sociales, y sus acciones colectivas y habituales, con las que aportan a la protección de los derechos humanos de miles de colombianos y con las que intentan poner límites a poderosos sectores, legales e ilegales, que amenazan la dignidad de comunidades enteras.

Consideramos que los medios de comunicación y los periodistas, en su misión cotidiana de retratar la realidad del país, tienen retos importantes con respecto a la representación y la construcción de imaginarios sobre los líderes y las lideresas sociales de Colombia. Por eso, a finales del 2020, ofrecimos el curso “Colombia en transición: liderazgos sociales y cons-

trucción de paz”, en el que participaron treinta reporteros de distintas regiones del país.

Con periodistas que asistieron al proceso de formación emprendimos la tarea de contar historias sobre organizaciones que ejercen liderazgo social y defienden los derechos humanos. Como resultado de ese trabajo colectivo presentamos la colección editorial *Defender*, tres libros con veinticuatro relatos periodísticos sobre colectivos que ejercen algún tipo de liderazgo social en diversas zonas del país.

Defender el territorio, el tercer libro de la colección, presenta ocho historias escritas por periodistas de distintos departamentos de Colombia, que describen el trabajo de organizaciones que tienen un profundo arraigo territorial y que, en diversas ocasiones, han tenido que luchar en contra del Estado y de ambiciosas empresas que desean explotar las riquezas de la tierra, aunque se afecten la cultura, el medioambiente y los proyectos de vida de sus habitantes.

En *Defender el territorio* el lector podrá conocer la historia de *Voces del Guayabero*, un medio de comunicación comunitario que denuncia los problemas que enfrentan las comunidades campesinas de la región del río Guayabero; el Resguardo Indígena de San Lorenzo, en Riosucio, Caldas, donde un grupo de indígenas busca a los desaparecidos de la comunidad para curar su territorio ancestral; el grupo musical AfroMiTu, que muestra los problemas que enfrentan los jóvenes en el municipio de Tumaco, Nariño; la experiencia de reincorporación de excombatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en Tierra Grata, corregimiento de Manaure, Cesar, donde trabajan con indígenas yukpa y campesinos; el colectivo Viraje, que cuenta historias transmedia sobre personas de la población LGBTI en zonas rurales y urbanas del Cauca; el Cinturón Occidental Ambiental, un movimiento de

campesinos, indígenas y ambientalistas del Suroeste de Antioquia que defiende la región frente a la gran explotación minera; las mujeres del Comité de Integración Social del Catatumbo, que se autodenominan feministas, campesinas y populares, y que con plantas de la región cuidan la salud de sus vecinos; y la organización Nación Wayuu, que defiende los derechos del pueblo wayuu en el departamento de La Guajira.

Confiamos en que mostrar su labor y sus luchas ayude a que la sociedad reconozca el aporte invaluable que estas personas hacen a la democracia colombiana, y en que, a la vez, contribuya a atenuar la estigmatización a la que son sometidas.

Prólogo

En los abismos de la paz

La historia no es todo el pasado, pero tampoco es todo lo que queda del pasado. O, si se quiere, junto a una historia escrita, se encuentra una historia viva que se perpetúa o se renueva a través del tiempo y donde es posible encontrar un gran número de esas corrientes antiguas que sólo aparentemente habían desaparecido. Si no fuera así, ¿tendríamos derecho a hablar de memoria colectiva?

Maurice Halbwachs, *La memoria colectiva*

El sociólogo francés Maurice Halbwachs defendió el concepto de memoria colectiva bajo una idea elemental: que es así como se reconstruye el pasado que experimentó un grupo social en un espacio de tiempo y lugar determinados. La grandeza de este tipo de memoria es que parte de recuerdos individuales que luego son organizados por esa memoria colectiva para así crear un sentido de pertenencia.

Eso es lo que logra Hacemos Memoria, de la Universidad de Antioquia, y el Programa Somos Defensores con esta publicación titulada *Defender el territorio: Llegar a las vidas indi-*

viduales y colectivas de los líderes y las lideresas sociales de Colombia con el fin de darles amplitud a sus testimonios y, mediante la palabra, facilitar la perpetuidad de sus historias.

Los territorios colombianos se convierten pues en ese espacio protagonista de las experiencias más comunes de supervivencia que oscilan entre la desazón y la esperanza. *Defender el territorio* nos guía por los conflictos y las luchas de los habitantes de la región del Guayabero, situada entre los departamentos del Meta, Guaviare y Caquetá; el resguardo ancestral de San Lorenzo, en Riosucio, Caldas; el municipio de Tumaco, en Nariño; el Suroeste antioqueño; la ciudad de Popayán, en el Cauca; el corregimiento Tierra Grata, municipio de Manauare, en el Cesar; la región del Catatumbo en Norte de Santander, y el pueblo Wayuu en La Guajira.

¿Cuánto de las realidades de las regiones de Colombia conocen quienes crean la política pública? ¿Están los líderes municipales, departamentales y nacionales a la altura de las necesidades de una población tan diversa en lo social, lo económico y lo cultural? ¿Qué tan responsable es la sociedad de los distintos medios y acciones que perpetúan la violencia y la miseria en tantos lugares del país?

Esas y más preguntas surgen luego de leer el relato de quienes cultivan hoja de coca porque no hay otra opción, o cuando descubrimos que hay personas liderando a la comunidad para buscar a los desaparecidos de la guerra, tal y como también lo investigó y publicó la periodista Patricia Nieto en *Los escogidos*. Más dudas revientan la cabeza al aterrizar en Tumaco para comprobar, una vez más, que hay de todo menos esa presencia integral del Estado que reclaman sus habitantes, y que, a pesar de eso, hay jóvenes que resisten con la música y las letras que quieren despertar y animar a sus pares para que no se vayan a delinquir o a la guerra.

“Los jóvenes ya perdieron la fe en que Tumaco pueda ser diferente, ya no les creen a las organizaciones, ahora es como que solamente miran qué pueden sacar para su beneficio, pero no hay trabajo comunitario, no se ve ese bien común, ese trabajo para que todos crezcamos, sino que cada uno tira para su lado”, dice Neisy Tenorio, una de las integrantes del grupo de rap AfroMiTu. Y es más que comprensible que haya una parte de la población tan pesimista si consideramos que, de acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), por lo menos el 54 % de los tumaqueños viven en situación de pobreza multidimensional.

Esa es la pobreza que, en general, une a los pueblos en los que persisten la presencia y el trabajo de los líderes y las lideresas sociales. Es la pobreza ante la cual se tapan los ojos los gobiernos. Es la pobreza que margina, que discrimina, que mata. Y, cuando no hay pobreza, la crean quienes arrasan las tierras para convertirlas en plataformas de exploración y explotación de minerales, como ocurre con AngloGold Ashanti en el Suroeste de Antioquia, una multinacional que, además, ha tergiversado la idea del desarrollo.

Mención especial merecen dos trabajos: uno, el que hacen en Popayán, la Ciudad Blanca y también muy conservadora, Yinna Ortiz y Mónica Quevedo para confrontar al patriarcado y cuestionar a la sociedad sobre los roles de género. Cuánta falta hace en Colombia una enseñanza sensata, amorosa y argumentada sobre las problemáticas y las batallas que libran los integrantes de la comunidad LGBTI. No es casual que, entre 2019 y 2020, 181 personas de esa comunidad hayan sido asesinadas en el país. Y dos, el trabajo que hacen las mujeres del Catatumbo construyendo el tejido social, rescatando las ideas de los ancestros sobre el manejo de las plantas e impulsando la cosecha de alimentos para comercializarlos en cooperativas.

Gratitud infinita para el equipo que ha hecho posible este trabajo. Un país sin memoria no puede construir los caminos de comprensión, y si no existe ese primer paso, más lejos estamos de tocar siquiera un borde de la paz.

Claudia Morales

Las voces del Guayabero

Por Lina Álvarez Camargo

Lina Álvarez Camargo (Ibagué, 1994). Vive en Villavicencio desde el 2012. Es comunicadora social y periodista, especialista en políticas públicas. Fundó y dirige *El Cuarto Mosquetero*, un medio de comunicación alternativo y popular que cubre temas de género, paz y defensa del territorio. También participa en la formación de reporteros comunitarios en zonas rurales de los departamentos del Meta, Guaviare y Cundinamarca.

Edilson Álvarez, Jorge Hurtado y Fernando Montes son tres campesinos del Guayabero, una región ubicada en los límites de los departamentos del Meta, Guaviare y Caquetá, cuya principal actividad económica es el cultivo de hoja de coca. En esa alejada zona de Colombia, la población ha sufrido las consecuencias del conflicto armado, y desde el 2018 ha sido perseguida por las fuerzas armadas del Estado, que adelantan operativos militares para erradicar forzosamente los cultivos ilícitos. En el 2017, Edilson, Jorge y Fernando, con el apoyo de las comunidades rurales, fundaron el medio de comunicación comunitario *Voces del Guayabero*, para denunciar la cruda realidad a la que están sometidos.

Cuarenta campesinos almorzaban sancocho en la finca de Jorge Hurtado. Desde allí podían ver sobre otro terreno de Nueva Colombia, en la vereda de Vista Hermosa, Meta, a los militares de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega que estaban a cargo del sargento Raúl Flórez y tenían la misión de erradicar los cultivos de coca.

Hurtado, el dueño de la finca, es un hombre sonriente de 40 años, padre de tres hijos, dos mujeres y un bebé, que llegó a la región del Guayabero desde Bolívar, Santander, buscando mejores condiciones de vida. Allí conoció a Leidy, con quien se casó y desea compartir el resto de su vida.

Dice que cultiva coca porque desde allí no es posible vender otros alimentos sembrados por los campesinos. Según él, es más fácil venderle la coca a la guerrilla o comercializarla en otro punto, que vender un bulto de plátano que llega negro a San José del Guaviare, después de siete horas de viaje desde Nueva Colombia.

En esta región no hay carreteras, la única opción es moverse en embarcaciones sobre el río Guayabero. Un bulto de comida tiene el mismo valor que el pasaje de una persona: 80 mil pesos.

Leidy Cárdenas, la esposa de Hurtado, junto a su hija mayor y otras vecinas, preparó la comida para los campesinos que estarían en el plantón durante toda la semana. En otras zonas de la vereda había más pelotones del ejército, así como otros plantones de vecinos que querían evitar que les erradicaran los cultivos.

Las jornadas cotidianas de campesinos como Hurtado giraban en torno al cuidado de los cultivos de coca, a la pesca, a la cría en pequeña escala de ganado y a sus cultivos de pancoger. Pero la presencia de la unidad de las fuerzas armadas cambió la cotidianidad de los habitantes de Nueva Colombia. Empezaron a levantarse desde muy temprano para raspar, entre todos, la hoja de la coca. En algunos casos, cuando era inminente la erradicación hecha por los soldados, soqueaban los cultivos para salvar la semilla y evitar ser violentados por los militares.

Según un artículo de *La Liga Contra el Silencio*, publicado en el portal 070, la Fuerza de Tarea Conjunta Omega es una unidad conformada “por hombres del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea creada en 2003, con el objetivo de enfrentar militarmente a la entonces guerrilla de las FARC. Desde 2019, parte de la misión de la Fuerza Omega es ‘neutralizar grupos armados residuales’ en trece municipios de la zona del Guayabero”.

El Guayabero

La región del río Guayabero solo tiene dos entradas desde Villavicencio, la capital del Meta. Una opción es la travesía por los caminos de Puerto Rico; la otra, es por carretera hasta San José del Guaviare; luego se toma una trocha hasta Puerto Nuevo y Puerto Cachicamo, y, finalmente, se siguen trayectos en lancha sobre el afluente. El 8 de agosto del 2020 llegué a la zona a través del primer camino, después de doce horas de viaje en motocicleta.

Hace más de cuarenta años empezaron a colonizarse las veredas más recónditas de municipios como Vista Hermosa, Puerto Rico, Puerto Concordia, La Macarena y San José del Guaviare. La gente que llegó a estos territorios del oriente

de Colombia huía desde la década del cincuenta debido a la violencia que desataron partidarios conservadores y liberales en departamentos como el Valle del Cauca, Tolima, Caldas, Risaralda y Quindío.

Así describió el sociólogo Alfredo Molado, en un texto titulado *Aproximación al proceso de colonización de la región del Ariari-Güejar Guayabero*, la colonización de la zona donde está ubicada la vereda Nueva Colombia:

Esta nueva ola de inmigración [que se dio entre 1980 y 1988] estaba compuesta por campesinos pobres de zonas andinas, por colonos arruinados de la misma región, por jornaleros de las áreas de agricultura comercial y, por primera vez, por desempleados y rebuscadores urbanos de las más heterogéneas condiciones sociales y económicas. Esta enorme masa de fuerza de trabajo se concentró principalmente en Vistahermosa, Puerto Rico y a lo largo del Guayabero, fundando poblaciones que hasta entonces eran discretos y solitarios atracaderos. Nacieron así el Raudal, La Carpa, Nueva Colombia, Cachicamo, Puerto Nuevo.

En estos puntos se concentraron los servicios, el comercio y la vivienda, y de allí partió la onda que derribó la selva y multiplicó las chagras y los trabajaderos. Quizás el fenómeno más importante, desde el punto de vista de la demografía, fue el surgimiento de estos pueblos o pequeñas concentraciones a lo largo de los ríos y de las trochas principales.

Algunos de sus habitantes recuerdan que los gobiernos de la época, particularmente el del presidente Alfonso López Michelsen (1974-1978), les entregaron hachas y los animaron a asentarse en la región. Varias generaciones de colonos han nacido en el Guayabero, y pese a que sus condiciones de vida son precarias, no conciben la idea de vivir en otro lugar.

En 1974, años después de que empezara la colonización de esta zona, se adoptó en Colombia el Código Nacional de los

Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, donde se establece el Sistema de Parques Nacionales Naturales. Las tierras que ocuparon los colonos del Guayabero fueron cobijadas bajo el manejo de protección especial de los Parques Nacionales Naturales de Picachos, Tinigua, La Macarena y Chiribiquete.

La población campesina no imaginó que esta denominación traería cambios, pero la legislación colombiana es rígida con las actividades económicas en cualquier zona de interés ambiental, y ellos talaban árboles para instalar sus cultivos de pancoger y para construir sus ranchos y los de sus animales.

Los pobladores del Guayabero no solo querían cultivar para comer, deseaban acceder a recursos económicos para suplir otras necesidades. Intentaron con cultivos de maíz, pero los costos de transporte eran más altos que el valor del grano en el mercado. En departamentos como el Cauca, el mismo Guaviare y Nariño ya se cultivaban coca, marihuana y amapola como forma de subsistencia. Así, poco a poco, aparecieron los cultivos de uso ilícito en el Guayabero.

Tiempo después, cuando las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia —FARC— ocuparon la región, limitaron las actividades que afectaban el medio ambiente, como la tala de árboles, y controlaron la economía ligada a los cultivos de la coca.

Don Miguel es un campesino de la vereda La Esperanza, de Puerto Rico. Él llegó a la región mucho antes de que las FARC dominaran esta zona del oriente de Colombia. Dice que, pese a la irrupción de los insurgentes, su vida no cambió: vivían en una situación de pobreza aguda, pero sin problemas de violencia. “Nos hablaron de que querían luchar por nuestros derechos y empezaron a promover el trabajo colectivo para edificar puentes, carreteras y otras obras que beneficiaban a la comunidad”, recuerda don Miguel. Pero con la llegada

del ejército empezó la zozobra: los acusaban de pertenecer al grupo insurgente y, si no eran estigmatizados, solían pedirles favores a los que no podían negarse, una situación que los exponía frente a los guerrilleros, quienes los señalaban de soplones.

En el 2016 las FARC y el Estado colombiano firmaron el Acuerdo Final de Paz. Los hombres del grupo insurgente dejaron las armas y el pacto que firmaron prometía cambios profundos para los campesinos de la zona, como una reforma rural y un plan para la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos.

Pero en la región del Guayabero la implementación del acuerdo de paz no ha sido fácil. Antiguos miembros de las FARC retomaron las armas y crearon las disidencias que ahora controlan el territorio, mientras que el Estado les ha incumplido a los campesinos con los proyectos para sustituir de forma voluntaria los cultivos de coca.

En esta apartada región del país, el Estado hace presencia con sus fuerzas armadas. Ya no combaten a un grupo insurgente, como en el pasado, sino que cotidianamente hacen operativos contra los grupos disidentes de las FARC, los cultivos de coca y las poblaciones que habitan en los Parques Nacionales Naturales.

Como respuesta a las difíciles condiciones de vida, a la relación tensa con las fuerzas armadas y a los hechos que vulneran sus derechos, los campesinos —que no sabían de cámaras ni emisoras, y que incluso no sabían leer ni escribir— crearon en diciembre del 2017 un medio de comunicación al que llamaron *Voces del Guayabero*, donde don Miguel se formó como comunicador comunitario, bajo la dirección de antecesores como Hurtado, el dueño de la finca donde los campesinos almorzaban sancocho.

Una denuncia viral

A Hurtado se le da bien escribir y hablar. Aprendió a tomar fotos y hacer videos en una escuela de comunicación a la que asistió en el 2017, liderada por una periodista a la que contrataron con el dinero que recogieron en varias veredas. Durante los últimos años ha acumulado experiencia para denunciar los abusos de los que son víctimas los campesinos en la región del Guayabero. Hurtado sabe que cuando hay operativos militares es periodista comunitario, pero dice que ante los atropellos no puede evitar exaltarse y gritar todo lo que siente a los militares.

Después de estar dos días en la vereda Nueva Colombia, en agosto del 2020, se hicieron evidentes dos realidades: por un lado, la de los campesinos que no se acogieron al Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), que se creó tras la firma del Acuerdo Final de Paz, en el 2016; por el otro, la de quienes se habían acogido al programa. Los primeros eran quienes más sentían el impacto de los operativos de erradicación; los segundos, sufrían por el incumplimiento del Estado, pues al dejar de cultivar coca no tenían la entrada económica más importante para su subsistencia. Por estas situaciones muchas personas tuvieron que desplazarse, y quienes se quedaron en sus fincas vieron más precarizadas sus vidas.

El 8 de agosto del 2020, una semana antes de mi visita, *Voces del Guayabero* denunció que 14 personas fueron retenidas por el ejército. Los 14 hombres habían ido, antes del amanecer, a cortar un cultivo de coca de manera voluntaria para que así el ejército no se adentrara en las propiedades.

El día de las detenciones, Edilson Álvarez, conocido con cariño como Mincho, y Fernando Montes, distinguido como Gallito, caminaron hacia la finca donde los 14 campesinos es-

taban cortando los cultivos. Querían registrar el proceso para *Voces del Guayabero* y contar que la comunidad se sentía presionada por el ejército desde abril del 2020.

En el camino, de repente, escucharon un bombazo y minutos después sonaron disparos. Mincho y Gallito supusieron que habían quedado en medio de un enfrentamiento entre disidencias de la antigua guerrilla de las FARC y las Fuerzas Armadas del Estado. Pero en ese momento vieron que varios militares corrían hacia ellos.

Los periodistas comunitarios huyeron y lograron entrar a una casa, donde evitaron que se los llevaran. El hostigamiento frustró su intención de cubrir la labor de los campesinos que estaban cortando los cultivos de coca, quienes fueron retenidos por el ejército. “Nos decían que si nos pillaban solos nos iban a dar una *plomacera*”, recuerdan Mincho y Gallito.

Mincho, Hurtado y Gallito le tienen miedo al ejército desde que el 4 de junio del 2020 este último fue herido en la mano derecha por una bala de fusil, cuando cubría un operativo militar en la vereda Tercer Milenio. Además, reciben amenazas constantemente: “Usted es el fotógrafo, pero de la guerrilla, no se le dé por nada cuando lo cojamos y lo hagamos picadillo”, “tranquilo, hijo de puta, la próxima vez no le volamos solo un dedo”, “vayan por el de la cámara”, les han dicho algunos soldados.

Ese 8 de agosto los tres periodistas de *Voces del Guayabero* se encontraban en un sitio acordonado por los militares. Los uniformados evitaron a toda costa que la comunidad llegara hasta la finca donde ocurrieron las retenciones de los 14 campesinos. Las mujeres de la vereda fueron a preguntarles a los uniformados por sus hijos, esposos y hermanos. Ante los cuestionamientos, los soldados lanzaron gases lacrimógenos y, aseguran los vecinos, les dispararon con sus fusiles.

De la detención ilegal el país se enteró gracias a la labor que hizo Hurtado. Él grabó el momento en el que las mujeres hacían el reclamo y lo publicó en las redes sociales de *Voces del Guayabero*, con la etiqueta #SOSGuayabero. Su publicación se volvió viral y fueron escuchados en el ámbito nacional; incluso, algunos medios de comunicación masiva compartieron información sobre el caso.

Uno de los hombres retenidos aquel día manifestó que de no haber sido por el aviso oportuno de *Voces del Guayabero* no estaría contando la historia, pues gracias a que las personas respondieron al llamado de auxilio y replicaron la denuncia, ellos fueron liberados varias horas después. Tenían morados en el cuerpo debido a las patadas y los culatazos que les propinaron los militares, quienes los acusaban de ser guerrilleros.

En algunos medios de comunicación circularon las versiones del general Raúl Hernando Flórez Cuervo, comandante de la Fuerza de Tarea Omega, y el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, quienes contaron que ese día trasladaron en helicóptero a uno de los campesinos después de que fuera herido por una bala, en medio del fuego cruzado entre el ejército y las guerrillas de Gentil Duarte, un grupo armado que tras la firma del acuerdo de paz se rearmó y sostiene el control territorial en parte de los departamentos de Meta, Guaviare y otras regiones del país.

Sin embargo, en Nueva Colombia circuló otra versión: la población aseguró que ese día no hubo ningún enfrentamiento, que lamentablemente unos soldados activaron una mina; ante la explosión, otros militares empezaron a disparar; quienes respondieron fueron los compañeros del ejército que estaban al otro lado del camino. “Es que ese día no hubo ningún enfrentamiento. Sonó un bombazo *reduro* e inmediatamente ellos empezaron a disparar, nosotros nos

tiramos al piso porque no podíamos ni correr, eso venía bala de todos lados. Luego empezaron a gritarse, que no dispararan, que eran todos del ejército. El bombazo fue en la montaña, pero se desquitaron con nosotros. Duraron un montón disparando, incluso por eso hirieron a nuestro amigo”, contó uno de los testigos.

La experiencia de dar a conocer esa denuncia en las cuentas de *Voces del Guayabero*, que se hizo viral y que probablemente ayudó a que los militares liberaran a los campesinos retenidos, permitió que Hurtado comprendiera el poder de la comunicación y dimensionara lo que podían lograr con *Voces del Guayabero*. “Me di cuenta de que muchos de los atropellos a los derechos humanos que se cometían en mi región no salían a la luz pública, no eran informados o eran comunicados de forma distorsionada. Decían allá, en los medios tradicionales, cosas que no eran. La relación con el ejército ha sido un poco mala, porque nos vinculan con las disidencias, siempre están los señalamientos y la estigmatización hacia nuestro medio y hacia el campesinado en general”, comentó Jorge Hurtado mientras almorzaba el sancocho en su finca, junto a los otros cuarenta campesinos que participaban en el plantón.

Denunciar la represión del Estado

En el 2018, el Gobierno nacional, con el apoyo de la fuerza pública, llegó a la región del Guayabero para hacer la extinción de dominio de quinientas reses que tenía la comunidad en zonas protegidas por Parques Nacionales Naturales. Los campesinos no comprendían por qué: si por un lado les decían que eran grandes narcotraficantes por cultivar coca; por otro, los tildaban de delincuentes por tener cabezas de ganado en sus fincas.

En ese momento les hicieron saber que de una u otra forma buscaban que se fueran de esos territorios, que esas tierras no les pertenecían, a pesar de que en ellas vieron envejecer a sus padres y enterraron a sus abuelos. Son zonas de Parques Nacionales Naturales y, por ende, estaban cometiendo un delito ambiental solo por coexistir allí, con el agravante de que realizaban actividades económicas que implicaba la tala de árboles.

“Mi familia llegó hace 87 años a los Llanos del Yarí y tengo la fortuna de ser oriundo de este territorio. Nunca nos dijeron que íbamos a ser penalizados por estar viviendo en zonas protegidas, pero va y uno mira la construcción de los oleoductos, como el Tápír, los 46 bloques petroleros que están concesionados entre San José del Fragua y San José del Guaviare y las catorce hidroeléctricas proyectadas, y comprende por qué no nos quieren en esta región. Las pretensiones no son cuidar los bosques amazónicos y los ecosistemas, sino desocupar de gente estos territorios para entregárselos a las multinacionales”, comentó don Carlos, un líder campesino que ha estado al tanto de la amenaza que representa la Operación Artemisa para los pobladores del Guayabero.

Don Carlos y la comunidad señalan que las fuerzas armadas aprovecharon la Operación Artemisa para capturar a campesinos con pequeñas hectáreas, mientras que a los grandes ganaderos no los tocaron. Ante la arremetida del Estado que se hizo evidente en el 2018, los campesinos de *Voces del Guayabero* buscaron a una periodista para que los formara y así denunciar de la mejor manera posible lo que ocurría en la región. Aprendieron lo básico: cómo manejar una cámara, aspectos mínimos de la edición audiovisual y la creación y administración de la cuenta de *Voces del Guayabero* en Facebook.

Entre los habitantes de veredas del Meta y el Guaviare recibieron diez millones de pesos para comprar un computador y dos cámaras, y mandar a hacer unos chalecos. En el 2019, dos

mujeres y tres hombres de la comunidad se formaron en herramientas de la comunicación y viajaron de vereda en vereda entrevistando a los pobladores para hacer un documental sobre los problemas de la región. No obstante, dicho documental no vio la luz porque la periodista que contrataron se quedó con el material, nunca regresó a la zona y los reporteros comunitarios no guardaron copias de la información.

Casi todo el 2020 estuvo lleno de denuncias de violación de derechos humanos, estigmatización por parte de la institucionalidad hacia los campesinos y atropellos a la libertad de prensa. Las situaciones de violencia intimidaron a las dos mujeres que hacían parte del medio de comunicación comunitario y por eso se retiraron del proceso. Sin embargo, ese mismo año lograron difundir a nivel nacional varias situaciones en las que militares vulneraron sus derechos humanos, y el perfil en Facebook de *Voces del Guayabero* pasó de contar con unos pocos amigos a alcanzar el tope máximo de cinco mil.

Gallito

Gallito llevaba más de dos meses sin manejar motocicleta. Él estaba nervioso porque quizás no podría soportar el peso de los dos sobre la moto, y yo, porque pensaba que podíamos caernos sobre los barrizales. Nos dirigíamos, en agosto del 2020, a las veredas La Reforma y Caño Cabra.

A Fernando Montes sus vecinos lo apodan Gallito porque tiene fama de peleonero. Tiene 45 años, es de piel trigueña, delgado y bajito. Nació en La Dorada, Caldas. Recorrió distintas regiones del país buscando de qué vivir, hasta que empezó a trabajar como obrero en algunas fincas del Guaviare. Finalmente, se radicó en la vereda La Reforma del municipio de Puerto Rico, en la región del Guayabero.

Desde el 20 de mayo del 2020 campesinos de Meta, Guaviare y Caquetá se juntaron en la vereda Tercer Milenio de Vista Hermosa e iniciaron protestas para exigir el respeto de sus derechos, vulnerados por la Operación Artemisa. En las movilizaciones, según cuenta Gallito, la comunidad no lo dejaba andar solo porque había sido amenazado en varias ocasiones.

El 4 de junio la tensión aumentó. En la mañana, cuando los campesinos todavía dormían, se escucharon en las veredas ráfagas de fusil disparadas por el ejército y se sintieron los gases lacrimógenos lanzados por hombres del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía (Esmad), que arribaron a la zona en cuatro helicópteros.

Los policías y los militares quemaron las tiendas de campaña y los bultos de mercado que encontraron en el camino. La comunidad respondió a las agresiones con palos y piedras. Para Gallito, que vestía el chaleco distintivo de *Voces del Guayabero*, la situación se salió de control cuando un disparo lo impactó justo en el momento en que tomaba una fotografía con su cámara Nikon: “Todo se volvió un caos. Yo nunca había estado en una situación de esas, donde hubiese tanto atropello, tanto maltrato al campesino, y mucho menos a los comunicadores de prensa. Eso se volvió como una masacre, porque todos corrían para un lado, otros gritaban y ahí fue donde resulté herido en mi mano. Mi cámara fue destrozada, pero yo pensaba en mi mano, quería salvar la memoria para tener la información, pero todo eso quedó totalmente destruido y en la huida también caí en un charco”.

Era inevitable para Gallito hablar de este tema sin tocarse el dedo meñique, que fue el que sufrió el daño más evidente y el que no podía doblar. A dos meses del hecho, su mano se veía desfigurada. Gallito no acudió a un centro médico porque estaba muy lejos y porque temía ser agredido en el trayecto hasta San José del Guaviare.

En la noche de ese 4 de junio organizaciones de derechos humanos compartieron en sus redes sociales contenidos que mostraban a las personas que resultaron heridas durante el operativo. Gallito se veía pálido y se quejaba, estaba sobre una camilla junto a una bandeja llena de instrumentos quirúrgicos y perdía mucha sangre. Aun así, contaba lo que le había sucedido. Él perdió el registro fotográfico de ese día, pero a partir del trabajo de Jorge Hurtado y Edilson Álvarez, *Voces del Guayabero* logró denunciar la agresión.

En un artículo de la *Liga Contra el Silencio*, publicado en el portal 070 el 29 de julio del 2020, el líder campesino Pablo Parrado denunció que la acción de la fuerza pública fue un intento de homicidio, y explicó que “el plantón se dispersó porque estaban tirando a matar a la gente; por ello tenemos varios heridos. Y se puso tan compleja la situación que estaban detonando artefactos explosivos cerca de donde estaba concentrada la comunidad”.

Hasta abril del 2022, la investigación de los procesos disciplinarios contra los militares involucrados en estos hechos no había dejado sanciones. La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y otras organizaciones le ayudaron a Gallito a conseguir una cámara nueva, le dieron un auxilio de supervivencia y hasta se ofrecieron para que pudiera hacerse un tratamiento médico en la mano, pero por el temor de ir a la ciudad, donde se siente más desprotegido, no recibió la asistencia.

Gallito y yo finalmente llegamos a las veredas La Reforma y Caño Cabra, escuchamos a sus habitantes, sus sueños y sus temores. Fuimos a un laboratorio donde un campesino nos habló de sus condiciones de vida y de las consecuencias de la erradicación forzada: “Si ellos nos cortan los cultivos, nosotros seguimos talando para sembrar la coca, ¿o de qué vamos a vivir?”.

Algo era evidente en cada vereda que visitaban los reporteros de *Voces del Guayabero*: las casas de sus habitantes siempre estaban abiertas para ellos. Sabían que Gallito y sus compañeros mostrarían la visión de la comunidad.

Como dice la académica Cecilia Krohling, los reporteros comunitarios comparten objetivos, tienen relaciones y puntos de encuentro con la comunidad, por eso en sus contenidos la población del Guayabero es protagonista, se muestran sus luchas y sus intereses. También, según las descripciones del doctor en periodismo Alejandro Barranquero, se trata de un medio alternativo porque presenta una información que interpela las versiones de los medios tradicionales y masivos. En este caso, como lo explicaba Hurtado, lo que sucede es que la versión del campesinado de estas zonas tan recónditas no alcanza a llegar a la agenda de los medios. Al contrario, muchas veces sesgados por fuentes oficiales, estigmatizan la región y a sus pobladores; por eso, es importante una información creada por y para la comunidad.

Prohibidos los chalecos

Definir el primer logo de *Voces del Guayabero* fue una tarea sencilla. Querían que las letras del nombre estuvieran acompañadas con un distintivo de la comunicación, y fue así como se le ocurrió a uno de sus integrantes que un micrófono representaría esa idea.

Mandaron a hacer chalecos para distinguirse como miembros del medio comunitario. Los escogieron de colores negro y rojo porque hacían buen contraste en un territorio caracterizado por los verdes de la naturaleza y los ocre del polvo y del barro. Ellos dicen que la elección fue un error porque, en vez de aumentar la protección, se volvieron blanco fácil en los operativos que hace la fuerza pública; de hecho, señalan que

a Gallito lo hirieron porque ese día portaba el chaleco y fue fácilmente reconocido por los militares.

Creyeron que los colores rojo y negro, que están asociados a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), eran la razón de la estigmatización, y por eso botaron los chalecos. También pensaron que no les respetaban su derecho a la libertad de expresar y difundir su pensamiento y sus opiniones, de informar y recibir información veraz e imparcial, y de fundar medios de comunicación, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política, porque no tenían las acreditaciones requeridas. Rediseñaron el logo e imprimieron carnets de prensa. No obstante, la estigmatización continuó y fueron amenazados por portar cámaras.

Mincho

A Mincho muy pocas personas lo conocen como Edilson Álvarez, su nombre de pila. Este hombre sonriente, de piel morena, dentadura blanca y padre de un niño de cinco años es ágil con la tecnología, aunque le cuesta escribir; por eso, agradece cuando Hurtado se inspira con los textos. Cuando le corresponde a él redactar las entradas es breve o publica el contenido sin ninguna explicación textual.

Por su habilidad con la tecnología, a sus 33 años Mincho tiene la responsabilidad de manejar los perfiles de *Voces del Guayabero* y entablar relaciones con los medios de comunicación y los actores sociales.

Los perfiles de *Voces del Guayabero* eran un caos. Esto se entiende porque en muchas zonas de la región no hay acceso a internet y, por lo tanto, gran parte de la población desconoce cómo funciona el mundo digital. Por ejemplo, no conocían las diferencias entre un perfil personal y una *fanpage* en Facebook.

Voces del Guayabero abrió su primera cuenta en Facebook como un perfil personal. Cuando llegaron a los cinco mil amigos, esta red social impidió que aceptaran más solicitudes de amistad. La respuesta del equipo fue crear otros perfiles personales con el mismo nombre del medio de comunicación, pero terminaron confundiendo al público.

Cuando decidieron como equipo que tenían que ponerles más orden a sus redes sociales, fue Mincho el encargado de manejar esta plataforma y pedir la asesoría para migrar a sus amigos como seguidores de la página *Voces del Guayabero*.

Mincho aprovechó los viajes a Villavicencio en el 2020, cuando los campesinos negociaban con el Gobierno nacional la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, y en el 2021, cuando viajaron para participar en el Paro Nacional, para acercarse a *El Cuarto Mosquetero*, un medio de comunicación alternativo que lo orientó en el manejo de las redes sociales y que desde entonces acompaña a los integrantes de *Voces del Guayabero* en las labores de formación de nuevos reporteros.

Con ese acompañamiento, Mincho se dio cuenta de que muchos de los contenidos publicados por *Voces del Guayabero* eran retomados en otros medios de comunicación sin atribución. Por eso aprendió a usar etiquetas en las publicaciones y empezó a crear introducciones para acompañar los videos, como una forma de proteger la autoría de sus contenidos.

En Villavicencio, cuando viajaron para participar y cubrir el Paro Nacional del 2021, Mincho aprendió a hacer transmisiones en vivo desde la página de *Voces del Guayabero*. Dieron a conocer las jornadas de protestas y mostraron las demandas particulares de la población campesina del Guayabero. En la capital del Meta se sintieron más seguros en su labor como periodistas, y por eso mandaron a hacer credenciales y gorras que los identifiquen como integrantes del medio de comunicación comunitario.

Las voces de las mujeres

A lo largo de estos años varias mujeres han hecho parte del equipo de *Voces del Guayabero*. Pero su permanencia en el medio ha sido difícil, pues en la región, además del impacto del conflicto armado, ellas son afectadas por otras conflictividades. Ser mujeres en el Guayabero implica tener que trabajar en las ranchas (cocinas), ser madres e hijas, conformar hogares siendo muy jóvenes y sufrir el desconsuelo de que sus hijos, hermanos, padres y esposos les sean arrebatados por la guerra.

Debido a la ausencia de mujeres en el equipo, los integrantes de *Voces del Guayabero* se han formado en materia de género. Para ello han tenido como aliados a los medios *El Cuarto Mosquetero* y *Fondo Lunaria*. Como resultado, en el medio de comunicación comunitario priorizan los testimonios de las lideresas y las presidentas de las Juntas de Acción Comunal —JAC— de la región.

También, retratan las situaciones de violencia que sufren, como cuando padecen el acoso por parte de los militares, quienes al verlas solas por las veredas les dicen piropos. Esta situación trae como consecuencia el temor, al punto en que algunas familias no permiten que sus hijas vayan a las escuelas.

María es una lideresa de Nueva Colombia. Ella hace parte de los procesos colectivos de la región porque su sueño es entregarle un territorio en paz a su hijo de diez años. Valora la labor que hacen los periodistas comunitarios de *Voces del Guayabero* porque, según ella, son dedicados y se preparan para mejorar la información que producen: “En *Voces del Guayabero* no nos estigmatizan a nosotras, realmente han mostrado nuestra idiosincrasia. Los grandes medios siempre desinforman las realidades de nuestro territorio y por ello espero que este medio tenga mucho más alcance y amplitud para que más personas puedan saber la verdad”, dice María.

Registrar la muerte

Por todas las situaciones de violencia que han vivido en los últimos años, los usuarios de *Voces del Guayabero* saben que las publicaciones suelen denunciar hechos graves. Por ahora no visibilizan lo que sucede en las reuniones comunales, los cumpleaños o las integraciones, debido a la falta de colaboradores. También, porque los reporteros comunitarios no dejan de ser campesinos y aprovechan esos momentos de tranquilidad para cuidar los cultivos. “Más que un proceso, el beneficio que ha traído para la comunidad es poder hacer las denuncias públicas de manera más amplia en un medio de comunicación alternativo y sobre todo comunitario de aquí de la región, que sentimos como propio”, reflexiona Pablo Parrado, líder del sector que desde sus inicios ha estado acompañando y ayudando a *Voces del Guayabero*.

Los periodistas del medio dicen que registrar la muerte de sus vecinos es una de las tareas más difíciles. Ellos van a los velorios de las personas que fallecen por muerte natural, como colonos que han sido importantes líderes en el territorio. Pero muchas veces acompañan las honras fúnebres de personas que mueren en el contexto de la guerra.

El 2 de marzo del 2021, los medios de comunicación nacionales anunciaron la noticia de un bombardeo en Calamar, Guaviare, donde murieron 10 integrantes de las disidencias de las FARC, comandadas por Gentil Duarte. Días después, el 11 de marzo, se conoció que una mujer de apenas dieciséis años había muerto en el operativo de la Fuerza Aérea.

La adolescente se llamaba Danna Lizeth Montilla y era oriunda de la vereda Nueva Colombia, es decir, era vecina de Mincho, de Hurtado y de Gallito. Danna Lizeth estaba en décimo grado, y para asistir a las clases virtuales debía ir a las casas de los parientes que contaban con conexión a internet. En di-

ciembre del 2020 su familia la dio por desaparecida. Supieron que había sido reclutada forzosamente por las disidencias de las FARC cuando se enteraron de que murió en el bombardeo.

Ella era una admiradora de la labor de *Voces del Guayabero*, incluso acompañó a los reporteros comunitarios por las veredas en el primer intento de hacer un documental. La población del Guayabero y los reporteros comunitarios sintieron dolor cuando los medios de comunicación informaron que había fallecido. La indignación aumentó cuando Diego Molano, entonces ministro de defensa, justificó la muerte de Danna al decir que los niños bombardeados eran máquinas de guerra. Una polémica afirmación que circuló por todos los medios de comunicación del país.

Acompañar el sepelio de Danna ha sido la labor más difícil para los campesinos de *Voces del Guayabero*; a pesar de la indignación que produjeron los señalamientos del ministro, los reporteros decidieron no publicar información sobre el sepelio.

El futuro

Después de la despedida de Danna, los reporteros del Guayabero reflexionaron sobre la posibilidad de crear espacios para la formación de reporteros jóvenes, de protegerlos en sus veredas, de evitar que los acusen y que los estigmaticen. También son conscientes de que Gallito, Mincho y Hurtado solos no pueden estar al tanto de todas las actividades que demanda el medio comunitario. En ese momento, *El Cuarto Mosquetero* de Villavicencio les ofreció un proceso de formación apoyado por la Convocatoria de Comunicación y Territorios del Ministerio de Cultura.

En los procesos comunitarios son las JAC las que tienen un papel preponderante en los territorios, especialmente si hay

liderazgos como el de don Ronald Echeverry, un hombre de unos cuarenta y cinco años, alto, delgado y moreno. Él era el presidente de la JAC de Nueva Colombia y hace cinco años fue uno de los que impulsó la creación de *Voces del Guayabero* y motivó a las veredas de la región para que se unieran a la iniciativa.

Ronald, hoy al frente de la Asociación de Campesinos y Trabajadores de la Región del Río Guayabero (Ascatragua) ayudó en la convocatoria para crear el grupo de reporteros de *Voces del Guayabero*. No todas las veredas de la región se sumaron al proyecto, pero logró conformarse un grupo de 15 personas, con niños desde los doce años hasta adultos mayores de setenta.

En el primer taller de ese proceso los estudiantes se acercaron al género de la crónica. Escribieron en primera persona sobre algunas vivencias significativas. Hablaron de sueños truncados, como el de ser futbolistas, pero la mayoría escribió sobre heridas abiertas, como una mujer que contó la historia de la violación y el asesinato de su hija, un crimen que sigue impune. Sus compañeros la rodearon y entendieron su dolor. Eso también ha logrado *Voces del Guayabero*: crear espacios de confianza y apoyo mutuo, y dar valor a las vivencias de sus habitantes.

Los campesinos también apoyan a los excombatientes que están en proceso de reincorporación en la región. Mery, una exintegrante de las FARC que hizo parte del antiguo Espacio Transitorio de Capacitación y Reincorporación de Colonas, se vinculó al proceso de formación meses después de que hubiera iniciado. Ella le mencionó a Ronald su deseo de ingresar para contar desde *Voces del Guayabero* su apuesta por la paz, un camino que recorre desde el 2016, cuando dejó las armas.

Mujeres, hombres, niños y niñas aprendieron de profesionales en fotografía, radio y producción audiovisual. Pasaron horas con un esfero en la boca, diciendo trabalenguas que los hacen

reír para mejorar su pronunciación. Recorrieron las veredas con cámaras y micrófonos, arriesgándose a hacer entrevistas, a veces sobre temas ligeros y otras veces sobre asuntos dolorosos. Compitieron entre ellos en ejercicios de improvisación para aprender a expresarse ante un caso de emergencia. Hasta Mincho, quien siempre ha sido muy tímido y se refugia tras sus cámaras, ya puede hacer transmisiones en vivo sin estar en completo silencio.

Para ellos lo más difícil fue la escritura, especialmente si se trataba de reconstruir la memoria de la región. Quienes no saben escribir se apoyaron en sus compañeros y tutores para contar lo que vivieron. Estos ejercicios les sirvieron, más que para comunicar un texto, para abrir su corazón por primera vez y encontrar un espacio para liberar el dolor.

Las escuelas itinerantes de comunicación popular se hicieron en distintas veredas. Mincho, Hurtado y Gallito, que en muchas ocasiones se han visto desbordados por el trabajo cotidiano de *Voces del Guayabero*, esperan que más vecinos se vinculen al medio, que este deje de ser un compendio de páginas en redes sociales, donde denuncian los atropellos que sufren, y fundar un portal donde los habitantes de la región y del país encuentren un contraste con respecto a los contenidos que publican los medios tradicionales. Quieren mostrar la realidad como la ven sus ojos y eliminar la estigmatización a la que han sido sometidos.

Referencias

- Barranquero, A. y Torres, L. (2015). Imágenes contemporáneas de la comunicación ciudadana en América Latina. Un encuentro entre Clemencia Rodríguez y Cicilia M. Krohling Peruzzo. *Revista Internacional de Comunicación y Desarrollo (RICD)*, 1(1), 13-18. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4981139>.

- Barranquero, A. y González, M. (2015). Los medios comunitarios y alternativos en el ciclo de protestas ciudadanas desde el 15M. *Athenea Digital*. <https://atheneadigital.net/article/view/v15-n1-barranquero-meda>.
- El Universal (9 de agosto del 2020). Fuerza de Tarea Conjunta Omega denunció violación del DIH. <https://www.eluniversal.com.co/regional/sucre/fuerza-de-tarea-conjunta-omega-denuncio-violacion-del-dih-JN3249795>.
- Liga Contra el Silencio (29 de julio del 2020). El descontrol militar en Guayabero deja civiles heridos y el Estado calla. *070*. <https://cerosetenta.uniandes.edu.co/el-descontrol-militar-en-guayabero-deja-civiles-heridos-y-el-estado-calla/>.
- Molano, A. (1989). *Aproximación al proceso de colonización de la región del Ariari-Güejar Guayabero*. <https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/3025/05CAPI04.pdf?sequence=12&isAllowed=y>.

Buscar a los desaparecidos para curar la tierra indígena de San Lorenzo

Por Óscar Veiman Mejía Giraldo

Óscar Veiman Mejía Giraldo (Manizales, 1967). Tiene 27 años de experiencia como periodista en el diario *La Patria* de Manizales. Fue redactor general y deportivo, editor de la sección Regional y actualmente es editor del área de Educación y Salud. Ha sido colaborador en publicaciones de *Consejo de Redacción*.

Paola Andrea y Sergio Armando Gañán son dos jóvenes del Resguardo Ancestral de San Lorenzo, ubicado en Riosucio, Caldas. Tienen la misión de localizar los cadáveres de sus paisanos asesinados y desaparecidos durante el conflicto armado. La búsqueda la hacen con la Jurisdicción Especial para la Paz y en el camino también desentierren verdades de los conflictos que durante décadas han afectado al pueblo emberá chamí. A Paola Andrea y a Sergio los acompaña el médico tradicional Alexander Largo, quien hace un ritual para sanar la tierra cuando encuentran un lugar de enterramiento. Dicen que esa sanación terminará cuando se extraigan todos los cuerpos y se devuelvan a sus familias.

En el Territorio Ancestral de San Lorenzo, entre Riosucio y Supía (Caldas), todo se hace en comunidad. Hasta la búsqueda de sus desaparecidos. En el Cabildo Central, a dos cuadras del parque, el 11 de agosto del 2021 me encuentro con Paola Andrea Gañán y Sergio Armando Gañán, dos jóvenes cabildantes. En sus relatos reposan la memoria de un pueblo indígena agredido y la demanda de encontrar a quienes fueron desaparecidos por la fuerza durante el conflicto armado que tuvo una fuerte expresión en las montañas de esta comunidad indígena emberá chamí.

En los últimos años estos jóvenes se interesaron por la reparación de las víctimas. Luchan por recuperar la memoria sobre lo que sucedió, para que no se repitan hechos de violencia en un pueblo que arrastra miedos y secuelas psicológicas a causa del accionar de los actores armados del conflicto, quienes anduvieron por las veintiuna comunidades que integran San Lorenzo.

En el comedor del cabildo, Paola Andrea y Sergio Armando comienzan estas narraciones. Había pasado el mediodía y desde la cocina preguntan si queremos café. Sergio Armando sostiene un cuaderno con apuntes señalados cuidadosamente, de las capacitaciones que recibió de la Jurisdicción Especial para la Paz —JEP— y de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas —UBPD—, para que no se le escapen los detalles de la labor que debe cumplir para ayudar a encontrar a los indígenas del pueblo emberá chamí que fueron desaparecidos en San Lorenzo.

Paola Andrea inicia la conversación. Dice que San Lorenzo se levanta de ese dolor y en un intento por sanear el territorio ancestral debe guiar el camino para encontrar 125 cuerpos de jóvenes y adultos asesinados y enterrados en sus tierras.

Costa Rica es una comunidad de San Lorenzo. La habitan 230 personas y 56 familias. En este lugar no se habla de veredas ni corregimientos, son palabras que no existen. El reconocimiento jurídico de San Lorenzo como territorio ancestral le ha permitido organizarse y nombrarse como lo indica su tradición, en este caso como comunidades.

En Costa Rica vive Paola Andrea, quien tiene 28 años. Ella es la voz representativa de un grupo de jóvenes, cuyos ojos infantiles vieron en la década del 2000 el desfile de sujetos, vestidos de camuflado y con fusiles en las manos, que entraron a las casas y levantaron campamentos en los patios de las viviendas. Ninguno fue invitado ni bien recibido, porque perturbaban a la comunidad.

Paola Andrea participa en la búsqueda de los cuerpos de aquellos coterráneos suyos que fueron desaparecidos. También va detrás de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. “Con el cabildo comunitario hemos ido a mostrar posibles sitios donde se puedan hallar algunos cuerpos que generan impactos negativos en la siembra y quejidos de las almas, son almas que quieren ser guiadas, que están penando. No queremos que a nuestros niños les toque lo que vimos nosotros”, comenta.

Desde junio del 2021 la JEP custodia lugares donde posiblemente están enterrados los cuerpos de víctimas de desaparición forzada. Se hallarían en 18 puntos de interés forense, identificados por la comunidad y el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado —Movice— en San Lorenzo. En este proceso trabajan Paola Andrea y Sergio Armando.

Ellos recorren las comunidades en busca de testimonios que ayuden a localizar sitios puntuales o fosas donde posiblemente estén enterradas víctimas de la guerra. “Es algo que nos gusta hacer, pues nuestras comunidades quedaron muy afectadas psicológicamente. Uno siente secuelas de ver lo que les pasó a nuestros comuneros”, expresa Paola Andrea; también se refiere a la forma en que los asesinaban, pues eran mensajes contundentes para imponer el silencio a quienes quedaban vivos.

Paola Andrea y Sergio Armando, al igual que sus autoridades, ven como un logro que la JEP haya puesto sus ojos en San Lorenzo. Así, con este acompañamiento, han comenzado el tortuoso, pero esperanzador camino de hallar 125 cuerpos, de los 82.998 desaparecidos que dejó el conflicto en el país, según el Centro Nacional de Memoria Histórica.

En San Lorenzo la resistencia se engendra, se siente, es una actitud de los indígenas para vivir en comunidad, para reconocerse y reconocer el pasado que los impulsa en el presente y los proyecta en el futuro. Eso sienten Paola Andrea y Sergio Armando, quienes saben que los apuntes de sus cuadernos son un tesoro. Es un esfuerzo, de mucho estudio y voz para ser ejemplo y animar a la lucha colectiva en sus comunidades de la alta montaña, necesaria para encontrar a sus vecinos desaparecidos.

Sergio Armando es de Aguas Claras, una comunidad cercana al casco urbano. A su tío Jaime Antonio Gañán Largo lo reclutó la guerrilla cuando tenía quince años. “Los actores armados engañaban a los muchachos con promesas; como ellos no tenían oportunidades, se iban a sus filas y muchos no volvieron. Mi abuela murió en el 2020 esperando a mi tío”, cuenta Sergio. El joven, de 23 años, regresó del servicio militar obligatorio y ahora representa a su comunidad en la búsqueda

de la verdad y de personas desaparecidas que se presume están enterradas en distintos lugares del Resguardo Ancestral de San Lorenzo.

La JEP y la UBPD realizaron en febrero del 2021 una de las dos jornadas de identificación de parajes donde presuntamente se hallan restos humanos. El desafío es de talla mayor; por eso, se conformó un equipo amplio e interinstitucional. Participan la comunidad y organizaciones como el Centro de Estudios sobre Conflicto, Violencia y Convivencia Social (Cedat), de la Universidad de Caldas, el Movice, el Consejo Regional Indígena de Caldas —Cridec— y Équitas, una organización forense que asesora al Cridec.

Las comisiones caminan por cerros, quebradas, cultivos de pancoger, árboles frutales, potreros y trochas de este rincón caldense en la cordillera Occidental, con el propósito de identificar los puntos y desde la medicina tradicional ayudar al equilibrio de cada lugar. Cada ruta está acompañada por maestros espirituales, autoridades tradicionales, la Consejería Indígena, cabildantes, fiscales comunitarios, consejeros del Cridec y la Guardia Indígena.

El trabajo de Paola Andrea y Sergio Armando es previo. “La primera vez que los funcionarios vinieron a buscar los cuerpos se perdieron; para la segunda, se escogió un grupo más selecto”. La tarea es dispendiosa, pues la gente siente temor de ser involucrada en un proceso jurídico, solo por ayudar a localizar un sitio donde podría haber alguien enterrado. En esa labor de generar confianza han sido cruciales los cabildantes de las veintiuna comunidades. El itinerario de los muchachos los llevó a encuentros con personas que conservan la ilusión de que su ser querido esté vivo.

Sergio Armando coincide con Paola Andrea en que no quieren que la historia se repita. “Tengo satisfacción porque

la comunidad ha sido muy receptiva a la hora de brindar información. Nos dicen dónde, posiblemente, hay un familiar o una fosa común y siguen pendientes de noticias de ellos”. Ahora, los familiares de desaparecidos acuden, de manera ansiosa, a preguntarle a Sergio Armando ¿qué han dicho?, ¿qué se ha sabido? “La gente ya lo referencia a uno por este trabajo comunitario”, manifiesta. Sergio Armando ayuda a encontrar a familiares de otras personas, aunque de su tío Jaime Antonio no se sepa nada. Él no pierde la esperanza de encontrarlo algún día, por eso transforma esa ilusión en energía para ayudar a los demás.

El joven, como sus compañeros, tiene claro el pasado con la guerra que puso entre la espada y la pared a gente inocente. “Los señalaban de colaboradores, de un bando o del otro, solo porque pasaban cerca o simplemente porque los saludaban”. En la comunidad de Sisirrá, por ejemplo, vecinos aseguran que son trece los jóvenes, entre los quince y los dieciocho años, de los cuales no se volvió a tener noticia, tras el auge del reclutamiento en el 2001, el 2002 y el 2003. ¿Dónde estarán? La pregunta se la han hecho una y mil veces. La incertidumbre, en el caso de sospechas de fosas, es si los enterraron en su propio territorio o en otra parte del país, pues en departamentos como Chocó, Caquetá y Meta han hallado a comuneros de San Lorenzo.

Las edades no son datos de poca monta. Sergio Armando intuye que la falta de oportunidades los convirtió en blancos para los actores armados bajo la promesa de un empleo; luego fueron nombres de desaparecidos y después cifras. La disputa por mantenerlos en el recuerdo seguirá con ellos y con otros jóvenes por muchos años. “Dentro de cada comunidad hay estos procesos. En la mía (Costa Rica) hay 25 jóvenes que están en la Guardia Indígena y en reuniones comunitarias vamos

involucrando a los niños y niñas. Los que fueron más afectados son los que tienen la vocería en esos relatos colectivos”, explica Paola Andrea.

En el parque de San Lorenzo, luego de conversar con Paola Andrea y Sergio Armando, me encuentro a Rubén Darío Gañán, con quien minutos antes hicimos un ritual de armonización, en el sitio sagrado Aguas Saladas. Es el coordinador de la Consejería de Aplicación de Justicia Propia en el territorio ancestral. Rubén Darío acompaña a la JEP en este proceso que, reitera, es una conquista del movimiento indígena que pide verdad, justicia y reparación, sobre la base de su cosmovisión, sus creencias y sus costumbres. Comenta: “Por ahora son 18 puntos, pero hay más. Apenas la gente se está concientizando de que debe contar. Primero se sacaron 6 cuerpos de víctimas del conflicto. Solo uno era de San Lorenzo y otros (los cinco) de municipios de Antioquia”. Por las dinámicas de la guerra, en este territorio, corredor estratégico entre Chocó, Risaralda, Caldas y Antioquia, hay cuerpos de víctimas de orígenes diferentes al de esta comunidad. “Espiritualmente debemos seguir saneando nuestro territorio”, aclara Rubén Darío. La conversación con Rubén Darío concluye justo cuando suenan las campanas de la iglesia en una comunidad que también se reconoce con tradición católica.

Las heridas de San Lorenzo

Me siento a conversar con un hombre de rasgos indígenas y con la piel tostada por el sol. Sus manos son las de una persona de contextura fuerte. Se llama Luis Albeiro. Su apellido, como el de muchos por allí, es Gañán. En Riosucio son comunes los Tapasco, los Bueno, los Largo, y no necesariamente son familiares. Su voz me lleva por el pasado y el presente, por

lugares distantes y cercanos, y siempre bajo la sombra de un San Lorenzo aún herido.

Refiere que un sábado de 1999, a las seis y media de la tarde, la comunidad indígena de Pasmí sintió que la habían matado dos veces. Encerrados en la escuela, los habitantes escucharon los primeros disparos. Segundos después oyeron otras detonaciones. Cuando los guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia —FARC— les ordenaron que salieran del centro educativo, corroboraron las sospechas: los guerrilleros mataron a Reynaldo y a Aldemar Gañán Salazar. Los cuerpos quedaron distanciados por cincuenta metros y entre sus muertes hubo cerca de cincuenta segundos.

Es miércoles y San Lorenzo destella escenas de su cotidianidad. Los estudiantes del colegio están en clase, los camperos llegan de la zona rural, los comerciantes reciben a sus clientes, un grupo de jóvenes parqueados en moto conversan en una esquina donde funciona un taller de mecánica. Parece la vida de un pueblo que respira paz. Las voces de esta historia, sin embargo, dan cuenta de un pasado distinto, insisten en que es necesario abrir las páginas de dolor, también de dignidad en medio de la guerra, en busca de la reparación.

Luis Albeiro Gañán Salazar y sus dos hermanos eran tenderos reconocidos en la comunidad indígena Pasmí, caserío ubicado a tres kilómetros del centro poblado de San Lorenzo. Las casitas están rodeadas de cañaduzales, cafetales y cerros que son sagrados para el pueblo emberá chamí. Luis Albeiro se acomoda en su silla Rimax:

—¿Qué quieren saber para yo saber cómo les empiezo a contar? —pregunta; es una interpelación previa porque la historia del asesinato de sus allegados, su desarraigo y su estigmatización no está oculta, y la forma en que la narra interfiere en la jerarquía que les da a los hechos de dolor.

—Por donde usted quiera —respondo.

—Yo daría fe de lo que he vivido —complementa Luis Albeiro y comienza una narración que dimensiona las violencias que se perpetraron contra el pueblo emberá chamí y que le dejaron heridas que hoy intenta curar.

La tienda de Luis Albeiro, tras dos reconstrucciones, quedó convertida en la casa familiar. Su hogar sufrió el paso de todas las violencias armadas. De esas atrocidades tiene recuerdos frescos, que de tanto repetir los puede transmitir de manera cronológica y exacta.

Como dijo José Jairo Tapasco, gobernador del Resguardo Indígena de San Lorenzo, en la audiencia de la JEP del 16 y el 17 de julio del 2021, el pueblo emberá chamí fue una de las comunidades caldenses que más sufrió los embates de los actores del conflicto armado, quienes entre 1985 y el 2005 perpetraron desapariciones, reclutamientos y masacres. “Por eso, hemos reclamado que haya justicia. No se han saneado esas heridas”, comentó. Lo puso en cifras: de las 400 desapariciones reportadas en Riosucio hasta el 2021, 125 ocurrieron en San Lorenzo.

Sobre sus tiempos como tendero, Luis Albeiro dice: “Esto nació a raíz de que han entrado todos los grupos armados, sobre todo guerrilla”. Resume como si se tratase de una clase de historia local: “Primero pasó el M-19, no mucho, por allá en los años setenta. Luego la guerrilla del Ejército Popular de Liberación —EPL— en el 83 y el 84, inclusive reclutó a compañeros...”. Hace una pausa para asegurar que cada vez las cosas se ponían peor: “Me empezaron a llegar mensajes anónimos, según eso eran amenazas del ejército. Me ha gustado vender parva, gaseosa, granos. Me iba a surtir a Riosucio y decían que yo le traía comida al EPL”.

Un relato similar tiene Arbey Gañán, el consejero de derechos humanos del Cridec, quien contó durante la primera audien-

cia de la JEP en el territorio el 16 de julio del 2021 que “guerrilleros y paramilitares entraron a la zona por ser estratégica para sus desplazamientos y montañosa para el cultivo ilícito (plantaciones de coca). Los grupos armados de derecha e izquierda transitaron por aquí dejando un sinnúmero de víctimas indígenas”.

Acompañó a Luis Albeiro a Pasmí. Él se recuesta en un árbol, rodeado de hojarasca, en busca de sombra. Cuatro gallinas coloradas y una blanca escarban, buscan lombrices. “No puede decir uno que fue el gobierno, pero me hicieron desplazar. Me fui un domingo de 1986. Al martes me llamaron que habían ido a allanar mi casa, que porque yo tenía armamento. No encontraron nada”, dice Luis Albeiro, quien retoma su relato del conflicto armado en San Lorenzo.

Luis Albeiro volvió a su tierra en 1996, y resume sobre su retorno: “Uno es de donde es”. La casa donde funcionaba su tienda en Pasmí quedó abandonada tras su éxodo. Cuando regresó en 1996 pudo repararla con unos recursos. No obstante, el territorio todavía era violentado por los actores armados del conflicto: amenazas, desplazamientos, reclutamientos, panfletos con ultimátum, tomas y masacres seguían perpetrándose.

Luis Albeiro recuerda los hechos de 1999, cuando mataron a sus dos hermanos, y cuenta los presuntos motivos por los que los acribillaron. A Reynaldo, porque era colaborador del ejército; él viajaba a Manizales a consultas médicas, pero la guerrilla decía que en realidad iba a la ciudad para entregar información en un batallón del ejército. Y a Aldemar, porque intentó defender a su hermano mayor. “Eso nos dijo la guerrilla cuando nos reunió afuera de la escuela, cerca de los cadáveres”.

Esas muertes marcaron el segundo desplazamiento forzado de Luis Albeiro. En el primero lo señalaron de su colabora-

dor del EPL. En el 2000 la guerrilla lo obligó a irse de Pasmí porque, según ellos, así como su hermano Reynaldo, era informante del ejército. “Me fui para Armenia, inclusive allí me cogió el terremoto del Eje Cafetero. Uno en el éxodo sufre mucho, porque uno no puede venir, y más con hijos pequeños; yo tenía tres”.

Luis Albeiro respira profundo y reflexiona sobre una realidad que va de la mano con el drama de los indígenas y de miles de campesinos colombianos. “Éramos humildes, uno no dice que pobre porque hay gente en condiciones peores, pero no había plata”. A su memoria llega el martes en que dejó por segunda vez su tierra, aconsejado por su familia y por vecinos que ya olfateaban la tragedia. En la tarde del lunes vieron a dos guerrilleros rondando la casa. Al día siguiente de su partida mataron a su tío, quien también estaba amenazado.

Luis Albeiro camina por un jardín y llega a la huerta casera. En medio de cultivos de plátano, yuca, café y hortalizas saca frases que aportan nuevos contextos de este San Lorenzo. “Por acá también estuvieron los paras, no asentados, pero estuvieron”. Desde el 2010, en su segundo retorno a Pasmí, ha escuchado que los pobladores del territorio que sufrieron por los desplazamientos, las desapariciones, las amenazas y los asesinatos deben ser reconocidos como víctimas del conflicto armado. Es una opinión a la que se adhiere.

Sus palabras son respaldadas por el gobernador José Jairo Tapasco: “Desde hace tiempo hemos querido que las víctimas del conflicto sean reparadas por parte del Estado”. La razón la redondea Arbey, de derechos humanos del Cridec: “Es un conflicto que no nos ha dejado avanzar en el desarrollo étnico, político, cultural y espiritual”.

Luis Albeiro se sienta en su casa en Pasmí, en un corredor adornado por geranios. Reposa y echa otra mirada atrás, al

pasado difícil. “Hubo un momento de tanta intimidación que a los viejos les decían que si votaban por Uribe los mataban o los reclutaban también, que así no combatieran los ponían de rancheros (cocineros)”.

La guerra se degradó tanto que los indígenas no podían salir ni a la esquina: “Nuestras reuniones comunitarias y nuestros bailes en los kioscos quedaron prohibidos. Las FARC hacían lo que querían, de la tienda se me llevaban los enlatados, gaseosas. Y nos decían: ‘Ustedes por aquí no han visto nada’. Uno quedaba aterrado, pues decíamos: ‘si el gobierno no es capaz con sus armas, menos nosotros solos e indefensos’”.

Luchas ancestrales

Un camino sin pavimentar conduce desde Pasmí, donde vive Luis Albeiro, hasta la zona urbana de San Lorenzo. Luego, una carretera serpenteante lleva hasta La Herradura, en la conexión del territorio con la troncal de Occidente, una vía que conecta a Medellín, Manizales, Armenia y Cali. Un paneo desde allí muestra un San Lorenzo de laderas forradas en café, caña y plátano, primeros renglones productivos de los indígenas emberá chamí de esta región.

La resistencia de los emberá chamí ocurre desde hace varios siglos. Los títulos de la comunidad datan de la época de la colonia española, en 1627, y se perdieron en las luchas de independencia a principios del siglo XIX. El 18 de marzo de 1835, cuenta la historia reseñada por el Cridec en su página web, se expidió un nuevo título, ratificado en 1889.

Sin embargo, como recuerda Arbey Gañán, consejero de derechos humanos del Cridec, en 1943 los actores políticos disolvieron los resguardos de San Lorenzo y de Escopetera Pirza. En adelante, el pueblo indígena emberá chamí de Cal-

das emprendió una lucha para exigir reconocimientos étnicos y territoriales. “Pasaron treinta años para que se volviera a hablar de comunidades indígenas”, expresó Gañán en la audiencia de la JEP en el territorio, en la que participaron representantes del Cabildo Central de San Lorenzo.

Arahugo Gañán es otro líder indígena visible en Caldas: ocupó una curul en la Asamblea Departamental en el periodo 2009-2012, fue presidente del Cridec y gobernador del Resguardo Indígena de San Lorenzo. “Buenos días a todos”, saludó y sonrió a su llegada a la sede del Cabildo Central, en el centro poblado de San Lorenzo, una casa para el encuentro de los indígenas, el mismo lugar donde hablé con Sergio Armandó y Paola Andrea.

A este lugar entran y salen constantemente comuneros, miembros y dirigentes de la Guardia Indígena. En la cocina preparan café para ofrecerle a cualquier persona que llegue, es un hogar para todos. Arahugo, un apasionado al hablar de su pueblo, sus costumbres, sus luchas y sus resistencias, recibe un café en aguapanela. Se dirige al tambo, un espacio construido en guadua y equipado con sillas, para atender a quienes necesitan de su ayuda como dirigente.

Arahugo fue una de las voces fuertes durante la audiencia de la JEP e hizo en ese momento una de las reflexiones más potentes que dan piso sólido a su lucha: “Mucho antes de que el hombre blanco llegara a nuestras tierras, nosotros estábamos aquí. Hemos cedido nuestros territorios para que ellos puedan vivir y convivir en este lugar que se llama San Lorenzo, Riosucio, Colombia. Es el hombre blanco el que no ha entendido. Hoy compartimos la preocupación que hay por la expansión y continua intención de quitarnos nuestras tierras”.

Arbey, el consejero de derechos humanos del Cridec, hace una exposición rápida de las consecuencias y los desenlaces

de estos sucesos: “Eso hizo que estos territorios fueran ocupados por colonos llegados de Antioquia; entre ellos, miembros del Ejército y de la Iglesia católica. En la recuperación de esas tierras, nuestros líderes empezaron a ser perseguidos y estigmatizados por quienes gobernaban el país”.

Las circunstancias obligaron a que muchos se refugiaran en las parcialidades y los asentamientos de Cauromá, La Trina y Damasco. “Hubo persecuciones a muchos de nuestros dirigentes que hoy no están, que nos acompañan con sus espíritus y nos dan valentía y fuerza para seguir luchando por nuestra dignidad”, expresa Arbey.

Los anhelos por la recuperación territorial han tenido su respaldo en el Cridec, consolidado en los años ochenta, justo cuando en el país tomaba fuerza el conflicto armado y a la vez surgían movimientos sociales. Así, la resistencia contra el exterminio y en busca de autonomía tomó un carácter regional, nacional e internacional.

El Cridec agrupa 17 cabildos del departamento. Se basa en los principios de unidad, territorio, cultura y autonomía. La organización resalta a sus mayores Gabriel Campeón, Gilberto Motato, Noé Motato, Luis Ángel Chaurra, Clímaco Marín, Jesús Antonio Gañán, Faustino Rotavista, Eulalia Yagarí y Silvio Tapasco, por fomentar la unidad necesaria para fortalecer en ese momento histórico (los años ochenta y comienzos de los noventa) la recuperación de las tierras desde los ámbitos jurídico, territorial, cultural e identitario.

Arahugo está seguro de que esa manera de pensar ha tenido un costo, materializado en violencias, persecuciones y estigmatización. Ilustra la situación con el caso del docente Rey María Salazar, quien en agosto de 1988 fue capturado por militares en un retén y posteriormente asesinado. Amnistía Internacional reseñó en 1990 el caso del profesor, junto con el

de otros líderes, en el documento llamado *Colombia: violaciones de derechos humanos contra miembros de comunidades indígenas en el departamento de Caldas*. “El profesor fue castrado, chuzados sus dedos con agujas, fue un mensaje para quienes pensaban de manera diferente”, explica el exgobernador indígena.

La detención, la tortura y el asesinato de Rey María enviaron un mensaje de silencio y terror a la comunidad. Siete años después, el Consejo de Estado emitió un fallo condenatorio en contra de la Nación, que determinó que la responsabilidad directa es del mayor del ejército José Vicente Urbina Sánchez, adscrito a la Octava Brigada con sede en Armenia.

Movimientos

El 13 de marzo de 1988 se materializó un suceso histórico para la democracia colombiana: se celebró la primera elección popular de alcaldes, gobernadores, concejales y diputados. Antes éstos cargos eran escogidos a dedo, como dicen popularmente, por el presidente y los gobernadores.

Los indígenas vieron la posibilidad de entrar en la dinámica administrativa de su país por vía de la participación electoral, pero encontraron un camino largo y sangriento. “Fuimos muy buenos para ellos (los blancos) hasta que decidimos participar en el sagrado derecho a elegir y ser elegidos”, recuerda Arahuco.

En 1988 denunciaron ante Amnistía Internacional las violaciones a los derechos humanos, luego de que torturaron y mataron a Gilberto Motato, candidato a la Alcaldía de Riosucio, en un caso ocurrido el 22 de marzo de ese año. El 9 de abril del 2002 ejecutaron a la gobernadora del resguardo de Nuestra Señora de la Candelaria de la Montaña, María Fabiola Largo, quien también aspiraba al cargo.

Otro hecho brutal contra las aspiraciones políticas de los indígenas de Riosucio ocurrió en La Herradura, un paraje de la troncal de Occidente, entre Supía y Riosucio, donde está la entrada a una carretera despedazada que conduce a San Lorenzo y que es una muestra de la negligencia y el olvido de la Gobernación de Caldas, institución que apenas en el 2021 anunció la inversión de mil quinientos millones de pesos destinados a reparaciones sobre esa vía, luego de una denuncia del diario *La Patria* de Manizales.

En La Herradura, el 8 de junio del 2003, paramilitares e integrantes del Ejército mataron a Gabriel Ángel Cartagena, una de las esperanzas de los indígenas caldenses, cuando “alrededor de las 13 horas [según un artículo periodístico de *Verdad Abierta*] a la altura del paraje La Herradura, unos hombres vestidos de militar, entre los cuales había varios de civil, atacaron el vehículo con armas de largo alcance y granadas”. En el carro igualmente se transportaban Hugo Tapasco, Diego Suárez y Fabio Hernán Tapasco, quienes también fallecieron en los hechos. Gabriel Ángel Cartagena, miembro del Partido Comunista Colombiano (PCC), se dirigía hacia San Lorenzo en una visita como candidato a las elecciones para la Alcaldía de Riosucio.

Arbey Gañán, desde el Consejo de Derechos Humanos del Cridec, señala que con las muertes de Gilberto Motato y María Fabiola Largo, del resguardo de La Montaña, y de Gabriel Cartagena, de Cañamomo Lomapieta, le truncaron a la comunidad la posibilidad de alcanzar puestos en espacios de representación; tales hechos son una muestra de que los indígenas que aspiraban a un cargo de elección popular eran estigmatizados y perseguidos. “Ellos tres nos representaron en esos escenarios, además de numerosos líderes representativos, cabildantes, profesores, lideresas y médicos tradicionales, también perseguidos”, explica Arbey.

La situación a comienzos de la primera década del siglo XXI llevó a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictara una medida cautelar, vigente desde el 2002, con el fin de reforzar y garantizar la seguridad de los dirigentes indígenas durante los periodos electorales. “Eso demuestra que el conflicto no es de ahora”, reflexiona de nuevo Arbey.

A pesar de la persecución, la estigmatización y los asesinatos, la lucha política del movimiento indígena de Caldas ha dado sus frutos, por ejemplo, con las elecciones de Darío Edgardo Tapasco como alcalde de Riosucio en el 2003, Abel David Jaramillo en el 2011 y Bernardo Arley Hernández en el 2015, tras vencer en las urnas a los candidatos de partidos tradicionales como el Liberal, el Conservador y el de la U. Asimismo, con curules en el Concejo del municipio, en la Asamblea Departamental de Caldas y en la Cámara de Representantes.

La violencia política contra el pueblo indígena emberá chamí todavía tiene una sombra en el territorio que se expresa en la estigmatización y que les preocupa porque puede desatar acciones contra los cabildantes. Por eso los indígenas de San Lorenzo combaten la violencia denominada simbólica, que vive en las palabras y que se reproduce con expresiones como *cuna de guerrilleros*, que desconoce la historia de dolor y que reproduce y perpetúa el racismo.

Un hecho reciente, ocurrido el 4 de mayo del 2021, demuestra que la sombra de esa violencia contra los indígenas sigue presente. En una sesión ordinaria del Concejo de Riosucio, Álvaro Antonio Guapacha, concejal por el partido Cambio Radical, señaló a los pueblos indígenas del municipio como terroristas por participar en las movilizaciones del 28 de abril en la Plaza de la Candelaria.

Las autoridades tradicionales indígenas de Caldas denunciaron el discurso por considerar que contenía manifestacio-

nes de estigmatización, racismo y discriminación. El 14 de julio hubo una audiencia de conciliación y se acordó que el concejal se disculparía y se retractaría de lo dicho, pero no ocurrió así.

Saneando el territorio

El centro forense integral Équitas, que lleva 17 años al servicio de la investigación sobre la violación de derechos humanos, consolidó un listado de 125 personas desaparecidas en San Lorenzo, incluidas dentro de las 7.246 de Caldas y las 482 de Riosucio.

Diana Arango, la directora ejecutiva de Équitas, expuso en la audiencia de la JEP del 16 de julio las características del fenómeno: 119, de las 125, siguen desaparecidas; 91 están sin clasificar; 26 fueron forzadas y 2 corresponden a reclutamientos ilícitos. El 25 % de las desapariciones en San Lorenzo ocurrieron entre el 2000 y el 2009; y el 15 %, entre 1980 y 1989, es decir, en la época de los acontecimientos relatados por Luis Albeiro, Paola Andrea, Sergio Armando y las autoridades del resguardo. Llamó la atención en un aspecto fundamental, relacionado con lo que califica como altos niveles de impunidad: “Tanto para el departamento de Caldas, como para los municipios no se identifica en más del 70 % el perpetrador de los hechos”.

En la salida de San Lorenzo está el cementerio. Líderes indígenas le informaron a Équitas sobre cuerpos inhumados de personas no identificadas, principalmente en hechos que ocurrieron en los periodos de violencia que limitaron e impidieron los procedimientos técnicos de criminalística y los análisis médico-legales pertinentes.

Estos horrores de las amenazas, los reclutamientos, las desapariciones, las tomas, las detenciones ilegales, las masacres, la violencia política y la estigmatización han estado y están

en la memoria de la lucha colectiva y eterna de San Lorenzo: una violencia sistemática que, según el médico tradicional Alexander Largo, ha enfermado la *dana eoro* (madre tierra). Con plantas de ruda, altamisa, salvia y rituales el médico Alexander trata de sanear el territorio donde se encuentran los espíritus de 125 cuerpos, aunque podrían ser más. Claman por una ceremonia que les permita trascender a una dimensión no terrenal.

Por un sendero de Aguas Claras, donde vive Sergio Armando, el muchacho que trabaja en la búsqueda, da pasos el médico tradicional, siempre hacia arriba, en busca de Agua Salada, un sitio sagrado. A medida que uno se adentra en la cuesta, con árboles, manantiales y cultivos a lado y lado, comprende el significado y la dimensión de las palabras emberá-chamí: gente de cordillera.

Alexander es el consejero mayor de la Escuela de Medicina Jaivia (espíritus buenos), que ya suma 22 graduados. En la organización los médicos son los guías y vigilantes de la armonía y la salud. Ellos, con su sabiduría heredada de maestros antiguos como Hermenegildo Gañán, han percibido que el conflicto armado y todas las violencias dejaron una tremenda carga de mala energía en el territorio ancestral. “Donde hay enterrados muertos de la violencia no pelechan el plátano, la yuca, el maíz, la caña, la guadua, es como algo seco”, explica Alexander.

Para cada lugar y para cada víctima hay un ritual con semejanzas y diferencias, y se hacen con el propósito de contrarrestar la mala energía que emerge de allí. El médico saca ruda, salvia, altamisa, hace sahumeros, hasta ahí todo es igual. Lo que cambia son algunos rezos y rituales particulares, que guardan en secreto, para cada sitio y para cada espíritu, y que solo los puede hacer un mayor con experiencia y sabiduría, como Alexander.

Paola Andrea, la joven cabildante de Costa Rica, ha recogido testimonios que dan cuenta de apariciones y ruidos misteriosos en patios, cultivos y pasos en caminos, donde supuestamente hay enterradas víctimas del conflicto. “Escuchamos cosas, vemos cosas, creemos que hay algo aquí”, le comentan a la lideresa. Esas manifestaciones para los indígenas significan que un espíritu deambula por ahí porque aún no ha sido enterrado con el ceremonial respectivo. “Algunos se atemorizan al pasar por ciertos lugares”.

Aguas Saladas tiene una cascada cristalina. Su vecino es un chorro de agua salada. Allí los indígenas reciben un baño del médico Alexander para llenar sus espíritus de energía buena, de armonía de los cuerpos humanos con los elementales de la naturaleza. El médico señala con el dedo, en orden, los cerros: Buenos Aires, Viringo y San José. “Estamos blindados. El Buenos Aires nos protege, por él no han vuelto los conflictos y ningún grupo armado”, dice Alexander. El blindaje energético del resguardo lo complementan la desembocadura donde se encuentran los ríos Aguas Claras y Las Estancias.

La misión de los médicos es identificar los sitios de ocultamiento de los cuerpos y sanear el territorio. Su labor es reconocida por la JEP. El gobernador del resguardo, José Jairo Tapasco, explica que fueron tres años de acercamientos y reuniones con la JEP y la UBPB hasta llegar al proceso actual que permite continuar el camino de reclamación por las víctimas masacradas.

Las primeras búsquedas con los organismos forenses dejaron claro que sería necesaria la participación de la comunidad y el reconocimiento de esa labor espiritual que cumplen los médicos indígenas. El paisaje ha cambiado, la vegetación no es la misma y hallar fosas es complicado. Por la topografía montañosa del territorio ancestral de San Lorenzo los fun-

cionarios se perdían o la misma naturaleza no quería que los cuerpos fueran encontrados sin que primero se sanara la tierra y se devolviera el orden a la vida natural. Por eso, resulta clave el papel de jóvenes como Paola Andrea y Sergio Armando, y de médicos como Alexander.

Una experiencia que ya es leyenda ocurrió en El Tablazo, un caserío en la parte alta de San Lorenzo, cerca de Costa Rica, donde la violencia golpeó duro. La JEP, los médicos tradicionales y el resto del personal viajaron al lugar en una jornada radiante de sol. Se presumía un hallazgo importante. Sin embargo, el día y las cosas cambiaron cuando se acercaron a la zona. Truenos, rayos y lluvia se desataron justo cuando arribó la delegación. “Nos tocó devolvernos, nos estábamos perdiendo, tuvimos que salir por Caramanta (Antioquia)”, recuerda el coordinador de la Consejería para la Aplicación de Justicia Propia, Rubén Darío Gañán.

Según Alexander, el médico tradicional, estas situaciones tienen una explicación: “Esos sitios secos, con mala energía, pueden ser indicador del espíritu para decir ‘estoy acá’. Unos piden que los saquen y otros que no. También depende de la manera en que haya muerto o la manera que hubiese sido la persona. Los de muerte natural se dejan sacar más fácil”.

Ellos interrumpen esta vida porque no hay un trascender al mundo de los espíritus, siempre estarán ahí hasta que no sean orientados por un médico. El espíritu debe guiarse porque se alimenta de la comunidad, irradia energía negativa. Costa Rica en la parte alta y La Línea están cargados de esa atmósfera. “Cualquiera que tenga capacidad de percepción puede sentir esa energía, siente angustia y necesidad de abandonar ese sitio. Incluso esa energía cambia a la comunidad, hay conflictos, desunión. Es similar a sacar oro. Usamos conjuntos y liberación para contrarrestar o parar esa energía”, reitera Alexander.

Es una labor que hace que el proceso de recuperación de cuerpos sea especial en San Lorenzo, porque la JEP reconoce que sin el saber ancestral no se puede ingresar ni armonizar el territorio. Hasta el cierre de esta historia aún no habían fijado fecha para la primera exhumación.

Mientras esto ocurre, Sergio Armando Gañán y Paola Andrea Gañán, jóvenes líderes de Costa Rica y Aguas Claras que ayudan con la búsqueda de desaparecidos; Luis Eduardo Gañán, un viejo habitante de San Lorenzo que comparte su memoria oral de la barbarie; las autoridades; los habitantes y el médico Alexander Largo buscan los caminos para sanar las heridas del territorio ancestral de San Lorenzo.

Referencias

- Amnistía Internacional (1990). *Colombia. Violaciones de derechos humanos contra miembros de comunidades indígenas en el departamento de Caldas en 1988*. <https://www.amnesty.org/es/wp-content/uploads/sites/4/2021/06/amr230611990es.pdf>.
- Baudó Agencia Pública (2019). *Riosucio. Memorias en resistencia*. <https://baudoap.com/riosucio-memorias-en-resistencia/>.
- Jurisdicción Especial para la paz —JEP— (2021a). Audiencia territorial: Trámite de medidas cautelares en el resguardo indígena San Lorenzo (Caldas). <https://www.youtube.com/watch?v=w6-PIw5DtA>.
- (2021b). Sesión dos, audiencia territorial: Trámite de medidas cautelares en el resguardo indígena San Lorenzo (Caldas). <https://www.youtube.com/watch?v=qdktR4t11sk>.
- Jurisdicción Especial para la paz —JEP— (s. f.). JEP avanza en estudio de medidas cautelares en el resguardo indígena de San Lorenzo. [https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/Paginas/JEP-avanza-en-estudio-de-medidas-cautelares-en-el-resguardo-ind%C3%ADgena-de-San-Lorenzo-\(Caldas\).aspx](https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/Paginas/JEP-avanza-en-estudio-de-medidas-cautelares-en-el-resguardo-ind%C3%ADgena-de-San-Lorenzo-(Caldas).aspx).
- La Patria (2016). Denuncian destrucción de monumento a líderes sociales asesinados. <https://www.lapatria.com/sucesos/denuncian-destruccion-de-monumento-lideres-asesinados-330533>.

- Organización Movimiento de Víctimas (s. f.). Claves para el esclarecimiento del genocidio del pueblo emberá chamí de Riosucio. https://movimientodevictimas.org/infografias_interactivas/infografia1.html.
- Registraduría Nacional del Estado Civil (s. f.). Resultados de elecciones locales 2003, 2010 y 2014. www.registraduria.gov.co.
- Universidad de Caldas (16 de junio del 2021). Primera audiencia étnica de la JEP sobre desaparición forzada. <https://www.ucaldas.edu.co/portal/primera-audiencia-etnica-de-la-jep-sobre-desaparicion-forzada/>.
- Verdad Abierta (28 de agosto del 2009). Gabriel Ángel Cartagena, gobernador indígena de Caldas. <https://verdadabierta.com/gabriel-angel-cartagena-gobernador-indigena-de-caldas/>.

Los luceros cantan en el barrio Nuevo Milenio

Por Carlos Alberto Murillo Porras
y Jorge Escobar Banderas

Beto Murillo (Carlos Alberto Murillo Porras). Tumaqueño, comunicador social - periodista de la Universidad del Quindío. Interesado por la historia latinoamericana y la diáspora africana. Director de *Play Tumaco*, un medio alternativo en redes sociales que busca hablar de los aspectos positivos del Pacífico sur colombiano.

Jorge Escobar Banderas (1997). Periodista inmigrante. Cursó estudios en comunicación social - periodismo en Venezuela y Colombia. Ha escrito para *Hechoen Cali.com*, *Realidad 360* y *El Espectador*. Actualmente ejerce de forma independiente para medios alternativos como la agencia internacional *Pressenza*. Ha liderado ejercicios de memoria en diferentes barrios de Tumaco, a través de clubes de lectura, murales y cineforos.

En el barrio Nuevo Milenio de San Andrés de Tumaco, Nariño, los jóvenes viven en medio de un contexto hostil: los grupos armados los reclutan o los matan en medio de las disputas por un territorio estratégico para el narcotráfico; y el Estado hace presencia con la fuerza pública, pero no con las oportunidades educativas y económicas que necesitan para satisfacer sus necesidades. Allí, entre tantas dificultades, Neisy Tenorio, Pedro Luis Dájome y Leonardo Castro crearon AfroMíTu, un grupo de rap que denuncia esa realidad y cuestiona los poderes que alimentan las violencias en ese municipio del Pacífico colombiano.

En el 2001, Sonia Yaneth de la Cruz Quiñones, cansada de los problemas familiares, abandonó su casa ubicada en un caserío en la ribera del río Guajalo y emprendió el viaje por el afluente que desemboca en el océano Pacífico, con sus cuatro hijos: Albeiro, Mabis, Alexis y Leonardo Castro, quien para ese momento tenía cinco años.

Llegaron al barrio Nuevo Milenio, un asentamiento informal en la zona continental de Tumaco, que en esos primeros años del siglo XXI crecía a medida que llegaban campesinos afrodescendientes que huían de la guerra entre paramilitares, guerrilleros y soldados de la fuerza pública. Sonia Yaneth, preocupada por la nueva realidad a la que se enfrentaban sus hijos, les pidió que se quedaran en casa para evitar problemas.

Leonardo recuerda que en esos primeros días le obedeció a su mamá porque sentía miedo, pero la curiosidad natural de los niños lo impulsó a explorar las calles. Y entonces se dio cuenta de que su nuevo mundo era completamente distinto a la zona rural y selvática donde vivió sus primeros años de vida, y se sintió incómodo.

Leonardo pasaba los días con la familia, al cuidado de su mamá, en las orillas del río, jugando por los potreros y entre los árboles de la selva, pues en la vereda no había ningún centro educativo al que pudieran asistir los niños pequeños. Por eso, él se sorprendió cuando entró a la escuela, donde se vio obligado a compartir con otros niños; una situación que le pareció agobiante.

En Tumaco también descubrió el precio de las cosas. A diferencia del campo, donde las comunidades tienen a la mano los alimentos y hacen intercambios para complementar la dieta, en la pequeña ciudad se dio cuenta de que todo costaba plata. “El mundo empieza a tener valor. No es malo, pero yo sentía que estaba perdiendo algo”, recuerda. A veintiún años de su llegada a Tumaco, Leonardo cree que su infancia lo llevó a conocer el desarraigo, la nostalgia de no pertenecer al lugar que se habita. “Yo creo que para nadie es un secreto que todos los que nos desplazamos vivimos una realidad totalmente diferente”.

La historia de Leonardo es similar a la de muchos de sus vecinos del barrio Nuevo Milenio. Por ejemplo, Pedro Luis Dájome, de 23 años, nació en el casco urbano de Tumaco, pero cuando era un niño su familia se fue a vivir a las orillas del río Mejicano, un cuerpo de agua que se escurre desde las montañas del Macizo Colombiano y entrega sus aguas al Pacífico en territorio tumaqueño.

En las zonas donde se criaron Leonardo y Pedro Luis las casas son de madera, los pobladores afrodescendientes se dedican a la pesca y sobreviven con el cultivo de sus propios alimentos. Son caseríos ubicados en medio de una gran riqueza natural, pero marginados por el Estado, que no atiende las necesidades de sus habitantes y solo llega con sus fuerzas armadas para hacer la guerra a las insurgencias y a los cultivadores de coca. Allí no hay centros de salud, las pocas carreteras son de tierra y el acceso a la educación es un lujo.

En el 2011, Pedro Luis debía iniciar sus clases de secundaria, pero la escuela de la vereda no ofrecía ese nivel de formación. Por eso, cuando tenía doce años, su mamá se vio obligada a dejar la zona rural y a buscar un mejor futuro para él en el casco urbano de Tumaco. La familia, de la que eran parte otros ocho hermanos, quedó dividida: “Fue un cambio

muy drástico para mí, porque desde ese entonces como que mi familia empezó a esparcirse”, cuenta.

Pedro Luis recuerda esos primeros meses en Tumaco como una época difícil: “Era un nuevo lugar y no conocía a nadie. Uno tiene que adaptarse a nuevas personas. Recuerdo que me criticaban por el acento, porque uno viene del campo y habla así todo boqueado”. Ese cambio de la ruralidad a la ciudad despertó en Pedro Luis muchas inseguridades que en ocasiones le hicieron cuestionarse si sería capaz de perseguir sus metas.

El barrio Nuevo Milenio, estigmatizado desde su fundación debido a que la administración municipal de Tumaco lo consideró ilegal, por tratarse de un sector poblado por campesinos que llegaron desplazados por la guerra, fue el lugar en el que las vidas de Pedro Luis y Leonardo se cruzaron.

Las violencias en Tumaco

En los últimos años del siglo xx y los primeros del xxi se vivió una crisis humanitaria en el Pacífico nariñense por cuenta de las violencias perpetradas por el Comando Conjunto Occidental de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia —FARC—, el Ejército de Liberación Nacional —ELN—, el bloque Libertadores del Sur de las Autodefensas Unidas de Colombia —AUC—, grupos del crimen organizado dedicados al narcotráfico y las fuerzas armadas del Estado.

Según estadísticas de la Unidad para las Víctimas, entre 1987 y el 2018, por causa del conflicto armado, 141.021 habitantes fueron expulsados de Tumaco y obligados a desplazarse hacia otras regiones de Colombia; a la vez, este municipio recibió a 108.612 víctimas del desplazamiento forzado.

El barrio Nuevo Milenio de Tumaco emergió a finales de los años noventa sobre los esteros y los manglares ubicados

en la zona continental de la ciudad, específicamente a orillas del estero del río Rosario. Allí encontraron refugio cientos de familias que huían de la guerra que se vivía en la ruralidad. Sus habitantes recuerdan que en esos primeros años sufrieron muchas carencias: no tenían electricidad, acueducto ni alcantarillado, las vías no estaban pavimentadas y toda la gente estaba en absoluta pobreza. El barrio recibió su nombre por el momento en el que surgió, en la antesala del nuevo milenio. Allí se construyeron cerca de mil quinientas viviendas, la mayoría hechas en madera siguiendo el patrón arquitectónico de los pueblos afrodescendientes del Pacífico colombiano.

Según el último censo del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), para el 2018 en Tumaco vivían 257.052 personas, de las cuales el 81 % se reconocían como afrodescendientes y el 9 % como indígenas. Las cifras de esa entidad estatal muestran también que por lo menos el 54 % de los tumaqueños viven en situación de pobreza multidimensional. Eso quiere decir que más de la mitad de los habitantes de Tumaco tienen dificultades para acceder a los servicios públicos, de salud, de educación y a una vivienda propia.

En los primeros años del barrio Nuevo Milenio la precariedad de la vida contrastaba con la voluntad y la creatividad de sus habitantes, quienes desde su fundación se encargaron de resolver los problemas cotidianos y demandar al Estado la satisfacción de sus derechos. Los niños, por ejemplo, convertían los puentes de madera en trampolines desde donde se lanzaban al estero; cuando bajaba la marea usaban las orillas como canchas de fútbol, y los manglares eran un lugar de aventura y diversión.

A los desplazados que llegaron al Nuevo Milenio los consolaba tener cerca el estero y el mar, debido a que no perdían por completo el contacto con el agua ni con la pesca, una de las principales actividades económicas de la vida rural. Además,

en los mismos terrenos donde construyeron sus casas dejaron espacios para sembrar alimentos como yuca, plátano y frutas.

Pero por esas mismas aguas que les daban felicidad llegaron los grupos armados interesados en controlar las zonas urbanas de Tumaco, en especial aquellas conectadas con el mar, que servían de tránsito para las economías ilegales y, en momentos de confrontación, eran puntos estratégicos para la guerra.

Fue a principios del 2000 que a barrios periféricos como Nuevo Milenio llegaron los mismos actores armados que expulsaron del campo a la población: las FARC, el ELN, el bloque Libertadores del Sur de las AUC y bandas dedicadas al narcotráfico. Los jóvenes fueron los principales afectados por la presencia de estos grupos, pues eran reclutados y también eran las principales víctimas de los asesinatos.

En esos años, los grupos armados empezaron a arrojar a los esteros y los manglares los cuerpos de las personas que asesinaban. Según estadísticas del Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Presidencia de la República, entre 1998 y el 2003, hubo 534 homicidios en Tumaco.

Y veinte años después la violencia no cesa. Ni siquiera tras las negociaciones entre el Estado y los grupos armados ilegales. En el 2005, cuando se desmovilizó el bloque Libertadores del Sur de las AUC, grupos residuales de paramilitares que se dedicaban al narcotráfico se enfrentaron por el control del negocio ilegal. Entonces los homicidios aumentaron.

En el 2015, cuando las FARC decretaron un cese unilateral al fuego como parte de las negociaciones con el Estado, hubo una disminución considerable de los homicidios en Tumaco. Ese año se presentaron 130 casos, cien menos que en el 2014. Pero tras la firma del Acuerdo Final de Paz en noviembre del 2016, grupos disidentes que se autodenominaron como Guerrillas

Unidas del Pacífico, Resistencia Campesina y Frente Oliver Sinisterra se enfrentaron por el control del territorio y del negocio de la cocaína, y los homicidios nuevamente se dispararon.

En distintos momentos de su vida Leonardo ha sufrido angustia y desesperación. Recuerda que cuando era niño, en las noches, sonaba un disparo y de un momento a otro las calles del barrio se quedaban vacías. Afirma que ante tales situaciones aprendió a cuidarse: “Los primeros días era meterse debajo de la cama o irse hacia el baño. Una vez estábamos jugando con unos amigos afuera del barrio, por la primera entrada, donde había una pileta, un pozo. Estábamos ahí sentados y de un momento a otro eso era ¡corre que te llevo!, todo el mundo para su casa”. Leonardo confiesa que a raíz de situaciones como esas la comunidad empezó a normalizar la violencia: “Decíamos: ‘¿estos manes no se cansan?’”.

Pedro Luis, por su parte, afirma que esos enfrentamientos entre bandas le han afectado de manera directa: “He perdido gente, amigos; de hecho, a un amigo que me enseñó a tatuar lo asesinaron y eso es una realidad muy triste”. Además, considera que se han hecho muy pocas acciones para prevenir situaciones como esas. “Hay gente que no hace nada. Y al que está haciendo cosas no lo dejan. Lamentablemente esa es la realidad que se vive aquí en Tumaco”. Sin embargo, Pedro Luis se niega a perder la esperanza y mantiene la fe puesta en el futuro para que las cosas puedan cambiar: “Quisiera que mi barrio mejorara, que la gente se llevara bien, que hubiera más amor entre los vecinos y que ojalá mejore todo algún día”.

La violencia ha sido una de esas cicatrices que han marcado la vida de los habitantes del Nuevo Milenio. Pero en medio de ese difícil panorama, en el barrio se impulsó una iniciativa que busca mejorar el bienestar de los vecinos a través del arte, la cultura y la música.

Un oasis

En el 2007, la congregación católica de Misioneros Combo-nianos llegó a Nuevo Milenio con la intención de ofrecer alternativas a los jóvenes, quienes vivían en medio de las violencias que azotaban al barrio y a Tumaco. Partiendo de algunos procesos organizativos que existían dentro de la comunidad, el grupo religioso impulsó la construcción de un espacio físico en el que querían acercar a los muchachos al arte.

Así nació el Centro Afro Juvenil de Tumaco, un lugar que ofrece a hombres, mujeres, niños, niñas y adolescentes formación en música, circo, teatro, danzas ancestrales y elaboración de murales. También se imparten clases sobre la gastronomía local y quienes llegan a la casa se sumergen en el mundo de los procesos sociales liderados por la juventud.

La sede del centro es una colorida casa con fachada, que recrea escenas de jóvenes que bailan, que usan máscaras y que tocan instrumentos musicales, como la marimba y la guitarra. Esos muros, donde sobresalen los verdes, como en la selva del Pacífico, dan cuenta de la energía que se vive al interior del espacio, considerado por muchos como un oasis de libertad, una isla de resistencia en medio de la violencia. No en vano, el letrero que estuvo durante mucho tiempo a la entrada de la casa decía: “Los jóvenes del Nuevo Milenio queremos la paz”.

Uno de los primeros que llegó a la casa fue Leonardo Castro, quien a los once años empezó a asistir a clases de teatro y, al tiempo, se interesó por las acciones de incidencia social que se gestaban en el Centro Juvenil Afro. “A mí lo que me hizo caer en cuenta de que yo estaba en una situación o en un contexto difícil fue ese proceso juvenil en el que le hablaban a uno de las dinámicas del conflicto, porque en ese momento yo no era consciente de lo que estaba sucediendo. Para mí, cuando mataban a alguien, pensaba que eso era normal”, recordó Leonardo.

Con la experiencia de esos primeros años, Leonardo se quitó el velo que le hacía ver la violencia como algo normal de su entorno: “Me tocó decir, ‘bueno, esta es la realidad que estoy viviendo. ¿Qué puedo hacer?’”. Ante esa pregunta, tomó una decisión que le ayudó a encaminar su proyecto de vida: a los doce años descubrió que el teatro se había convertido en ese nuevo mundo donde podía explotar su creatividad, hablar de lo que pasaba en su barrio e inspirar a otros jóvenes con un mensaje de paz y convivencia social. “Nuestras obras tratan de rescatar y resolver conflictos sociales a través del arte, porque creo que nosotros ofrecemos ese espacio donde la gente puede cuestionar lo que en apariencia es normal, pero que no es así”, explicó Leonardo.

Sus puestas en escena denunciaban la dura realidad del barrio y transmitían mensajes de perdón, reconciliación y hermandad. Una de las obras que más recuerda Leonardo es *Agua que me muero*, una pieza teatral que con elementos de comedia denunciaba la falta de acceso al líquido vital. “Que se rían de su propia falencia, de su propia necesidad. Uno cree que haciéndose el de la vista gorda las cosas se le van a solucionar, sabiendo que uno también tiene la posibilidad o la forma de decir que todo cambie”, afirma Leonardo, quien descubrió en el centro otra de sus pasiones: la música.

AfroMiTu

Desde que se abrió el Centro Afro Juvenil los gestores se han preocupado por ofrecer procesos de formación que, además de proteger a los jóvenes, ayuden a preservar el patrimonio musical de los pueblos afrocolombianos, como el currulao y la juga, que se consideran la contribución africana más fuerte a los habitantes de la región Pacífica de Colombia. A estos cur-

Los llegan jóvenes de la comunidad interesados en aprender a tocar instrumentos tradicionales, como el conuno, el bombo, la marimba y el guasá. También llegan otros atraídos por aprender sus danzas. En el 2015, el Centro Afro Juvenil ofreció un taller de rap y música urbana que rompió con la oferta tradicional que tenían y captó la atención de varios muchachos, entre ellos Pedro Luis y Leonardo.

Otra interesada fue Neisy Tenorio, quien trabajaba con la Pastoral Social de la Diócesis de San Andrés de Tumaco, se ofreció inicialmente para colaborar en la logística del taller y terminó escribiendo canciones. Neisy, una mujer enérgica, espontánea, audaz y con una impresionante vocación de servicio a las comunidades, tenía como tarea ayudar a diligenciar las listas de asistencia y repartir los refrigerios, y poco a poco se fue integrando al taller hasta asumir el rol de compositora. “Ahí me puse a escribir con ellos, a encontrarle el sentido a la música, a expresarnos. En ese taller hablamos mucho de lo que era la problemática de nuestro Tumaco, nuestras necesidades, y yo también les ayudaba mucho a los chicos a poder ver esa realidad”, recuerda.

Como resultado de los talleres de rap y música urbana, algunos de los participantes, entre ellos Pedro Luis y Leonardo, que se emocionaron con la actividad, tuvieron la idea de crear un grupo. Neisy se ganó la confianza de ellos y por eso la invitaron a vincularse. “Probando voces y todo, uno de ellos dijo que mi voz sería muy chévere para hacer el coro de una de las dos canciones, y bueno, así terminé cantando”, explica Neisy.

Así dieron vida a AfroMiTu, un nombre que resultó de la combinación de las palabras *afro*, *mi* de Nuevo Milenio y *tu* de Tumaco. Pedro Luis, en una entrevista realizada en el programa *Entre líneas*, de la emisora Javeriana Estéreo, reveló que

la composición de ese nombre significó mucho para la agrupación, pues buscaban exaltar sus raíces afrocolombianas y el territorio al que pertenecían.

Desde el primer día, la agrupación le canta a la vida, al barrio Nuevo Milenio de Tumaco y a los derechos humanos. En ese taller de rap los muchachos crearon dos canciones a partir de un ejercicio en el que hablaban de los problemas que les afectaban en sus vidas cotidianas. La primera se llamó *Humanicemos la salud*, y la segunda, *Le decimos no a la violencia*.

De acuerdo con Pedro Luis, las canciones son el resultado de sus vivencias y de cómo comprenden su realidad. En el 2015, cuando se llevó a cabo el taller, había una confrontación en Tumaco en la que se veían involucrados grupos del narcotráfico, la guerrilla de las FARC y la fuerza pública. El control que ellos ejercían sobre los barrios era tan fuerte que limitaban la movilidad de los habitantes.

Neisy recuerda, por ejemplo, que muchos niños no iban a estudiar por miedo a las balaceras y porque su escuela quedaba en algún barrio vecino, donde había combos rivales. Ella, por ejemplo, vivía en el barrio Viento Libre, y los habitantes de ese sector no podían ir a Nuevo Milenio ni viceversa. Pero como era conocida por su labor social, ella podía cruzar esas líneas imaginarias que impusieron los grupos armados.

Por eso Neisy siente un aprecio especial por la canción *Le decimos no a la violencia*, pues para ella es el primer himno del grupo, debido a que tiene un mensaje contundente, relata la historia de los integrantes de AfroMíTu y expresa sus sentimientos sobre las violencias que han vivido en Nuevo Milenio.

*Le decimos no a la violencia,
a los atentados, crímenes, reclutamientos forzados,
decimos no a la violencia,
al poder, a la fuerza pública que vulnera los derechos,*

*decimos no,
la violencia genera más violencia.*

Neisy explica que después del taller vinieron momentos de experimentación para componer nuevas letras y crear otras canciones. Como parte fundamental de ese proceso dice que el grupo hace ejercicios de investigación y documentación de las problemáticas del barrio. Muestra de ello es la canción *La paz sí es posible*, un tema que compusieron en el 2020, en plena pandemia, y con el que buscaban denunciar los hechos de violencia que se desataron en Tumaco después de la firma del Acuerdo Final de Paz entre el Estado y las FARC. Según los integrantes de AfroMiTu, los compromisos del acuerdo con las comunidades no se han cumplido, y en Tumaco, como en muchos lugares de Colombia, se rearmaron grupos de disidencias que desafiaron de nuevo al Estado y que se enfrentaron a otros grupos para controlar las economías ilegales.

*La paz con las FARC la firmó el Gobierno, pero su cumplimiento es algo eterno
salgo pa la calle en busca de camello, recorro todo el pueblo y no encuentro
me dan las dos y cuando escucho el plom-plom-plom
cayó uno, cayeron dos
seguimos viviendo masacres y balaceras
a los barrios volvieron las famosas fronteras invisibles, pero mortales
y por eso les ruego
necesitamos un urgente cese al fuego.*

Desmontar la guerra con canciones

En el camino que Neisy, Pedro Luis y Leonardo han recorrido con AfroMiTu desde el 2015 se han encontrado con una realidad difícil de cambiar. Ellos, por su formación artística y por sus experiencias personales, han cuestionado la violencia que ocurre en Tumaco, la denuncian en sus canciones, reflexionan

sobre sus causas y consecuencias, pero cotidianamente encuentran que los jóvenes, sus vecinos y amigos, engrosan las filas de los grupos armados y, al tiempo, son víctimas de las balas. A pesar del dolor que causa, todo ese entramado es visto en Nuevo Milenio como algo normal, una idea que los de AfroMiTu quieren desmontar con su arte, a pesar de que son conscientes de lo difícil que es dicha tarea. “Desde niños la gente del barrio mira a estos chicos con armas, con mujeres, con drogas. La gente crece pensando en que eso es la vida. Después, llegamos nosotros con la idea de querer meterles otras cosas en la cabeza, la música y el arte, pero es muy complicado porque ya crecieron así, pensando en que así es como se debe vivir”, dice Neisy con un tono de tristeza. Ella también se acerca a los jóvenes del barrio a través de proyectos psicosociales, y habla con ellos sobre estrategias de prevención, cuidado y fomento de la paz. En esa labor su frustración aumenta cuando los muchachos le cuentan que después de las reuniones tienen que regresar a sus hogares, donde, de nuevo, se encuentran con situaciones como las balaceras, los hostigamientos y las violencias intrafamiliares que los absorben y no los dejan pensar en otras vidas posibles.

Según Leonardo, cuando se da cuenta de que uno de sus amigos está inmerso en actividades ilícitas, piensa en cómo puede ayudarlo a alejarse de ese mundo: “Yo retomo los procesos que tuve, capacitaciones que muchos no tuvieron, y que no pudieron ni siquiera entrar, formaciones teatrales, capacitaciones en proyectos de vida, talleres de creación, o sea, cosas así que lo sacan a uno del contexto por un momento”.

Pedro Luis cree que es necesario ofrecer oportunidades a los jóvenes, para que puedan emprender, estudiar o hacer algo que los motive. Él, por ejemplo, emprendió con una barbería en la que les abrió las puertas a varios vecinos que esta-

ban interesados en formarse y trabajar: “Ahorita estoy con un chico que está aprendiendo, y eso es como seguir rescatando a los otros pelados del barrio que están yéndose por un camino que no deben. Aquí hay talento”, dijo.

Pedro Luis sueña con que Nuevo Milenio esté libre de violencia, que no existan grupos armados y que los turistas puedan adentrarse en las playas que están cerca del barrio. Coincide con Neisy en que hay una oferta para que los muchachos se distancien de las armas y de la violencia. Por ejemplo, lo que hace el Centro Afro Juvenil y la oferta de la Diócesis de Tumaco y de otras organizaciones no gubernamentales que desde hace varios años tienen proyectos de empoderamiento político para que los jóvenes del municipio sean escuchados. No obstante, Pedro Luis dice que los habitantes de Nuevo Milenio sienten apatía por muchas de esas iniciativas porque están perdiendo la esperanza.

Con ese planteamiento coincide Neisy: “Los jóvenes ya perdieron la fe en que Tumaco pueda ser diferente, ya no les creen a las organizaciones, ahora es como que solamente miran qué pueden sacar para su beneficio, pero no hay trabajo comunitario, no se ve ese bien común, ese trabajo para que todos crezcamos, sino que cada uno tira para su lado”.

Según Neisy, tendría que ocurrir algo verdaderamente extraordinario para que los jóvenes pudieran recuperar la confianza. Habla, por ejemplo, de la construcción de las sedes de la Universidad Nacional de Colombia y de la Universidad de Nariño, dos instituciones públicas que podrían convertirse en grandes referentes para la población, pero los dos campus prometidos por los gobiernos desde hace varios años están retrasados. “La Nacional lleva haciéndose desde hace cuatro años, no han terminado. Y la de Nariño, la alcaldía también cada rato menciona la sede, pero no la entrega. Se ha perdido

la fe porque siempre prometen y no cumplen, entonces yo creo que los jóvenes pueden empezar a empoderarse si ven que realmente son escuchados, porque hay muchos que tienen sueños, que tienen aspiraciones”, dijo.

Una política errónea

Neisy asegura que ante los problemas de violencia que se viven en Tumaco el Estado responde con la militarización de los barrios y de las zonas rurales. Una estrategia que según ella ha traído más problemas que soluciones: “Acá los soldados, la fuerza pública, también vulneran muchísimo los derechos de nosotros. ¿Cómo es que los soldados que se supone que vienen a cuidarnos y protegernos terminan haciéndonos más daño?”, cuestionó.

Para ella una evidencia de que la fuerza pública no ha resuelto los problemas de violencia es que, a pesar de que desde hace años los soldados están en el casco urbano, los grupos armados siguen controlando los barrios y dedicados a los negocios ilícitos. “La guerra que hace el Estado en contra de las drogas trae más muertes, porque realmente ellos no combaten a las drogas como tal, sino que nos combaten a nosotros mismos, al pueblo, y eso agrava más la situación”, aseguró Neisy. Ella tuvo la oportunidad de ir a México y participar de un taller académico relacionado con la forma en que se deben combatir las drogas. Dicha experiencia le permitió ampliar sus conocimientos y darse cuenta de que, en Tumaco, el ejército nacional tenía a su cargo acciones que la policía nacional debía llevar a cabo por su naturaleza civil. “Para todo llaman a los militares, por cualquier cosa ellos intervienen y no debería ser así. El gobierno debería buscar otras alternativas, otras estrategias. Igual, se supone que la policía es la que debería

estar acá en el casco urbano”, señaló Neisy y añadió que el gobierno debería priorizar otras estrategias, como el diálogo, y llevar a cabo acciones más estructurales, como ofrecer educación superior, oportunidades de trabajo, mejorar el sistema de salud, las viviendas, atender el hambre y otras necesidades que tienen que resolver los jóvenes cotidianamente, y que, al estar insatisfechas, determinan su ingreso a los grupos armados.

De igual forma, argumenta que las autoridades no han tenido la suficiente conciencia para prevenir enfrentamientos como ese. “Al gobierno como que se le ha metido a la cabeza que la única manera de combatir lo que está pasando es con armas, y no es así. El gobierno debería pensar un poco más en brindar oportunidades o en una estrategia de legalización de las drogas, eso sería un golpe durísimo al narcotráfico, porque ya no tendrían la gran ganancia que tienen”, aseguró.

Las críticas de Neisy a la militarización de Tumaco también tienen un motivo personal. En la mañana del 14 de abril del 2013, uno de los hermanos de Neisy, Jhirson José Tenorio Quiñónez, de 18 años, se encontraba tomando cerveza en un parque del barrio Viento Libre, junto con cuatro amigos. Un hombre se acercó a ellos y los amenazó con un arma de fuego. En ese momento patrullaba por la zona un grupo de soldados. Al ver a los uniformados, el agresor huyó. Los militares llegaron hasta donde Jhirson José y sus amigos. Los señalaron a ellos de ser responsables del incidente y se enfrascaron en una acalorada discusión. La mamá del muchacho llegó hasta el parque, calmó a su hijo, pero cuando ya se retiraban hacia la casa, los uniformados volvieron a increpar a Jhirson José y uno de los soldados le disparó en una pierna. Unos policías que estaban en la zona lo llevaron herido al hospital, pero falleció horas más tarde. Este hecho fue denunciado por la re-

vista *Noche y Niebla* N.º 47 del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep).

“Mi hermano fue asesinado por un soldado. Eso ocurrió porque los soldados les tenían rabia a todos los chicos que viven en ese barrio, porque decían que todos eran unos delincuentes, sin importar que él no estaba metido en ningún grupo, que no tenía ni siquiera un arma, pero, en medio de esa pelea que había ahí, esos soldados dispararon”, explicó Neisy. Para ella la estigmatización que hay sobre los jóvenes del barrio Viento Libre, y en general de todos aquellos que viven en zonas periféricas de Tumaco, fue la culpable de ese hecho. A su vez, afirma que el asesinato de su hermano también estuvo relacionado con la precaria infraestructura de salud que tiene la ciudad: “Murió porque la salud es una mierda. En ese tiempo estaban trasladando el hospital y entonces lo llevaron al centro y ahí que no se podía hacer nada. Le hicieron como un torniquete y de ahí lo trasladaron, pero yo no sé qué pasó allá y después murió. Yo realmente no entiendo”.

La sensación de confusión y de tristeza por lo que ocurrió con su hermano Jhirson José fue algo difícil de afrontar para los familiares de Neisy Tenorio, quienes todavía esperan una explicación oficial por parte del ejército. “Realmente no le guardo rencor a nadie porque eso no ayuda para nada, pero sí queda como ese sinsabor porque la vida de mi hermano no va a volver”, sostiene Neisy, y añade que en su memoria escribió una canción con AfroMiTu:

*Del barrio, del barrio soy yo
Hay malos momentos que se lleva el viento
Del barrio, del barrio soy yo
Hablando por aquellos que no tienen voz
Del barrio, del barrio soy yo
La música nos aleja de los malos vicios*

*Del barrio, del barrio soy yo
Rap conciencia, AfroMiTu, en la casa you know.*

Este es el coro de la canción *Del barrio soy yo*, en la que Neisy hizo un homenaje a su hermano. En el videoclip, los integrantes del grupo cantan en las calles del barrio Nuevo Milenio, hablan de la estigmatización, de parar la guerra y de los pequeños momentos de tranquilidad que tuvieron en la infancia. Neisy aparece en el audiovisual vestida con una ombliguera negra y una pañoleta con tribales sobre su cabeza.

*Hace algunos años hoy me pongo a recordar
Cuando con mis amigos salíamos a jugar
A la lleva, al yeimi
Al pachacajón y muchas cosas más
Hasta media noche nos solíamos quedar
Sin miedo y sin preocupación
De que una guerra sucia nos lastime el corazón
Truncando nuestros sueños de vivir en libertad
Ya no tengo a mi hermano
Y mis amigos ya descansan en paz.*

Llamado a la acción

Iniciativas como la agrupación AfroMiTu, de Tumaco, que se apropian del arte para cuestionar los referentes que impone un contexto violento, se ven amenazadas por la desmotivación que sienten sus integrantes en la ciudad nariñense, donde se ven desprotegidos por el Estado y en constante incertidumbre, debido a la falta de oportunidades educativas y económicas.

Leonardo conoció esa desmotivación cuando era un destacado estudiante de octavo grado. “¿Por qué? Pues acontece que cuando mi hermano terminó el grado once ocupó el primer puesto en el Colegio Inmaculada y no le dieron nada. Yo

desde ahí bajé mis niveles educativos. ¿Para qué me esfuerzo? Yo solamente pasaba por cumplir. Seguía respondiendo, pero no era con la misma intensidad, con la mente de sacar buenas notas, porque ya no me interesaba mucho eso”, aseguró.

Leonardo piensa que a su hermano, por ser tan entregado al estudio, debieron ayudarlo con una beca para que tuviera formación profesional, pero eso no ocurrió. Cuando Leonardo terminó sus estudios en el colegio, ingresó al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), donde cursó estudios técnicos, pero su anhelo era estudiar derecho y convertirse en un abogado para ayudar a su comunidad.

Ante la falta de oportunidades muchos de los jóvenes se van de Tumaco. Neisy lo piensa. Ella está estudiando sicología y más adelante desea especializarse porque quiere convertirse en conferencista para inspirar a otros jóvenes. Pero ve difícil materializar ese sueño desde Tumaco, y por eso considera la posibilidad de salir del municipio. “En términos personales, yo también estoy perdiendo la fe. Por eso he decidido que me voy a ir de aquí el próximo año, si Dios lo quiere, a Medellín, a hacer la especialización”, dijo.

A pesar de que Neisy proyecta su vida por fuera de Tumaco, no quiere abandonar AfroMiTu ni los procesos con el Centro Afro Juvenil. Defiende la idea de que no hay que olvidarse del territorio. “Yo creo que ese es como el llamado a la acción, que independientemente de donde estemos no olvidemos lo nuestro, las necesidades que estamos pasando; y si podemos traer cosas nuevas, pues que lo hagamos para los jóvenes”, dijo Neisy.

Las letras de las canciones de AfroMiTu son el grito desesperado de las nuevas generaciones de tumaqueños, a quienes ante la incertidumbre del futuro les toca desplazarse a buscar oportunidades en otro lugar. En los temas musicales ellos des-

criben de manera crítica esos problemas cotidianos que los llevan a los límites, que los expulsan, y cuestionan los poderes que sostienen la guerra y que impiden mejorar las condiciones de vida en Tumaco. Esos gritos en los cantos de AfroMITU, en las danzas, en los espectáculos de circo y en las obras de teatro del Centro Afro Juvenil son luceros en medio de la oscuridad que producen la violencia y la desatención del Estado.

Referencias

- Centro de Investigación y Educación Popular —Cinep— (2013). *Noche y Niebla*, (47). <https://www.nocheyniebla.org/wp-content/uploads/u1/47/Niebla47.pdf>
- Centro Nacional de Memoria Histórica (2021). *Yolanda Cerón: la hermana del Pacífico. Una biografía ilustrada*. <https://centrodememoriahistorica.gov.co/wp-content/uploads/2021/09/Yolanda-Ceron.-La-hermana-del-Paci%C3%81fico.-Una-biografia-ilustrada.pdf>.
- Departamento Nacional de Planeación (2020). San Andrés de Tumaco, Nariño. <https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Territorial/Portal%20Territorial/Bioceanica/Muns/San%20Andres%20de%20Tumaco-NARINO.pdf>.
- Entre Líneas (2021). AfroMITU, una propuesta de Tumaco para Colombia. *Entre líneas, la realidad en contexto*. <https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly93d3cuc3ByZWFrZXIuY29tL3Nob3cvND-Q2NDgxNS9lcGlzb2Rlcy9mZWVke/episode/aHR0cHM6Ly9hcGku-c3ByZWFrZXIuY29tL2VwaXNvZGUVNDUyMjJyNTc?ep=14>.
- Rojas, M. (2015). Tumaco, un enclave nuclear en el sostenimiento de la guerrilla. <https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/460/Tumaco%20un%20enclave%20nuclear%20en%20el%20sostenimiento%20de%20la%20guerrilla.pdf?sequence=1>.
- Papa Francisco (2022). Página de Facebook del Centro Afro de Tumaco. <https://www.facebook.com/239472686116984/videos/1678347045871500>.

Un abrazo a la montaña

Por María del Mar Giraldo Rendón
y Juan Camilo Castañeda Arboleda

María del Mar Giraldo Rendón (Manizales, 1994). Estudió periodismo en Medellín. Su experiencia periodística la llevó a investigar y escribir sobre la región del Suroeste de Antioquia para el periódico *El Suroeste*. También ha escrito para la *Revista Confama* y *Hacemos Memoria*. Actualmente es parte del equipo de comunicaciones de Celsia, una empresa privada de energía.

Juan Camilo Castañeda Arboleda (Medellín, 1992). Es periodista de la Universidad de Antioquia, magíster en Cultura de Paz, Conflictos, Educación y Derechos Humanos de la Universidad de Granada (España). Trabaja como periodista e investigador en el proyecto Hacemos Memoria de la Facultad de Comunicaciones y Filología de la Universidad de Antioquia.

En el año 2006, el Estado colombiano definió un amplio territorio de la cordillera Occidental de los Andes como el Cinturón de Oro de Colombia, una zona estratégica para la extracción de minerales. Los 23 municipios del Suroeste antioqueño quedaron ubicados dentro de esa demarcación, pero esta región, donde conviven comunidades campesinas e indígenas, históricamente ha sido reconocida por su vocación agrícola, particularmente por la producción de café. En el 2011, cuando varias multinacionales mineras ya hacían exploraciones en el Suroeste, organizaciones campesinas, indígenas, ambientalistas y sociales crearon el Cinturón Occidental Ambiental, un movimiento regional que abraza las montañas y defiende el territorio del modelo económico extractivista.

Suena un par de campanazos. Los toldos donde los campesinos venden verduras en el parque principal se despliegan. Parece que será un día fresco, como es natural en Jericó, un pueblo del Suroeste de Antioquia que se encuentra a 1.910 metros de altura sobre el nivel del mar. Desde temprano hay vecinos tomando tinto en las cafeterías ubicadas a un costado de la Catedral Nuestra Señora de las Mercedes.

En la mañana del sábado 9 de febrero del 2019, la escena cotidiana de Jericó es interrumpida por un movimiento inusual: llegan buses escalera o chivas, como se les conoce en Colombia, que se parquean en la calle contigua a las cafeterías. Los pasajeros agitan por las ventanas banderas y pancartas pintadas a mano, pero desde donde estoy no se distinguen los mensajes. Se bajan de los vehículos centenares de personas: niños, jóvenes, adultos y ancianos vestidos con ropa cómoda y con accesorios (sombreros y gorras) para protegerse del sol. Algunos cargan instrumentos musicales. Interrumpen el silencio matutino de este pueblo y ahora parece que se celebra una fiesta.

En realidad, se trata de una marcha-carnaval por la vida y el territorio. Una celebración que hace parte de una estrategia de defensa y de lucha, de persistencia y de dignidad. Las personas que llegaron en las chivas vienen de otros municipios de la región, como Pueblorrico, Támesis, Ciudad Bolívar, Concordia, Urrao, Salgar, Fredonia, Jardín, Andes, incluso, desde Cajamarca, un municipio del departamento de Tolima.

Las personas se congregan en los alrededores del parque. Algunas llevan puestas camisetas blancas con un mensaje estampado: “Suroeste de Antioquia: territorio sagrado para la vida”; otras pegaron en sus camisas una frase contundente: “No a la minería”. Dos señoras sostienen una pancarta en la que puede leerse: “Aquí van los 24 peludos del Suroeste que dicen No a la minería en nuestros territorios. Fuera Anglo-Gold Ashanti”.

Pasadas las diez de la mañana, la masa de ciudadanos empieza la marcha por las calles del pueblo, al ritmo de un grupo musical que en Colombia se conoce como chirimía y que está compuesto por un bombo, dos clarinetes, un saxofón, una trompeta y un redoblante: “Sí, sí, sí, vamos a cantar por defender el agua, la tierra y la hermandad”; “queremos agua, queremos café y maíz. Multinacionales fuera del país”. Esas son algunas de las arengas que lanzan al aire.

La marcha se convocó, en parte, para respaldar el Acuerdo 10 de 2018, mediante el cual el Concejo de Jericó prohibió la actividad minera en el municipio. “No se podrán adelantar actividades de prospección, exploración, construcción, montaje, explotación y transformación de metálicos y de minería a mediana y gran escala de los demás minerales”.

El Acuerdo 10 de 2018 era el segundo intento de los cabildantes locales por proteger a su municipio de la actividad minera. En el 2017 habían emitido otra norma que fue invalidada por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que señaló que el Concejo no era una autoridad competente para prohibir la minería en el municipio.

“Debemos consolidar la unión que se manifestó hoy para la defensa del territorio suroestano. Nosotros no queremos actividad minera, conocemos la destrucción que significa para nuestro pueblo, y la única forma que tenemos para frenar fre-

nar a las mineras es que el Suroeste se una en sus bases, con sus organizaciones populares, con sus líderes políticos, para preservar este territorio de paz, de verdor, de agricultura y de pueblerinos. Que no nos arrasen sin consultarnos lo que nosotros queremos, tenemos deseos que deben ser respetados por el Gobierno nacional, por el Gobierno regional y por las multinacionales, que no son bienvenidas en el Suroeste”, dijo Fernando Jaramillo, líder de la Mesa Ambiental de Jericó, a la Alianza de Medios Alternativos al finalizar la movilización.

En varias pancartas y en pasacalles ubicados en algunas esquinas del pueblo, por donde pasa la manifestación, está pintada sigla del Cinturón Occidental Ambiental: COA, con la C en forma de río, la O en espiral y la A como una montaña. Esta organización, que se fundó en el 2011 y que se define como un movimiento regional de defensa del territorio, es una de las que convocó a la marcha-carnaval para decirles a las empresas mineras que el Suroeste antioqueño tiene quien lo abraza. Por eso, la movilización, una acción que para muchos puede ser efímera, tiene fuerza y poder. Es uno de los símbolos de una historia de resistencia.

Un mantra: territorio sagrado para la vida

“Nadie ama lo que no conoce”, dice con vehemencia Herman Vergara Blandón, un habitante de la vereda Riofrío de Támesis. A sus 70 años, él es uno de los abrazadores de las montañas del Suroeste antioqueño, una región que, según afirma, es afortunada porque está dotada con todo lo que se puede soñar: cultivos de café, caña, maíz y todas las frutas que se deseen. Tiene ecosistemas variados: desde el Páramo del Sol y los Farallones del Citará, cuyas cumbres están por encima de los 4.000 metros sobre el nivel del mar, pasando por los

bosques húmedos que se encuentran en las montañas y los bosques secos tropicales, a orillas del río Cauca.

Los paisajes del Suroeste podrían inspirar a los más grandes artistas: muchos de sus pueblos están asentados en los cerros, donde se funden con la neblina mañanera. En la región, los campesinos y las poblaciones indígenas de la etnia emberá chamí quieren preservar sus prácticas culturales, ligadas al cultivo de alimentos. Por su arraigo y su vocación, en el Suroeste se han gestado movimientos sociales que luchan por seguir siendo una despensa agraria, conservar su cultura y cuidar el patrimonio natural.

A principios de la década de los setenta, Herman salió de su natal Támesis, uno de los veintitrés municipios que componen el Suroeste antioqueño, hacia Medellín, la capital de Antioquia, donde estudió licenciatura en educación y trabajó como docente en distintos colegios. Durante los 40 años que vivió en la ciudad, él siempre anheló regresar al lugar donde había nacido para reconectarse con sus raíces, y así ocurrió en el 2011, cuando se pensionó.

Herman pensó que el regreso también era la oportunidad para descansar y buscar sosiego después de tanto trajín en Medellín, pero definitivamente estaba equivocado. En cuanto desempacó su trasteo, se enteró de que la minera sudafricana AngloGold Ashanti impulsaba desde el 2008 un distrito minero en el Suroeste antioqueño, con cinco yacimientos de oro, cobre y plata. “Nos enteramos de que algo raro estaba sucediendo. Una serie de conflictos ambientales se hicieron palpables, la amenaza de un proyecto minero se escuchaba cada vez más cerca”, recuerda.

AngloGold Ashanti exploraba un terreno en la vereda Quebradona de Jericó, en los límites con Támesis, su querido pueblo. En ese momento él se dio cuenta de que su vida

como pensionado estaría dedicada a la defensa de la vida y el territorio. Desde entonces, un eslogan lo acompaña por donde camina: “Suroeste de Antioquia, territorio sagrado para la vida”.

“Nací y crecí en una vereda cercana a Támesis —cuenta Herman—. A lo largo de mi historia he participado en muchos procesos organizativos. Uno diría que fue así por haber sido campesino, por ser cercano a muchos vecinos que se vuelven amigos y hasta hermanos. Se van presentando oportunidades para buscar, desde la organización social, mejorar la calidad de vida, en lugares que muchas veces son olvidados por el Estado. Me vine de la ciudad, pero a partir de mi regreso, me incorporé a una iniciativa de varias personas como yo, que estábamos inquietas y preocupadas por algo que estaba sucediendo en esta región y que aparentemente era lejano para muchos: la minería”.

Herman dice que lo primero que hicieron fue aplicar una estrategia para socializar con sus vecinos los proyectos mineros que se estaban proyectando en la región. “Eso nos llevó a desarrollar diversas estrategias audaces. Así que entre varios empezamos a gestionar foros, conversatorios, pedagogías que generaron movilizaciones. Y finalmente, en el año 2011, constituimos lo que es el Cinturón Occidental Ambiental”, explicó.

Diario de la resistencia

El Cinturón Occidental Ambiental —COA— es un movimiento regional con una vida similar a la de las abejas, insectos que son, ante todo, una especie de multitud de lo colectivo. La organización es como un panal, una colmena, donde se congregan todos aquellos colectivos campesinos, indígenas, ambientalistas y sociales que están decididos a luchar y resistir

a la imposición de un modelo económico basado en la extracción de minerales.

“Nosotros aprendimos a trabajar de manera comunitaria, por eso en nuestro cinturón no hay propiamente roles directivos; conformamos una base: un núcleo integrado por las personas que se destacan en cada municipio, y como es una célula, va creciendo y va tejiendo todas las decisiones, siempre desde lo comunitario”, explica Herman.

Él es una de esas abejas que viven en el gran panal. Herman abre un cuaderno escolar grande, que está un poco maltrecho por el uso, y empieza a pasar hoja por hoja. “Este cuaderno es mi agenda, es mi costumbre cada año. A veces me sobran páginas, a veces me faltan. La verdad, funciona para hacer memoria de las estrategias que implementamos para defender nuestro territorio. Y aunque han pasado más de diez años, recuerdo claramente cómo empezamos a realizar foros y cabildos abiertos en estos municipios, que nunca habían visto estas formas de conversación”.

Recuerda, aunque no aparecía en la agenda, la vigilia por la defensa del territorio que hicieron entre el 20 y el 22 de julio del 2012 en Támesis. Al finalizar la tarde de ese 20 de julio, Herman emprendió con un grupo de habitantes de la región una caminata desde el pueblo hasta la cima del cerro Cristo Rey, un lugar insignia del municipio desde donde se divisa gran parte del Suroeste, con sus bosques, cascadas y ríos.

“Esta es una vigilia de ayuno de veinticuatro horas, en la que un grupo de ciudadanos se ha retirado del municipio de Támesis, a un sitio alto, por encima de los 2.200 metros sobre el nivel del mar”, explicó Herman en un video de registro que hizo la organización *View Press*.

Juan Ceballos, un abogado ambientalista que asistió a la vigilia, tomó la palabra cuando las personas estaban reunidas

en medio de una fogata. “Quienes hemos tomado la decisión de subir y hacer este ayuno es porque hemos recibido una enseñanza de tenacidad de nuestros padres y abuelos, que daban todo su esfuerzo para cultivar la tierra. No podemos vivir sin tierra, sin alimentos, sin agua, sin oxígeno. Ahora tenemos que convocar esa vida”.

Además del ayuno en el cerro Cristo Rey, en ese fin de semana hicieron el Foro sobre la Defensa del Territorio, donde expusieron los riesgos de los proyectos mineros que tiene programados AngloGold Ashanti. El 21 de julio, llevaron a cabo el Desfile por la Defensa del Territorio, en el que participaron masivamente los habitantes de Támesis.

Según Herman, la vigilia fue la preparación para una de las más reconocidas estrategias de defensa que las abejas del COA han implementado en esta década y que se convirtió en un precedente importante, porque demostró la conexión que tienen sus habitantes con el territorio: la *Primera travesía, un abrazo a la montaña*. Se trató de un recorrido por seis municipios del Suroeste, bajo el sol y la lluvia, para dejar claro que hay un movimiento regional campesino, indígena y ambientalista que no permitirá que separen el abrazo que se funde entre la comunidad y la tierra.

La *Primera travesía, un abrazo a la montaña* se realizó entre el martes 20 y el sábado 24 de noviembre del 2012. Ciento veinte personas salieron del municipio de Valparaíso; durante cinco días caminaron por las cabeceras urbanas y las zonas rurales de los municipios de Caramanta, Támesis, Jericó, Pueblorrico, Andes y Jardín, y visitaron los resguardos indígenas Marcelino Tascón, Miguel Cértica, Bernardo Panchí y Karmata Rúa del pueblo embera chamí.

En la travesía aprendieron de las experiencias locales de conservación de semillas, las economías campesinas, la sobe-

ranía alimentaria y los acueductos veredales, un entramado social que fortalece el movimiento de defensa de la vida del Suroeste. Además, exploraron ecosistemas estratégicos como el Alto Ventanas, una montaña ubicada dentro del Área Protegida Distrito de Manejo Integrado Cuchilla-Jardín-Támesis, territorio donde se han avistado osos de anteojos. Además, en ese lugar se encuentra una de las poblaciones más grandes de la palma macana, que es el hogar del loro orejiamarillo, una especie que se encuentra en riesgo de extinción.

Pero en el recorrido también hicieron un diagnóstico de los diferentes conflictos socioambientales que se viven en la región. Encontraron amplios terrenos donde se llevan a cabo proyectos de ganadería extensiva y donde hay sembrados monocultivos de pino, que traen problemas debido a la deforestación de los bosques nativos y el uso de agroquímicos que contaminan el suelo y las fuentes de agua. Además, observaron las plataformas de exploración de las multinacionales mineras.

“Es muy interesante porque hacemos recorridos por los municipios para realizar distintas acciones; incluso, es una actividad que tiene que ver con la parte ambiental, académica y política, porque hay una incidencia en los territorios según la temática y los contenidos que llevemos. Caminamos con una sola idea: hacer movilización por todos los medios. Ese ejercicio dura siete u ocho días y, aunque el tema logístico de la travesía es muy duro, porque es un desgaste tremendo, hemos logrado movilizaciones importantes en sus tres versiones. Como yo, otras cien o ciento veinte personas hacen el recorrido, y en los pueblos la gente se va acercando y va siendo parte de la marcha”, explicó Herman.

En las travesías han tenido objetivos claros: denunciar los conflictos sociales y ambientales que generan los proyectos mineros presentes en la región, específicamente el de Minera

Quebradona, de la multinacional AngloGold Ashanti; invitar a la ciudadanía a reconocer los recursos naturales que tienen alrededor; y motivar a los habitantes de la región para que se involucren en el desarrollo de actividades comunitarias que “permitan la consolidación de políticas de vida en consonancia con las tradiciones de los pueblos campesinos e indígenas”, como manifiesta Yamid González, otro integrante y fundador del COA.

En los años 2016 y 2019, el COA organizó la segunda y la tercera versión de la *Travesía por el Suroeste de Antioquia, un abrazo a la montaña*. Mientras se realizaba la última versión, las amenazas que habían identificado en el 2012, cuando recorrieron por primera vez la región, se estaban materializando.

El movimiento regional de defensa por el territorio tenía a su favor que en Jericó el Concejo había prohibido la minería con el Acuerdo 10 de 2018. Pero sabían que el documento estaba en revisión en el Tribunal Superior de Antioquia. También sabían que la empresa AngloGold Ashanti ya preparaba la solicitud de licenciamiento ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales —ANLA—.

En la tercera versión la ruta inició en el municipio de Támesis, donde antes de comenzar la jornada Herman, que usaba sus lentes y llevaba puesto un sombrero aguadeño, expresó: “Támesis será el principal afectado, porque sus aguas, con la explotación que allí se va a realizar, van a tener un gran impacto, sobre todo, en el corregimiento de Palermo. En algunas veredas, los acueductos comunitarios empiezan a tener problemas por la ausencia del agua. Invitamos a la población tamesina para que se una a esta gran lucha. Suroeste de Antioquia, territorio sagrado para la vida”, estas palabras quedaron registradas en un audiovisual realizado por la Alianza de Medios Alternativos.

Conflicto minero en el Suroeste antioqueño

Herman, quien durante los últimos años se ha tenido que enterrar de los entramados legales que sostienen la minería, dice que todo empezó con la Ley 185 del 2001, que expresa literalmente: “Fomentar la exploración técnica y la explotación de los recursos mineros de propiedad estatal y privada; estimular estas actividades en orden a satisfacer los requerimientos de la demanda interna y externa de los mismos y a que su aprovechamiento se realice en forma armónica con los principios y normas de explotación racional de los recursos naturales no renovables y del ambiente, dentro de un concepto integral de desarrollo sostenible y del fortalecimiento económico y social del país”.

Esas eran las palabras legales con base en las cuales los gobiernos de los presidentes Andrés Pastrana Arango (1998-2002), Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) y Juan Manuel Santos (2010-2018) buscaron implementar lo que este último nombró como *locomotora mineroenergética*, la principal propuesta de desarrollo económico en Colombia, basada en la extracción de metales y combustibles, y en la producción de energía eléctrica.

La amenaza minera, como la llama Herman, empezó a concretarse como realidad en el Suroeste antioqueño con la publicación del *Plan nacional minero (2002-2006)* y el *Plan nacional para el desarrollo minero, Colombia país minero, visión al año 2019*, que se elaboraron durante el gobierno de Uribe Vélez. En estos dos documentos se delimitó una amplia zona de exploración a lo largo de la vertiente oriental de la cordillera Occidental de los Andes, un ramal montañoso que hace parte de la gran cuenca del río Cauca, el segundo más importante del país.

A ese gran territorio que destinaron a la exploración se le denominó Cinturón del Oro de Colombia. El Suroeste antioqueño está incrustado en la parte intermedia del cinturón. De

hecho, los mapas del *Plan nacional minero (2002-2006)* develan que los veintitrés municipios de la región fueron priorizados como zonas de interés para la extracción de oro.

Por eso, no es casualidad que la multinacional sudafricana AngloGold Ashanti llegara al Suroeste antioqueño en el 2005, donde se instaló con la seguridad legal y jurídica que le daban los planes de desarrollo mineros, pero donde enfrentó el rechazo de amplios sectores de la población que defienden el medioambiente, la economía agrícola y la cultura campesina.

La multinacional sudafricana llegó atraída por las montañas de Jericó y Támesis, donde halló la posibilidad de extraer oro, cobre y plata. Desde el 2008, habitantes del corregimiento de Palocabildo, donde hicieron la exploración del proyecto Quebradona, han denunciado que las perforaciones han afectado las fuentes de agua con las que se abastecen.

A pesar del rechazo de gran parte de la población, AngloGold Ashanti persiste en su intención de crear un distrito minero donde, además de Quebradona, pueda explotar las minas de las veredas La Isabella, La Aurora, El Tenedor y La Sola. El 24 de octubre del 2019, el Tribunal Superior de Antioquia invalidó el Acuerdo 10 de 2018, que había emitido el Concejo Municipal de Jericó y que habían respaldado los ciudadanos del Suroeste en la marcha-carnaval que se llevó a cabo el 9 de febrero de ese mismo año.

Después del fallo del Tribunal, el 12 de diciembre del 2019, la minera presentó ante la ANLA la solicitud de licenciamiento para iniciar la construcción y la operación de Quebradona, sobre un título minero de 7.593 hectáreas, de donde, según la multinacional, pretenden extraer 4,9 millones de toneladas de concentrado de cobre, oro y plata, durante veintiún años.

El COA ha publicado diversos documentos en los que muestra los impactos de la ejecución de Quebradona. Un primer

asunto que les preocupa a los integrantes de la organización es que los túneles de la mina estarían contruidos bajo la montaña La Mama, que es un enorme manantial de aguas que surte a los municipios de Támesis y Jericó. Por otro lado, el proyecto está a 700 metros del Distrito de Manejo Integrado Cuchilla-Jardín-Támesis, un área protegida debido a que sus bosques conectan la biodiversidad andina con las selvas del Chocó, a las aguas que afloran en sus montañas y a que es el hábitat de especies en peligro de extinción, como el oso de anteojos.

Además, según el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, “para poder realizar este proyecto se necesita remover seiscientos diecisiete millones de toneladas de rocas de las montañas, lo que al cierre de la mina dejaría quinientos cincuenta millones de toneladas de desechos”.

Por la dimensión del proyecto, por su impacto social y ambiental, y por su avance, la lucha del COA se ha centrado particularmente en frenar a AngloGold Ashanti y su mina de Quebradona. Pero, según un estudio de Juan Camilo Isaza López, del departamento de Geociencias y Medio Ambiente de la Universidad Nacional, la proyección minera en el Suroeste es mucho más ambiciosa: “En los municipios de Jericó, Jardín, Támesis, Caramanta y Pueblorrico, la Secretaría de Minas de Antioquia ha entregado 22 autorizaciones o títulos mineros para adelantar exploraciones en treinta y nueve mil hectáreas, casi la mitad del territorio de las cinco poblaciones que suman ochenta y tres mil”.

Además, en el 2013 el COA informó que “revisando el catastro minero atribuido a estos municipios (Caramanta, Valparaíso, La Pintada, Támesis, Jericó, Tarso, Pueblorrico, Hispania, Andes y Jardín), podríamos afirmar que más del 90 % de este territorio está solicitado y titulado para la exploración minera

por parte de empresas transnacionales, entre las que se encuentran la AngloGold Ashanti (Sudáfrica), con los proyectos Quebradona y Dojura en un área mayor a 50.000 hectáreas; Solvista Gold (Canadá), con el proyecto Caramanta en un área de 60.554 hectáreas; Continental Gold (Canadá), con su proyecto Andes y Dojura; Tolima Gold (Canadá), con el proyecto Propiedades ANCAL en un área de 20.632 hectáreas; Colombian Mines Corporation (Canadá) y su proyecto Yárumalito con un área de 1.425 hectáreas; B2Gold (Canadá) y el proyecto Quebradona, compartido con la AGA y otros más”.

¿Y por qué oponerse?

“La naturaleza siempre nos dice: ‘hagámonos pasito’. La invadimos a crédito, pero siempre nos cobra de contado. Estas tierras del Suroeste son muy verticales y son unas esponjas de agua que debemos proteger. Minería sí, pero no así, ni aquí. No nos podemos quedar sin arena, sin cemento y sin hierro. La minería siempre ha existido, pero no así, a cielo abierto o en grandes socavones, y no aquí, en una tierra que presenta altos riesgos geológicos, con grandes vertientes de aguas subterráneas”, dice el sacerdote Noel Londoño, obispo de la Diócesis de Jericó, a quien su bata sacerdotal no le impide atravesar pueblos y montañas para defender el territorio.

“La primera y más obvia afectación de la minería de metales a gran escala es la destrucción del paisaje y de elementos naturales. Sin importar que se desarrolle por el método de cielo abierto o como minería subterránea, su naturaleza implica extraer, concentrar y transformar minerales, metales y rocas, por lo que es inevitable generar este impacto”, afirma Luis Gonzalo Pérez, integrante de la Asociación de Acueductos Comunitarios de Támesis, secretario de uno de los acue-

ductos comunitarios de la vereda y participante activo del Comité por la Defensa Ambiental del Territorio —Codeate—.

“Permitir el ingreso de estas multinacionales extractivistas pondría en peligro toda esta construcción cultural que se ha formado en más de doscientos años de historia procedente del fenómeno de la colonización antioqueña”, dice Sebastián Medina, integrante del colectivo Suroeste Vivo.

“En la medida en que se avanza con un proceso extractivo, se requiere que el Estado pueda rectificar y verificar en los estudios técnicos los requerimientos necesarios para poder tomar una decisión que valore debidamente los riesgos económicos, sociales, ecológicos y ambientales. Pero Colombia tiene una falencia para poder regular debidamente proyectos de esta naturaleza. No tenemos la capacidad técnica para hacer una verificación de la explotación”, explicó en el Hay Festival de Jericó del año 2020 Luis Jorge Garay, economista e investigador que se ha dedicado a estudiar el impacto ambiental de la minería en nuestro país.

Conflicto en el Suroeste antioqueño

“La subregión del Suroeste antioqueño está constituida por 23 municipios, localizados entre la vertiente oriental de la cordillera Occidental y la vertiente occidental de la cordillera Central, que conforman el cañón del río Cauca y la cuenca del río San Juan. Tiene una población estimada en 377.798 habitantes, según el DANE, en una superficie de 6.513 kilómetros cuadrados, que es el 10,44 % del territorio del departamento”, explica el informe *Suroeste Antioqueño: un conflicto silenciado. Aproximación a la construcción de memoria histórica del conflicto armado en el Suroeste Antioqueño, 1984-2016*, del Centro de Fe y Culturas, y Conciudadanía.

En la última década, campesinos, indígenas, ambientalistas y grupos juveniles del Suroeste antioqueño se han ido organizando en un movimiento social para defender el territorio de la extracción de minerales. Quieren conservar su patrimonio natural, proteger la vocación agrícola y las prácticas culturales de la región.

Pero en la historia reciente no es la primera vez que se organiza un movimiento social que reivindica los derechos de la población rural en este territorio. Yamid González, integrante del COA, cuenta en su tesis de maestría en Estudios Socioespaciales, que tituló *Ambúa Kurisiadayú. Poder popular, contraespacios y justicia espacial, Pueblorrico, Antioquia*, que en la región hubo movimientos estudiantiles, obreros y campesinos durante las décadas de los sesenta y los setenta, impulsados por sacerdotes de la teología de la liberación, como el padre Ignacio Betancur.

Este entramado de organizaciones, en su momento, se vinculó a los movimientos nacionales que reclamaban la atención del derecho a la educación, condiciones dignas para los trabajadores del campo y tierras para los campesinos; esta última demanda ligada a la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc).

Pero, igual que como ocurrió a lo largo y ancho de Colombia, en el Suroeste antioqueño todas esas tensiones terminaron por expresarse en el conflicto armado. En el Suroeste, en 1985, se creó el frente Ernesto Ché Guevara de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional —ELN—; y a mediados de los noventa, el bloque Suroeste Antioqueño de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) irrumpió en el territorio para combatir a los insurgentes. Una guerra en la que, por supuesto, también participaron las Fuerzas Armadas del Estado.

Según el Centro de Fe y Culturas y Conciudadanía, el conflicto armado en el Suroeste fue de “larga duración”, porque

se desarrolló durante varias décadas, desde los años cincuenta del siglo xx hasta hoy, “cuando aún persiste el accionar violento de actores armados ilegales, como el ELN y las bandas criminales provenientes del paramilitarismo y de las autodefensas, que han dejado a su paso nuevas víctimas y múltiples afectaciones sobre la vida de los pobladores”.

Una de las causas que, según el Centro de Fe y Culturas y Conciudadanía, facilitó las expresiones de violencia fue la “satanización de las reivindicaciones sociales, como los paros, las movilizaciones y la reclamación de derechos. Estas acciones fueron interpretadas como propias de las guerrillas o como fruto de la influencia de estas”.

Según *Verdad Abierta*, en el artículo *Bloque Suroeste Antioqueño*, publicado en el 2008, hay registros en la prensa de acciones que fueron más allá de la estigmatización, como la creación de “ejércitos privados en municipios como Andes, Caramanta, Venecia, Concordia y Urrao, y que cometieron amenazas, desapariciones y asesinatos selectivos de campesinos y líderes cívicos, acusados de pertenecer o simpatizar con la insurgencia, y de delincuentes comunes”.

De hecho, el Centro de Fe y Culturas y Conciudadanía destacan la selectividad como una característica del conflicto armado en la región, “ya que no se presenciaron masacres ni grandes tomas o combates, como en otras zonas del departamento; más bien se vivió un ‘accionar cotidiano’ justificado por el control social de los grupos paramilitares que actualmente se siguen reagrupando o conformando de otras maneras para sostener prácticas violentas en esta región”. Las agresiones, en muchos casos, fueron dirigidas contra líderes sociales, como en el caso de la desaparición de Pedro Nel Osorno, en 1989, y el asesinato a manos de grupos paramilitares del sacerdote Ignacio Betancur, ocurrido en 1993.

A pesar de las victimizaciones que ocurrieron en la región, el Centro de Fe y Culturas y Conciudadanía dicen que “el Suroeste es probablemente la región de Antioquia donde menos organizaciones de víctimas hay, menos investigación y documentación del conflicto, menos reconocimiento y acciones en favor de la verdad y la no repetición, y mayor silencio sobre lo que pasó, cómo pasó, por qué pasó, quiénes fueron los responsables, cómo se afrontó y cómo evitar que se repita”.

El silencio y el olvido son dos situaciones contra las que también luchan las organizaciones que hoy defienden al Suroeste del gran proyecto minero que se quiere ejecutar en sus tierras. Así lo expresa uno de los fundadores del COA, Yamid González, en su tesis de maestría: “En este contexto de violencia que hemos vivido y sufrido, también ha renacido la resistencia, producto del amor y la lucha por la vida. Con la resistencia nos enfrentamos a la violencia, nos alimentamos de experiencias históricas y actuales que nacen de nuestros sueños, y de ellos brotan la alegría, el amor, la esperanza y la autodeterminación, que se constituyen en principios de lucha para enfrentar la dominación y la injusticia. Las resistencias nos han permitido darle una nueva valoración a la vida, desde los espíritus de las montañas, del agua, de la historia, del presente y del futuro, seguimos alimentando la resistencia y la lucha por la vida”.

El esfuerzo colectivo

Herman es un líder con muchas facetas, como lo constata su cotidianidad. Un día es un caminante que se va a explorar cada rincón de la región con la Agrupación de Caminantes de Támesis (Acata); al otro, se reúne con su parche de amigos del colectivo Jóvenes por la Defensa del Territorio (Jódete); y al siguiente, lidera y gestiona las iniciativas de Codeate.

“Uno trata de construir todos los días, pero en última instancia, el resultado final es imposible de prever. Por eso estamos trabajando también con niños, niñas, jóvenes, maestros de escuelas y aliados educativos, y eso garantiza de alguna manera que les llegue a los muchachos una motivación para querer el territorio, para defenderlo. Yo, que tengo tantos años encima, recuerdo que en primaria nos enseñaban a cuidarlo”, cuenta Herman.

En sus andares por el Suroeste, le gusta visitar la Asociación Agropecuaria de Productores (ASAP), para hablar con sus integrantes de la vida campesina. También está interesado en conocer las formas de resistencia y dignidad de la Asociación de Mujeres de Caramanta (Amucar), de los Hijos de la Madre Tierra y de la Asamblea Municipal Constituyente de Caramanta.

Herman dice, además, que otra de sus tareas es mantener el equilibrio de las organizaciones, como el Comité Ambiental por la Defensa de Palermo, el Comité Ambiental por la Defensa de San Pablo, la Asociación Biabuma de Támesis, y la Veeduría Ciudadana y el Comité Futuro de Jericó, donde pueden presentarse desencuentros.

A él le gusta aprender de otras personas y otros colectivos con los que comparte su visión del mundo, como los resguardos indígenas del Suroeste: Marcelino Tascón (Valparaíso), Karmata Rúa (Jardín), Bernandino Panchí (Pueblorrico) y Miguel Cértiga (Támesis).

Todos esos nombres y siglas con los que cotidianamente Herman se relaciona son abejas y enjambres del movimiento regional que defiende al Suroeste de la minería. A estos, en distintos momentos, se han sumado líderes políticos, concejales, alcaldes y organizaciones no gubernamentales que comparten la visión de la región como un territorio sagrado para

la vida y que, según Herman, son aliados que ayudan a crear mandatos populares y planes de vida que buscan conservar la vocación agrícola y el medioambiente.

“Es que para mantener el movimiento es clave que se articulen las organizaciones, más que las personas. Lógicamente, las personas son claves, pero en el territorio somos un todo y es vital la idea y la constante pregunta sobre cómo articulamos organizaciones de cada municipio, en cada municipio, para construir ese todo”, explica Herman.

El lunes 25 de octubre del 2021 se conoció una noticia en el Suroeste que le dio un respiro al movimiento que defiende el territorio: la ANLA ordenó que se archivara el trámite administrativo de evaluación de la licencia ambiental para el Proyecto Minera de Cobre Quebradona, debido a que en los estudios que presentó AngloGold Ashanti no había suficiente información sobre “la definición del área de influencia, la caracterización de los componentes hidrogeológico, hidrológico, de geotecnia y biótico, consideraciones frente al depósito de relaves (residuos de la actividad minera) y a la subsidencia, entre otros”.

La orden de archivar el trámite de la licencia implica que AngloGold tiene un margen para corregir los informes y añadir los datos que le pide la ANLA para retomar el trámite. Por eso, los integrantes del COA no sienten que la decisión sea un triunfo; incluso, los deja intranquilos, porque ante la falta de información consideran que la ANLA pudo haber negado definitivamente la licencia.

Por eso, el COA continúa vigilante, abrazando la montaña. En estos once años de resistencia sus integrantes han dado la impresión de que son inagotables. Una pequeña muestra de esa energía es Herman, quien ha dedicado su vida de jubilado a la defensa del Suroeste, a llevar el mensaje del territorio sagrado para la vida.

“¿Que si agota? Claro que sí. Hay días de días. Pero si no seguimos, ¿entonces qué ocurre? Que puede llegar un momento de desmotivación. Pero hay una fuerza mayor, es la conciencia de lo que hemos ido construyendo a lo largo de estos años. Esa conciencia es la que nos exige que estemos ahí y no dejemos solo el territorio. Y es que llega un momento en el cual eso hace parte inherente de la vida de uno, como la sangre que fluye y está ahí. Hace parte de uno”, explica Herman.

Referencias

- Agencia Nacional de Licencias Ambientales —ANLA— (25 de octubre del 2021). La ANLA archiva trámite de licenciamiento ambiental del proyecto de minería de cobre Quebradona. https://www.anla.gov.co/01_anla/noticias/2020-la-anla-archiva-tramite-de-licenciamiento-ambiental-del-proyecto-de-mineria-de-cobre-quebradona.
- Alianza de Medios Alternativos (2019a). Jericó se moviliza contra AngloGold Ashanti. *Facebook*. <https://www.facebook.com/watch/?v=1079486452238780>.
- (2019b). Tercera Travesía por el Suroeste. *Youtube*. https://www.youtube.com/watch?v=_o6yupZxuOE.
- AngloGold Ashanti (s. f.). *Portafolio Quebradona*. <https://anglogoldashanticolombia.com/portfolio/quebradona/>.
- Bernal, I. (9 de agosto del 2021). Una empresa minera amenaza la vida del oso andino en Colombia. *Rainforest Journalism Fund*. <https://rainforestjournalismfund.org/es/stories/una-empresa-minera-amenaza-la-vida-del-oso-andino-en-colombia>.
- Censat Aguaviva (s. f.). Escuchando la voz del territorio: un abrazo a las montañas del Suroeste de Antioquia. <https://censat.org/es3/noticias/escuchando-la-voz-del-territorio-un-abrazo-a-las-montanas-en-el-suroeste-de-antioquia>.
- Cinturón Occidental Ambiental —COA— (2013). Cinturón Occidental Ambiental. *La Calle 30*. <http://lacalle30.blogspot.com/2013/04/cinturon-occidental-ambiental.html>.

- Colectivo Jódete (14 de febrero del 2019). El Suroeste se moviliza por la defensa de la vida y el agua. *Youtube*. <https://www.youtube.com/watch?v=pZj4r1WJQuc>.
- Garay, J. (2020) Minería: Luis Jorge Garay. Charla dictada en el Hay Festival Jericó 2020. *Youtube*. <https://www.youtube.com/watch?v=b9aGHNYR-J0&t=20s>.
- González, Y. (2018). *Ambúa Kurisiadayú. Poder popular, contraespacios y justicia espacial, Pueblorrico, Antioquia*. https://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstream/10495/12747/1/GonzalezYamid_2018_AmbuJusticiaPueblorrico.pdf.
- Isaza, J. C. (2016). *Representaciones sociales del agua en un contexto de conflicto socioambiental por exploración minera - corregimiento de Palocabildo, Jericó-Antioquia*. <https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/59046/8026236.2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.
- Ministerio de Minas y Energía (2002). *Plan nacional de desarrollo minero*. <http://www.simec.gov.co/Portals/0/Documental/1157.pdf>.
- Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (s. f.). Conflicto minero: Campesinos y agricultores del Suroeste de Antioquia se levantan contra AngloGold. https://mapa.conflictosmineros.net/ocmal_db-v2/conflicto/view/969.
- Pérez, L. G. (20 de octubre del 2020). Afectaciones a perpetuidad de la minería metálica. *El Suroeste*. <https://periodicoelsuroeste.com/afectaciones-a-perpetuidad-de-la-mineria-metalica/>.
- Unidad de Planeación Minero Energética —UPME— (2006). *Plan nacional para el desarrollo minero, Colombia país minero, visión al año 2019*. https://bdigital.upme.gov.co/bitstream/handle/001/906/upme_244_Colombia%20pais%20minero_2006.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
- VIEWPress (2012). Támesis, Antioquia, vigilia por la defensa del territorio. *Youtube*. <https://www.youtube.com/watch?v=zjt0aNel9ws>.

Narrativas para colorear la Ciudad Blanca

Por Alexandra Molina Trujillo

Alexandra Molina Trujillo (Popayán, 1988). Comunicadora social y periodista, magíster - becaria en Estudios Interdisciplinarios del Desarrollo. Ha trabajado como docente en la Universidad del Cauca y la Jorge Tadeo Lozano. Actualmente se desempeña como enlace de comunicaciones en la Agencia de Renovación del Territorio y está por publicar *Las cosas por contar*, un libro ilustrado de cuentos sobre el cuerpo de las mujeres como territorio de luchas y victorias.

En el 2015 Yinna Ortiz y Mónica Quevedo crearon un grupo de estudios de género. Desde ese espacio cuestionaron los estereotipos y los roles de género arraigados en el departamento del Cauca. Las reflexiones las llevaron a fundar el Colectivo Viraje, una organización que crea narrativas multimedia a partir de historias de personas LGBTI que habitan en zonas urbanas y rurales de la región. En sus relatos evidencian un territorio diverso y colorido, contrario a las narrativas históricas de una sociedad conservadora como la de Popayán, conocida en Colombia como la Ciudad Blanca.

En el 2021 hubo un estallido social en Colombia. “*Qué guaricha arrecha, arrecha. China, chamaca, guaricha. Pucha, icachen cómo luchan!*”. Mónica y Yinna eran parte de un grupo de mujeres que irrumpieron en una calle, en junio de ese año, y entonaron la canción de la Batucada de la Articulación Feminista de Popayán. Se manifestaron contra las injusticias del país y contra el Gobierno del presidente Iván Duque. Todas estaban de amarillo, con pintas en el rostro y pañoletas moradas. Esa fue la primera vez que las vi desde el aislamiento obligatorio por cuenta de la pandemia del covid-19. Después vinieron otros encuentros.

Mónica

Agosto del 2021. Son las dos de la tarde. Estoy en Madeira, un café del centro de Popayán. A este sitio llegué después de una travesía por la ciudad: hay obras inacabadas, tierra, humedad y un sentimiento de inseguridad avivado por los efectos de la pandemia. Calles cerradas, telas verdes que cercan las vías. A mi izquierda está sentada Mónica Quevedo Hernández, una diseñadora gráfica que ha publicado libros, ha colaborado con la elaboración de fanzines y es activista transfeminista desde que estaba en la universidad.

—¿Ordenamos?

—No, esperemos a Yinna— me sugiere.

Yinna Ortiz es una antropóloga que ha escrito e investigado sobre transfeminismo, una corriente del siglo **xxi** que in-

cluye en el discurso feminista las discusiones sobre el tránsito de género. Igual que Mónica, es activista y militante de algunos colectivos maricas, como prefieren denominarlos desde su postura política. Además de ser amigas, participan juntas en proyectos políticos y sociales. Desde que eran estudiantes universitarias hacen parte de un colectivo que hoy se reconoce en la ciudad como Viraje.

Mónica nació en Corinto, un municipio del norte del Cauca que ha padecido muchas veces la violencia por cuenta de los grupos armados ilegales. Nació entre montañas e influenciada por la cosmovisión del pueblo indígena nasa. Ella llegó a un mundo al que más adelante cuestionaría a través de imágenes y palabras, y al cual derrotaría inspirada en otros mundos posibles.

Mónica lo hace todo con determinación y claridad, como lo evidencia su talento para narrar. Desde muy joven se interesó por contar historias que interpelaran los convencionalismos, siempre poniendo el dedo en la llaga de las “buenas costumbres”. Fue así como publicó un libro ilustrado sobre el trabajo doméstico, resultado de su tesis de grado.

En el café, Mónica habla de Paul Preciado, un filósofo doctorado en Princeton que fue discípulo de Jacques Derrida y que actualmente, según la *Art Review*, es una de las veinticinco personas más influyentes en el área del arte contemporáneo. Según ella, su visión sobre el género y la teoría *queer* resultó ser un manifiesto claramente transformador o, por lo menos, inquietante.

Mientras esperamos a Yinna, me cuenta cómo se juntaron y se propusieron sacar adelante otras formas de narrar el mundo. “En la sociedad todo el tiempo se está haciendo vigilancia, reforzando, reafirmando y moldeando el género. En el 2015 teníamos muchas preguntas. Una vez nos encontramos en Wipala —un café galería de Popayán—, para hablar sobre un texto de Paul Preciado”.

Mónica recuerda que en ese 2015, cuando todas eran jóvenes estudiantes de antropología y diseño gráfico, se reunían para discutir los textos de Preciado, porque él interpelaba la visión hegemónica del género, marcada por valores patriarcales y machistas.

Ese fue el inicio de Viraje, un colectivo que elabora narrativas sonoras, visuales y textuales con la intención de visibilizar las formas en que se configuran las disidencias sexuales y de género en el Cauca, un departamento ubicado en el suroccidente de Colombia.

Las integrantes del colectivo van en contravía de las normas sociales, machistas y patriarcales, con el objetivo de dar a conocer la pluralidad del Cauca, tanto en sus zonas urbanas como en sus zonas rurales. Al cuestionar los patrones del machismo en una sociedad conservadora como la caucana, los relatos de Viraje perturban los lugares de representación establecidos. Ellas buscan que allí se reconozcan las identidades de género diversas y las disidencias sexuales.

Ordenamos café. Mónica enfatiza en que en todo ámbito social se imponen condiciones a los cuerpos. Pero, por supuesto, las disidencias sexuales y de género aparecen rebeldes de cara al orden patriarcal que impera en la sociedad colombiana. Las reflexiones del grupo en ese 2015 pasaban por las ataduras de los roles de género y sus imposiciones al uso de espacios públicos, como los baños de la Universidad del Cauca. También por la etnografía, la vigilancia y el poder.

Muy pronto, Pinina Flandes, activista y performista bogotana, se convirtió en un referente para las fundadoras de Viraje. En su sitio web Pinina escribió un manifiesto: “Me convierto en juego y crítica, ironía y análisis, desde la firme intención de proponer una ampliación de mentalidad. Con ello apuesto por una deconstrucción o desmontaje de prácticas y discursos que,

sometidos a observación, no rinden cuenta de sí mismos ni de algo que los sostenga como posturas totales, obligadas (deontológicas), esencialistas o que no se puedan re debatir. Para mí, ni siquiera la existencia es esencial; para mí todo es contingencia y posibilidad infinita de la diferencia”. Con este tipo de lecturas y experiencias Mónica Quevedo, Yinna Ortiz, Alexa Muñoz y William López exploraron nuevas ideas respecto al género.

Con esas lecturas, y el contraste de vivir en Popayán, las integrantes de Viraje comprendieron que las calles y otros espacios públicos del centro de la ciudad estaban marcados con jerarquías de acuerdo a una sociedad machista y patriarcal. En la espacialidad urbana hay límites sutiles y algunos evidentes, que determinan lo que es posible y lo que no, lo que se incluye y lo que se excluye, lo que se nombra y lo que se silencia, lo que existe y lo que se niega.

Después de la reflexión vino la acción política, porque en las lecturas encontraban ideas para intervenir los espacios públicos y privados. Inspiradas en Pinina Flandes diseñaron un fanzine. Luego, cuando recibieron su visita, hicieron un conversatorio sobre lo *queer* y llevaron a cabo una puesta en escena. Pinina se trepó, usó su barba, tacones, turbante y una camisa escarchada en Popayán, la ciudad blanca, conservadora y clasista. Desde entonces las integrantes de Viraje producen rupturas.

Yinna

Yinna llega a Madeira, se sienta con nosotras y toma poco a poco su café. Hablamos del espacio público, de la exclusión histórica: “El espacio te enseña a ser mujer u hombre. A estar en el binario. Queríamos cuestionar eso a través de preguntas”, explica.

Yinna es joven. Al iniciar la década del 2010 se hizo pedagoga y, quizá sin proponérselo, con su nueva labor se perfiló para ejercer un activismo enérgico. Es serena, crítica, rigurosa, clara en sus búsquedas investigativas. Su mirada da a entender que por su cerebro siempre está pasando un torrente de palabras, pero es cautelosa y solo las deja salir en el momento indicado. Ella también hace parte del equipo fundador de Viraje, el colectivo que, con herramientas interdisciplinarias, propone narrativas transmedia sobre los discursos y las representaciones de género que tienen repercusiones en las zonas urbanas y rurales del Cauca.

Yinna estuvo presente en la génesis del colectivo, cuando organizaban tertulias universitarias; por eso, ha sido testigo de su consolidación. Tiene la voz suave, pero usa un volumen que demanda atención. Cuando habla mira al frente, como escaneando recuerdos. Como antropóloga, analiza cada palabra a la luz de las teorías que estudió en la Universidad del Cauca; y como autodidacta, lo cuestiona todo.

Yinna perteneció a la Fundación por la Diversidad Sexual del Cauca (Fudiversa), “juntanza que al fin no cuajó”, pero que le sirvió de experiencia para diseñar un mapa con los testimonios de las maricas de la ciudad. A las travestis, por ejemplo, las marginalizaron y excluyeron del parque central de Popayán. Cuando ocupaban ese lugar, recibían amenazas de la policía, que las retenía y las bañaba por estar en los espacios destinados a “otra gente”. Incluso circularon relatos de personas trans secuestradas y llevadas a las afueras de la ciudad, donde eran abandonadas a su suerte. Debían regresar desnudas como castigo por ser disidentes de género. “Era un mapita sobre cuáles eran los lugares en los que socializaban, cuáles eran las maricas que ya estaban muertas... Tratamos de contar la historia de las maricas en Popayán”, explica Yinna.

Mientras converso con ellas, pienso en las muertes de las personas trans y maricas, en los ríos y quebradas que aún arrastran cuerpos, en las desapariciones, en el estallido social de abril del 2021. En las fotos de las personas marchando, en los cantos de la batucada, en lo que comparten las juventudes en sus perfiles de Facebook, en lo que se dice en las calles de la gente que protesta. En todo eso que se quiere cambiar.

Memorias Locales fue un antecedente, un proyecto que emprendieron, pero que no se concretó. Luego buscaron apoyo en Fondo Lunaria, una organización que financia proyectos liderados o gestionados por mujeres jóvenes de la periferia. En el grupo ya habían surgido preguntas sobre la experiencia de ser marica en el campo y la necesidad de contar las historias de lo que sucede en los espacios rurales. Por eso, cuando recibieron los recursos de Fondo Lunaria salieron de Popayán y dieron vida a Polisemias Rurales, un proyecto interdisciplinar y multimedia que busca visibilizar las formas de experimentar el género y la sexualidad en lugares rurales del departamento del Cauca. A partir de este proyecto han producido relatos, mapas y pódcast.

Yinna, entre líneas, explica que al hablar de género las afirmaciones sobre la desigualdad pueden resultar reduccionistas si no se tienen en cuenta las particularidades de las estructuras de opresión que las determinan. “No es lo mismo ser marica en la ciudad que en el campo. Queríamos contar un poco sobre eso”, complementa Mónica, quien es la encargada del diseño, de las ilustraciones y de escribir algunos textos.

Ante los ojos de Dios

Desde Popayán se llega a Mercaderes, tras recorrer las curvas cerradas de la carretera más importante del sur del país, la

autopista Panamericana. Al inicio, por la ventana del carro, se ve el verde tupido de las arboledas, seguido del pasto extendido, el río Patía y el Galíndez. Y a los costados de la vía hay personas que venden dulces, kumis y frutas.

La carretera es estrecha. Por momentos al carro lo arropa la neblina y de la nada aparece la luz brillante del sol, que ilumina los camiones, las motos, los buses y a los ciclistas. La vía serpentea, sube y baja, por las montañas del Macizo Colombiano, donde se encuentra el manantial más importante del país, que da origen a ríos como el Cauca, el Magdalena, el Putumayo y el Patía, que recorren el territorio nacional de sur a norte y de oriente a occidente.

Después de tres horas de recorrido, ya cerca de Mercaderes, se siente el sopor del Valle del Patía. La luz del sol se filtra entre los árboles multiformes. La vegetación caucana es diversa y en este punto geográfico pasa de ser verde y frondosa a verse como tierra naranja. Cuando se observa a Mercaderes situado sobre una meseta, se entiende por qué es un corredor económico profundamente estratégico para la economía del sur de Colombia, particularmente para el tráfico de sustancias ilegales.

En Mercaderes, los integrantes del equipo de Viraje conocieron la historia de una pareja LGTBI que les permitió entender que la sanción social y la violencia contra las parejas del mismo sexo eran el pan de cada día. En aquel municipio, que dos personas del mismo sexo bailaran juntas era un escándalo. “Dos mujeres se están desperdiciando”, se lee en una de las historias publicadas por Viraje en marzo del 2019, una frase que da cuenta del pensamiento homofóbico que impera en la región.

Allá les dijeron que no podían existir “bares de ambiente”, lugares de entretenimiento exclusivos para personas sexual-

mente diversas, porque “las pelaban”. Viraje analizó la situación y enfatizó en algo que se ha descrito a lo largo de esta historia: “Maricas, locas, machorras, cacorritos o cacorritas, como los denominan, son aceptables en tanto no perturben el orden de lo posible y lo visible”.

La realidad de las diversidades sexuales en el campo es compleja. “Yo una vez fui a Mercaderes con la Mesa Departamental y ahí conocí a un chico que era cafetero, que vivía en una vereda. Sabía que era marica, pero que también era recolector de café. Yo decía, bueno, y esas experiencias cómo son, qué significa ser marica, cafetero y asumir ese lugar desde la masculinidad en esos espacios tan complejos; y, además, sabemos que el Cauca está súper atravesado por el conflicto armado”, cuenta Yinna sobre las inquietudes que le planteaban las personas con orientaciones sexuales diversas que habitan la ruralidad.

Cuando llegaron a Mercaderes, las integrantes de Viraje contactaron a uno de los participantes de Polisemias Rurales, a quien llamaremos Juan para reservar su verdadera identidad. En el texto, Juan describe la imposición de instituciones como la Iglesia: “Nosotros vivimos en un pueblo muy pequeño y las comunidades de pueblos pequeños tienden a entender que la homosexualidad es pecado, o eso nos han hecho creer por la Iglesia, la Biblia, la religión. Que es pecado y que no está bien visto ante los ojos de Dios. Entonces, a uno psicológicamente le meten eso y uno siente vergüenza. Yo decía: como soy pecador y no está bien visto ante los ojos de Dios, entonces hay que llevarlo oculto. Es una doble vida”.

Su testimonio está acompañado por una ilustración hecha por Mónica, en la que lo muestra sentado en unas rocas, contemplando el paisaje, el ganado y unas nubes que parecen arrastradas por el viento. Me encontré con Juan años después

de que se publicó su testimonio, nos sentamos sobre un andén esquinero, al lado del Parque Caldas de la ciudad de Popayán. Durante el breve encuentro me contó que trabaja para exigir el respeto de los derechos humanos de la población sexualmente diversa. Lo hace desde espacios de incidencia política, en centros educativos y culturales.

Juan también cuenta que el primer evento en Mercaderes, donde se expresó públicamente la población que hace parte de las disidencias sexuales y de género, se llevó a cabo en el año 2007. Se trató de un reinado municipal en el que participaron personas de diferentes corregimientos, y fue entonces cuando sintió el peso de una de las instituciones con más poder en el pueblo. “El párroco se opuso, pero todo el mundo estaba a la expectativa. Después del evento, tengo entendido que el mismo cura felicitó a la persona que lo organizó y, ya después, al siguiente año, el comercio nos colaboró, la alcaldía aportó dinero. El evento se volvió tradición”, explica Juan.

Uno de sus propósitos más fuertes es contribuir a que se muestren ante la opinión pública prácticas como los reinados de transformismo, los eventos deportivos y otras actividades realizadas por la comunidad LGBTI. “Queremos que la gente heterosexual diga: estos no son peluqueros, esto no es prostitución, porque a nosotros nos tienen con ese estigma de lo peor de la sociedad. Entonces que digan: ellos son cultura, son deporte, ellos sobresalen en tal cosa. Que estos eventos se publiquen o se haga publicidad para que queden bien vistos”.

En el país hay un gran subregistro de violencias y crímenes cometidos contra las personas disidentes sexuales y de género. Sin embargo, organizaciones sociales y estudios académicos denuncian la estigmatización contra esta población, que muchas veces proviene de las instituciones del Estado y los medios de comunicación.

Las violencias contra estas personas suelen ser reducidas a crímenes pasionales o a ajustes de cuentas de grupos armados ilegales. Nikita Simonne Dupuis Vargas, hombre trans y comunicador social, explica que “para el caso de transfeminicidios, por ejemplo, no se incluyen homicidios de hombres trans ni de personas no binarias asignadas hembras al momento del nacimiento, para las cuales no hay categoría jurídica penal”.

Según Colombia Diversa, una organización no gubernamental que monitorea la situación de los derechos humanos de la población LGBTI, entre el 2019 y el 2020 ocurrieron, al menos, 448 hechos de violencia contra personas de esta comunidad. La misma organización denunció que 181 de los casos, es decir el 40,4 %, fueron homicidios.

En el 2019, las mujeres trans y los hombres gais fueron las principales víctimas de violencia a causa de su orientación sexual o su identidad de género, según el informe *Más que cifras*, publicado por Colombia Diversa. El documento indica que las estadísticas también se incrementaron significativamente en contra de las mujeres lesbianas y trans, y de las personas bisexuales.

De acuerdo con el reporte, en el 2019, “el mayor número de casos de violencia contra personas LGBTI corresponde a abusos cometidos por agentes de la policía”. Además, “para este año la proporción de hechos de violencia motivados por el prejuicio fue mayor en los casos de amenazas y en actos de violencia cometidos por agentes de la policía”.

Éramos de la Edad de Piedra

A Villa Rica se llega desde Popayán por la autopista Panamericana, pero en el sentido contrario a Mercaderes. En la primera parte del camino se abren montañas, cielos grises, y el frío

se siente en los huesos. Después el clima cambia, pues el cielo se hace más azul y el sol más vivo. Los cañaduzales taján los territorios y se perciben como cuadrantes extensos divididos por laberintos de carreteras destapadas y polvorientas. Los camiones no pasan tan frecuentemente; aquí son protagonistas los trenes cañeros y las motos.

Hablé con Muñeca, una de las mujeres trans que participó en Polisemias Rurales. Ella me contó, a través de una llamada, su experiencia con el colectivo:

—¿Qué me puedes decir de Mónica y de Yinna?

—Yinna es una mujer con un entendimiento fabuloso, es una mujer única, marca la diferencia entre todas las mujeres. Mónica también, claro, la misma descripción —y soltó una carcajada.

Muñeca me explicó que les debe mucho a Mónica y a Yinna, debido al trabajo que hicieron en relación con la conciencia política y los derechos sexuales y reproductivos. Y por las conversaciones que tuvieron para que ella recuperara la confianza y se aventurara a hablar en público, pues antes su voz “masculina” la hacía temer la reacción de sus interlocutores.

Conocer a las personas de Viraje le ha permitido a Muñeca, activista del municipio de Villa Rica, participar en escenarios públicos, incluso de manera remunerada. También habló de las pijamadas que organizaron, de los regalos que le traían y del último evento del 2021, cuando intentaron generar conciencia sobre el virus del VIH y la estigmatización social de la población LGBTI, junto a otras organizaciones privadas y de orden estatal.

Ese día entregó los fanzines de Polisemias Rurales y condones que Viraje le envió por una empresa de correos. Una vez recibieron el material visual, muchas personas manifestaron su deseo de verse ahí también. “Ahora quieren estar en esos

fanzines, quieren tener su ilustración, quieren vivir ese empoderamiento para hablar. Hay gente que todavía me llama: ‘Ay, es que yo vivo en mi casa este conflicto y que mis padres me empiecen a ver de otro modo sería lo mejor’”, relata Muñeca.

El fanzine les permitió reconocerse: “Me veía igualita, pero en caricatura. Empezaron a leer la historia mía, el modo en que yo había vivido, cómo éramos de la Edad de Piedra y todo era cohibido”, explica Muñeca, quien recalca que antes la situación de la población diversa era más adversa en Villa Rica, debido a los prejuicios y la estigmatización.

Ese pasado más hostil ha sido abordado por las integrantes de Viraje. “Desde niño me destaqué siempre. Fui el primer gay visible que tuvo el municipio de Padilla, del que dijeron: ‘Este es gay desde pequeñito’. Por ende, sufría mucho *bullying*. Recibí mucho maltrato físico, emocional y psicológico toda la vida. Tengo cicatrices en cada rincón de mi cuerpo que me hacen recordar cada momento de mi vida: en la cabeza, en la espalda, en las manos, en las piernas”, cuenta Burbuja en uno de los fanzines de Viraje.

La criminalización de las identidades y las expresiones de género diversas o no normativas todavía es una realidad en el mundo. En Guyana, un país ubicado en Suramérica, aún se penaliza la homosexualidad. En el ámbito internacional, la homosexualidad fue considerada como una enfermedad psiquiátrica hasta mayo de 1990, cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) la sacó de su lista de trastornos mentales. Por eso, el 17 de mayo es el Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia.

En Colombia, la Corte Constitucional, por demanda de las personas LGBTI y de organizaciones que defienden los intereses de esta población, ha realizado cambios sustanciales en la

estructura legal del Estado para reconocer los derechos de las disidencias sexuales y de género.

Uno de los primeros casos emblemáticos fue la Sentencia C-075 de 2007 de la Corte Constitucional, que reconoció los derechos del sistema de seguridad social en salud, así como los patrimoniales, para las parejas del mismo sexo. Después, la misma Corte emitió la Sentencia C-577 de 2011, con la que se protegieron legalmente los contratos “solemnes y formales” entre parejas del mismo sexo.

La transición de género se empezó a proteger en el país cuando se emitió la Sentencia T-771 de 2013, con la que se otorgó el derecho a someterse a “procedimientos médicos necesarios para la afirmación sexual de las personas transgénero por medio de las entidades promotoras de salud (EPS)”.

En Colombia es ampliamente recordado el caso de Sergio Urrego, un estudiante de secundaria de Bogotá que se quitó la vida después de múltiples episodios de acoso, promovidos por las directivas de la institución educativa donde estudiaba. Sergio Urrego T-478 se llama también la sentencia con la que la Corte Constitucional estableció en el 2015 las acciones que deben llevar a cabo las instituciones del Estado para erradicar la discriminación de los niños, las niñas y los adolescentes con orientación sexual e identidad de género diversas en lugares como los colegios.

Finalmente, en la Sentencia T-447 de 2019, la Corte reconoció el derecho que tienen las personas transgénero a cambiar el nombre y el sexo en su documento de identidad. Sin embargo, aunque los derechos relacionados con las disidencias sexuales y de género han sido reconocidos en la legislación y la Constitución, el problema de las violencias, la exclusión y la estigmatización es estructural y cultural.

Por eso el trabajo de Viraje se centra en las narrativas y en la representación de las disidencias sexuales y de género, para socavar la naturalización de las violencias que cotidianamente sufren estas personas en lugares como el departamento del Cauca.

Un fanzine

La luz de la calle entra por el balcón que da a la carrera novena y que hace parte de un apartamento coqueto del Modelo, un barrio antiguo de Popayán. Hay un sillón grande, cómodo, y un comedor. Al fondo hay una ventana atiborrada de plantas. También hay otro estante que sostiene más plantas y fotos de amigas. Mónica a veces se levanta, trae galletas, café, libros y fanzines.

Lo primero que Yinna me muestra son fotos y videos sobre los encuentros iniciales de Viraje. En uno de los audiovisuales se ve a Mónica, cuando era estudiante de diseño gráfico, acompañada de una de sus colegas, con la que estaba diseñando un fanzine.

Mónica se va por un momento, trae ese fanzine, titulado *Anatomía de un sujeto andante*, y lo extiende sobre el comedor. Lo abro y leo su primer apartado: “Se nos enseña a ser hombres o mujeres, pero jamás algo distinto de ello”; son palabras de Pinina.

Paso las páginas, todas horizontalmente cortadas en tres. Tiene la intención de que el lector arme su propio relato. En la cara izquierda del fanzine hay frases breves, y en la derecha, partes de cuerpos de personas, animales y algunos seres fantásticos, como de ciencia ficción. Yo misma armo mi historia y elijo una página al azar. “Me tocaré”, dice en la cara izquierda del fanzine, y al otro lado veo el dibujo de una cabeza de animal. La tercera parte de la historia es la ilustración de unas piernas peludas.

Alex

“Hay múltiples violencias y múltiples actores. No todas las violencias se generan por actores armados con un proyecto político o económico”, dice Axel Rojas, sociólogo, magíster en Estudios Culturales y profesor de antropología.

Axel investiga la violencia en el norte del Cauca. Plantea que existe un orden social variado, que el actor armado busca erigirse como un poder localizado y así afianzarse, no necesariamente como una imposición; la comunidad lo negocia con mayor o menor resistencia. Explica que a veces se construye con diálogo, amenazas u otras formas, sin desconocer que la comunidad no es una *tabula rasa*. Así, una moral conservadora puede rechazar o vedar las disidencias sexuales. “Creo es que estas experiencias pueden hablar de la inestabilidad de las masculinidades heteronormativas. Esta es una pregunta pendiente”, dice.

William

Todas las integrantes de Viraje, junto a William, escriben historias, redactan proyectos, hacen trabajo de campo y buscan convocatorias. A William lo conocí el día del Junte Regional por el Derecho a Decidir, organizado por la Red DeFemSoras, Yukasa Feminista, el Colectivo Viraje, Yapuranas Colectiva Feminista, Aquelarre Laboratorio de Diseño y Comunicación Visual, la Red Rojo y Violeta Pereira y la Red Huilense de Defensa y Acompañamiento en Derechos Sexuales y Reproductivos (RHUDA). Esa tarde hubo música, pedagogía, conversaciones sobre la despenalización social del aborto y estampación de camisetas y pañuelos verdes.

William me sonrió desde otra mesa. Tras leer mis apuntes, y a propósito de los fanzines de Polisemias Rurales, me habló

de interseccionalidad, de la violencia a la que se someten las personas LGBTI en los territorios rurales, de los actores que cometen las agresiones y de las maneras en que se protegen de ellos.

“Muchos compañeros y compañeras, sobre todo indígenas, mencionaban que quien ejercía la violencia física no era un desconocido, sino el tío, el primo, el papá, el abuelo. Esto muestra la complejidad del *continuum* de violencias”, me explicó William. Agregó que esas violencias también ocurren en los espacios domésticos, donde además las tareas del cuidado se recargan sobre las mujeres, y que los roles sociales asignados a lo femenino y a lo masculino perpetúan esa brecha de desigualdad.

Según William, la desigualdad no solo tiene que ver con que se desconozcan las labores del cuidado. También, con el acceso a la educación y con que las mujeres y las disidencias sexuales tengan la posibilidad de participar en espacios políticos como las juntas de acción comunal, los concejos municipales y las asambleas departamentales.

Días después de nuestra conversación, en una llamada, William recordó la historia de una mujer trans del norte del Cauca. Ella se fue de Villa Rica para Cali, a vivir con su pareja. Allí hizo su tránsito. A él lo asesinaron y, posteriormente, dejaron su cuerpo afuera de su casa, en una bolsa de basura. Fue en ese momento cuando ella se enteró de que él hacía parte de un grupo paramilitar. “Cuando empezó a agudizarse el conflicto entre pandillas por el control del tráfico de drogas, ella mencionó que los paras no solo eran los actores que generaban la violencia física, sino que muchas de ellas también tuvieron vínculos sexuales y afectivos con ellos”, explica William.

Viraje

El Junte Regional por el Derecho a Decidir se lleva a cabo en un café de la carrera tercera, la misma que baja hacia Tulcán, un morro en forma de pirámide ubicado al oriente de Popayán. En septiembre del 2020, en plena pandemia, un grupo de indígenas del pueblo misak derrumbó la estatua del conquistador español Sebastián de Belalcázar que estaba instalada en ese morro.

De fondo, en el café, suena Rebeca Lane, una cantante de rap feminista, guatemalteca. Luego, una mujer habla del aborto en municipios como El Tambo, explica que los recursos limitados para atender las interrupciones voluntarias del embarazo en las clínicas del Cauca tienen un doloroso costo: la vida de las mujeres.

Las asistentes escuchan con atención. Observo a Mónica y a Yinna, que estampan pañuelos verdes. Hablan de los ejercicios de investigación de Viraje en Polisemias Rurales y del trabajo que hicieron en el 2021, cuando ayudaron a elaborar el informe sobre las violencias contra las personas LGBTI en el Cauca, que entregaron a la Comisión de la Verdad. En ese trabajo evidenciaron que no todos los agresores de la población LGBTI eran personas foráneas, sino que entre ellos también había integrantes de las comunidades a las que esta población pertenecía.

Viraje sigue militando en las calles y en la academia. Para la conmemoración del 8 de marzo del 2022 expuso en el Paraninfo Francisco José de Caldas relatos de feministas, y marcó cada una de las sillas de la universidad con “pañuelos verdes aborteros”.

Ese 8 de marzo salieron a las calles y convocaron, con otros colectivos de Popayán, a mujeres diversas: trans, bisexuales,

lesbianas, indígenas y campesinas, quienes llevaban consigo carteles en los que se leía “Aborto libre y seguro”. Usaban pañuelos verdes y morados, con consignas antirracistas y antipatriarcales. En Popayán, esta fecha cada año cobra más relevancia, así como la lucha de las mujeres por sus derechos.

Luego de escucharlas en el café, me despido de Yinna y de Mónica. Nuestro encuentro me hace pensar en las identidades, las singularidades y las luchas que se presentan en la ciudad; las mismas que se observan en las pintas de las calles y las paredes de Popayán: la blanca, la negra, la mestiza, la campesina desplazada, la indígena, la marica, la Popayán de abolengo. Todo lo que a fin de cuentas convoca, junta y nos deja la cabeza llena de preguntas.

Referencias

- Ávalos, A. (30 de junio del 2019). La censura institucional se parece a la violación. *El País*. https://elpais.com/elpais/2019/05/31/icon/1559299276_261136.html.
- Colombia Diversa (2019). *Más que cifras. Informe de derechos humanos de personas LGBT en Colombia, 2019*. <https://colombiadiversa.org/c-diversa/wp-content/uploads/2021/03/Mas-que-cifras.pdf>.
- Corte Constitucional (2007). Sentencia C-075. <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2007/c-075-07.htm>.
- ____ (2011). Sentencia C-577. <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2011/C-577-11.htm>.
- ____ (2013). Sentencia T-771. <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-771-13.htm>.
- ____ (2015). Sergio Urrego T-478. [https://www.corteconstitucional.gov.co/inicio/T-478-15%20ExpT4734501%20\(Sergio%20Urrego\).pdf](https://www.corteconstitucional.gov.co/inicio/T-478-15%20ExpT4734501%20(Sergio%20Urrego).pdf).
- ____ (2019). Sentencia T-447. <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2019/t-447-19.htm>.
- Flandes, P. (s. f.). Laboratorio performático. *Pinina Flandes*. <https://pininaflandes.webnode.mx/>.

Viraje (2019). *Polisemias Rurales. Narrativas corporales, sexuales y de género en Mercaderes (Cauca)*. https://issuu.com/colectivoviraje/docs/polisemias_rurales_narrativas_corpo.

____ (2020). *Polisemias Rurales. Narrativas corporales, sexuales y de género en Villa Rica (Cauca)*. https://issuu.com/colectivoviraje/docs/polisemias_rurales_narrativas_corporales__sexuales.

Tierra Grata: el desafío de vivir en paz

Por Carlos Andrés Orlas Sánchez

Carlos Andrés Orlas Sánchez (Medellín, 1988). Es politólogo de la Universidad de Antioquia. Ha sido periodista narrativo, fotógrafo y productor audiovisual en medios alternativos. Actualmente acompaña el trabajo legislativo del representante a la Cámara por el partido Comunes Pedro Baracutao García.

Jackeline Yajure, Sirlis Mejía y Fredy Escobar son tres excombatientes de la guerrilla de las FARC que se acogieron al Acuerdo Final de Paz. Ellos se reincorporaron a la vida civil en el corregimiento Tierra Grata del municipio de Manaure. Allí encontraron un lugar para soñar, reencontrarse con sus familias, trabajar en comunidad y construir una vida lejos de las armas. Con su labor defienden los derechos de las personas en proceso de reincorporación y, de paso, ayudan a mejorar la calidad de vida de los indígenas yukpa y de los campesinos de esta zona del departamento del Cesar.

Cuando llegaron al corregimiento Tierra Grata del municipio de Manaure, en el departamento del Cesar, los entonces combatientes de los frentes 19 y 41 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia —FARC— eran presa de la incertidumbre. Todos portaban un fusil y un morral con víveres, objetos personales y el equipo de acampar. Llegaron entre el 20 de noviembre del 2016 y el 28 febrero del 2017. En ese período 162 hombres y mujeres pertenecientes al bloque Martín Caballero, más conocido como el bloque Caribe, concluyeron su última marcha en armas.

La caminata duró seis horas. Comenzó en la serranía del Perijá, cerca de la frontera con Venezuela, y culminó en el sector conocido como Conejo, en La Guajira colombiana. En este punto los guerrilleros tomaron varios buses que los trasladaron hasta Tierra Grata, en la región Caribe. Allí iniciaron la dejación de armas y la reincorporación a la vida civil. Lo que no advertían aún era que el tránsito a la legalidad sería largo, complejo, saboteado y luchado.

Fredy Escobar, conocido en la guerra como Mateo, se reincorporó en Tierra Grata, donde actualmente es impulsor del trabajo cooperativo, principalmente en relación con la gestión de la tierra y la vivienda digna. Cuando le pregunto por lo que ha pasado y por lo que viene, a cinco años de la firma del Acuerdo de Paz con el Estado colombiano, hace un silencio prolongado, mira hacia Cerro Pintado, montaña que tantas veces recorrió para cruzar a Venezuela, sonríe y sentencia: “Esto

es una resistencia”. Lo dice porque piensa que existe un sabotaje institucional a la paz; a la forma de vida guerrillera, que es profundamente campesina; a la reincorporación política. Él no deja de preguntarse por “el estatus de la revolución”, es decir, por el proyecto político, por el quehacer en la llamada “Paz con legalidad”, lema de Iván Duque, presidente de Colombia entre el 2018 y el 2022, que era detractor del Acuerdo Final de Paz.

De los 162 firmantes de la paz que llegaron a Tierra Grata, 112 aún permanecen en el lugar. Aunque algunos se fueron, ahora en este Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación —ETCR— viven 350 personas, porque allí también se asentaron los parientes de los exguerrilleros y porque durante estos cinco años han nacido 55 niños y niñas, hijos de excombatientes.

El ETCR de Tierra Grata ha resistido y es hoy un referente en asuntos como la autogestión de la vivienda y la construcción de un hábitat para la paz. Es también uno de los espacios más representativos de la reincorporación comunitaria, porque los firmantes de la paz se integraron con las comunidades indígenas y los campesinos que habitan la zona, y juntos comenzaron a gestionar la vida en condiciones dignas.

Tierra de campesinos, indígenas y excombatientes

La vereda Tierra Grata está ubicada en el municipio de Manauare, en las estribaciones de la serranía del Perijá, la segunda montaña productora de agua dulce en el Caribe colombiano, después de la Sierra Nevada de Santa Marta. La vereda se encuentra a media hora de Valledupar, la capital del Cesar, y está habitada por campesinos e indígenas de la etnia yukpa.

“En esta zona del Cesar habitaban pocos campesinos a la llegada de los reincorporados. La mayoría estaban asentados

en las montañas, en el corregimiento San José de Oriente”, cuenta Manuel Ávila Gil, excombatiente que adelanta su reincorporación en Tierra Grata. Pero cuando los campesinos se enteraron de que allí habría un ETCR se acercaron al lugar y surgieron tensiones.

“Saber que los integrantes de las FARC venían para nuestro territorio fue algo traumático, pero luego trabajé con ellos en muchos procesos, principalmente en el proyecto del agua, y me di cuenta de que ellos tienden a poner de su parte, que quieren el cambio para este país”, dice Zule Mesa Quintero, campesina de Tierra Grata.

Una experiencia similar vivió Keidys Catherine Julio, habitante de Manaure y lideresa de víctimas del conflicto armado, quien cuenta que a la llegada de las FARC “el municipio se sentía muy tensionado. Como líderes nos sentíamos amenazados porque de pronto podía haber un cambio en el orden público, pero con el pasar del tiempo y el avance en los acuerdos nos dimos cuenta de que no es así, porque ya hemos trabajado, hemos tenido actividades de reconciliación, actos culturales y encuentros con ellos”.

Si entre los campesinos había desconfianza, entre los indígenas había zozobra y rechazo total. Los yukpa son un pueblo seminómada de trece mil hablantes. Su economía se basa en la recolección, la caza, la pesca y la agricultura. Su población ha sido desplazada por proyectos como la minería de carbón y la agroindustria de la palma de aceite. También por el conflicto armado. En el 2021 la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) denunció que los yukpa “viven en situación de miseria e indigencia en quince ciudades de Colombia, porque no tienen tierras ni territorio. Hoy en día se mueren en promedio treinta y cinco niños yukpa al año por desnutrición, asociado a la pérdida y la contaminación de su territorio”.

Cargando auestas esta realidad, los yukpa se opusieron a los firmantes de la paz cuando llegaron a Tierra Grata. Los indígenas no querían que los excombatientes se asentaran allí porque para ellos predominaba el estigma de que eran terroristas.

Esos señalamientos causaron que, en principio, los firmantes de la paz no pudieran asentarse en el sitio conocido como Los Encantos, en el municipio de San Diego, y tuvieran que optar por Tierra Grata. Pero allí también surgieron tensiones. A oídos de los reincorporados llegaba el rumor de que los yukpa los iban a sacar e iban a quemar el espacio. A su vez, los nativos escuchaban decir que los excombatientes venían a dañar el territorio y a robarse la tierra. Pero con el paso del tiempo el conflicto menguó y las tres comunidades, campesinos, indígenas y excombatientes, comenzaron a construir un entorno favorable para todos.

Para construir estas paces desde abajo, cuenta Manuel Ávila, los excombatientes de las antiguas FARC tuvieron que sentarse con los yukpa en un proceso de diálogo, delimitar el territorio y comprometer la palabra y las obras como garantía. El primer paso para este acercamiento fue el empuje de los reincorporados para mostrarles a los campesinos y los indígenas que juntos podían mejorar la vida de sus comunidades.

Esta paz desde abajo, afirma Jackeline Yajure, excombatiente en proceso de reincorporación conocida en el ETCR como Yaka, se construyó “echando la luz, poste a poste, tramo a tramo, con manos de la misma comunidad. Fue así como los yukpa vieron que su territorio, en vez de ser afectado, iba a mejorar”. La hostilidad, agrega Yaka, comenzó a disminuir cuando el agua llegó hasta el caserío de los indígenas. Luego vinieron la instalación de la luz y el mejoramiento de las carreteras. En la actualidad los esfuerzos están concentrados en el proyecto *Escuela de arquitectura para la reconciliación*, que

propone construir una escuela indígena yukpa, gracias a la gestión de los firmantes de la paz y la Universidad Nacional con universidades europeas.

Según Yaka, la dinámica organizativa y la relación de los firmantes de la paz con campesinos e indígenas posibilitó que este espacio de reincorporación le diera impulso a la creación de la Junta de Acción Comunal —JAC— y del proyecto de autoconstrucción asistida de viviendas, que garantizaría la permanencia digna de las comunidades en Tierra Grata.

Madres en la guerra y en la paz

Sirlis Mejía le agradece al Proceso de Paz la posibilidad de criar con tranquilidad a sus dos hijas: Lucero y Aimara. La primera llevaba un mes en su vientre cuando se instalaron en Tierra Grata, y dos años después tuvo a Aimara. Su situación familiar no la aísla de sus camaradas, a quienes considera su familia expandida, porque “uno tanto tiempo en las filas aprende a querer de una forma como tan familiar a los compañeros y compañeras”.

Lo primero que construyó Sirlis fue una buena cocina, el fueguito de su hogar, dice. Mientras prepara el almuerzo para sus hijas rememora su historia, sorprendida por los cambios que trajo la dejación de armas en Tierra Grata: “Tenía una vida distinta, y con el Proceso de Paz, al enterarnos de que íbamos a venir hasta estos puntos, que íbamos a reunirnos, que aquí íbamos a estar todos, que aquí iba a haber policías, ejército, gente del gobierno, uno sentía temor de llegar hasta acá. Yo estaba asustada porque uno no sabe cómo lo van a recibir, pero sentía emoción porque ya parece, ¡parece!, que se va a acabar la guerra; ya no vamos a estar enfrentados, ya no vamos a estar escondidos, ya no vamos a estar huyendo, ya

vamos a tener un encuentro con la familia. Eso era de las cosas que uno anhelaba: reencontrarse con su familia”.

Al igual que Sirlis, Betty María Gil, quien estuvo veinte años en las FARC y fue enfermera durante la guerra, se convirtió en madre tras la firma del Acuerdo Final de Paz: “Mi sueño era ser madre y tuve la oportunidad de tener una hermosa niña en este lugar”. Betty María considera que la maternidad en la guerra y en la paz es un asunto complejo y cargado de significados, de motivaciones.

Yaka también es madre de dos niñas, una que una nació en la guerra y otra que una nació en la paz: “Yakana nació en la guerra, en la selva, cuando yo era guerrera, me tocó dejarla al año y medio. Obviamente uno se arriesgaba a tenerlos, pero siempre consciente de que a determinada edad el hijo se tenía que dejar al cuidado de algún pariente, y pues uno sacaba el niño de la selva. Luego de eso, hasta que la vida le diera a uno la oportunidad de volverlo a ver. A muchos nos tocó así, en mi caso me tocó jugar ese rol de reencontrarme con ella acá. Yo bromeo con mis hijas, que a veces pelean mucho, entonces les digo: ‘¡Es que son la guerra con la paz!’ Hay una discordia bastante grande”, ríe Yaka mientras cuenta la anécdota.

El reencuentro de Yaka con su hija sucedió cuando los integrantes de las FARC aún no habían hecho la dejación de armas, pero ya se habían agrupado en las Zonas Veredales de Transición. Yaka aún portaba su fusil cuando la niña ingresó a la zona para reencontrarse con sus padres después de ocho años. “Al vernos allí se asustó. Pero después ya nos vio sin armas y le dijimos: la vamos a traer. Y cuando se dio la firma del Acuerdo de Paz que, para mí, como madre, es lo más bonito, tuvimos el reencuentro. Luego pude reencontrarme con el resto de mi familia, que no veía desde hacía más de veinte años. ¡Eso es lo más bonito que le puede pasar a cualquier persona!”.

Llegar para quedarse

Yaka estuvo 22 años en la guerra. Ingresó a las FARC en 1994 y ascendió en la organización insurgente hasta ser comandante de escuadra, con doce guerrilleros a su cargo. En cada misión que le encomendaban cumplía con entrega y disciplina, dice. Hizo parte de varios frentes y columnas de la estructura armada y participó en misiones en diferentes territorios. Ella tiene gran parte de la memoria del bloque Caribe, de su lucha en la guerra y de su resistencia en la paz. Por eso ahora su filosofía de vida es *parar la guerra para parir la paz*.

Cuando llegó al ETCR, cuenta Yaka, el espacio era precario: no había agua, ni energía, ni senderos. Las viviendas eran pequeños cubículos contruidos con materiales prefabricados. Cada reincorporado tenía un cuarto de seis metros de ancho por cuatro de largo, dotado con una cama y un colchón que, afirma ella, era más incómodo que los cambuches de paja que armaban los guerrilleros cuando estaban en el monte.

Yaka agrega que cada excombatiente tenía un clóset con tres espacios y al llegar al ETCR cada uno recibió dos *jeans* y dos camisetas blancas. “Estando en los puntos de preagrupamiento nosotros mismos construimos lo que hoy está construido: todos los alojamientos y toda la infraestructura. El gobierno solo puso la mano de obra calificada, de resto nosotros colocamos las placas, las paredes, los techos, las zonas de rancho donde se preparan las comidas y la enfermería. Lo único en lo que pensó el gobierno en ese momento fue en crear dos ‘casuchitas’, muy pequeñas, destinadas a la maternidad, porque ya había varias mujeres en embarazo”, cuenta Yaka.

Poco a poco y ante la necesidad de construir un espacio donde los excombatientes pudieran vivir de manera digna, el sueño de fabricar el primer adobe se apoderó de los firmantes de la paz. Solo edificando sus propias construcciones los

firmantes de Tierra Grata pudieron convertirse en la antítesis de un modelo que los quería dejar en la incertidumbre de vivir en un cambuche temporal, con una renta pasajera, en una tierra alquilada o en un baldío que, como los miles que hay en Colombia, no ha podido ser delimitado por el Estado.

El primer adobe

Tener una vivienda propia en Tierra Grata era el sueño de la mayoría de los excombatientes que habitaban ese espacio de reincorporación. Al principio parecía irrealizable, pero Fredy Escobar le empezó a dar forma a esa utopía. Buscó el apoyo de diferentes universidades del Caribe con el propósito de que sus compañeros obtuvieran conocimientos relacionados con la construcción. En este ejercicio los firmantes empezaron a visionar el lugar como una ciudadela de paz y elaboraron los diseños de una casa modelo, en la que priorizaron espacios aireados, amplios y dignos.

“El proyecto se llama *Autoconstrucción asistida de vivienda*. Es autoconstrucción porque han sido las mismas comunidades las que han construido veredas y barrios en Colombia. Pero también hablamos de que es asistida porque las universidades y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) aportaron su experiencia en ingeniería, arquitectura y topografía”.

Pero para avanzar hacia la autogestión lo primero que necesitaban los reincorporados era un terreno, porque como los demás ETCR del país el de Tierra Grata enfrentaba trabas legales en cuanto a la propiedad de la tierra. Luego tenían que pensar en los diseños y los materiales, y todos esos asuntos parecían distantes.

Yaka describe el proceso como algo *marquetaliano*, haciendo alusión a la fundación de las FARC el 18 de mayo de 1964 en

Marquetalia, un pequeño territorio del corregimiento de Gaitania, en el municipio de Planadas, departamento del Tolima. “¿Cómo decidimos priorizar la vivienda? En una asamblea, en la que nos preguntamos cómo nos visionamos dentro de cinco años con el tema de vivienda. ¿Vamos a esperar a que el gobierno nos la dé? ¿Tenemos esperanza de eso? Para hablar de vivienda éramos todos con una hojita de cuaderno dibujando cómo nos visionábamos la casa. Y así se fueron recogiendo todos esos papelitos”, recuerda la excombatiente.

Luego de que las personas pintaran sus diseños en un papel, Yaka preguntó: “¡Ajá! ¿Y cómo vamos a visionarla de ahí para adelante? ¿Cómo hago para construirla? ¿Cómo se empieza una ciudadela? ¿Cómo se piensa eso? Y resulta que Fredy Escobar duerme y se levanta con el cooperativismo en la cabeza. Con la colectividad, la unión y la autogestión en la cabeza”.

Fue así como los excombatientes se asociaron bajo un modelo cooperativo mediante el cual gestionaron recursos y compraron un terreno de veinticuatro hectáreas. De ese espacio lotearon equitativamente diecisiete hectáreas que destinaron para vivienda, y en las demás construyeron zonas comunes que incluyen una plaza central, espacios recreativos, jardines, cultivos y caminos.

Luego de obtener la tierra, los excombatientes adquirieron una máquina de ladrillo compactado que, a buen ritmo, puede fabricar mil doscientos ladrillos diarios. Estos se elaboran con tierra extraída de la zona, que es compactada con cal y con cemento en menores proporciones.

Con el apoyo de la Universidad del Atlántico, la Universidad del Norte en Barranquilla, la Universidad Área Andina y la Universidad de La Guajira los firmantes de la paz lograron elaborar los diseños de las viviendas y los edificios comunes,

a la vez que adquirieron conocimientos técnicos para la autoconstrucción. A este apoyo se sumaron luego algunas universidades europeas y la Universidad Nacional de Colombia.

Así, en el 2021, los excombatientes construyeron la primera edificación en Tierra Grata. Se trató de la sede de Ecotours, un proyecto que busca desarrollar el ecoturismo en el espacio y que cuenta con un museo, un campamento guerrillero a manera de memoria histórica, un restaurante y un hotel. En la construcción usaron seis mil bloques.

Cuando construyeron esta edificación la incertidumbre tenía que ver con que el adobe pegara bien, que fuera resistente y funcional. Y como todo eso se cumplió, hoy van más de treinta mil adobes fabricados y seis casas construidas. Así, a medida que la máquina crea ladrillos en convites y obras colectivas, la comunidad construye cocinas, senderos y jardineras.

“Recuerdo que nosotros hicimos una gira en el 2018 por Bogotá, unas treinta personas visitando las embajadas porque visionábamos que lo primero que necesitábamos era vivienda digna. Siempre fue un lema para nosotros: *salir de la casa a buscar trabajo, y no salir del trabajo a buscar la casa*”, relata el excomandante en las FARC y ahora líder comunitario Abelardo Caicedo, con la intención de reprochar la falta de compromiso del Estado colombiano, e incluso de la comunidad internacional, con respecto a las soluciones de vivienda para los excombatientes.

En esa misma vía, Sirlis Mejía dice que “la fortaleza de esta comunidad sigue siendo la unión que tenemos nosotros, porque a pesar de todo, en esta comunidad seguimos la mayoría de los excombatientes que llegamos aquí”. A lo que agrega Yaka: “Para nosotros, personas acabadas de llegar, la vivienda es la que sintetiza realmente nuestra sostenibilidad en un territorio”.

Vivir con dignidad: el agua como bien vital

Ciudadela de Paz es un proyecto de los excombatientes que se piensa el espacio en clave de reincorporación comunitaria y sostenible. En esta iniciativa participan reincorporados de Tierra Grata y del ETCR de Pandores, ubicado en el municipio de Fonseca, departamento de La Guajira. Lo que buscan es construir un espacio digno para habitarlo con sus familias.

La paz trajo un sosiego y les permitió a los excombatientes reencontrarse con los hijos y las hijas que dejaron de ver cuando se fueron a la guerra. Con la familia reunificada y criando niños y niñas en ambos ETCR, los firmantes de la paz tuvieron que adecuar cocinas, jardines infantiles, zonas comunes, un parque, huertas y proyectos productivos, pensando en generar las condiciones necesarias para vivir con dignidad.

Después de tener la tierra, tenían que pensar en otro elemento: el agua. Los primeros proyectos de hortalizas fracasaron porque los excombatientes dependían de la lluvia y de los tanques de recolección. Ante esta necesidad los firmantes de la paz lanzaron la campaña *Un metro de manguera por el agua de Tierra Grata*, cuyo lema era “Para poder llevar el agua hasta esta comunidad se necesitan 10 km de manguera. Solidarízate, haz tu aporte”. De esta manera solicitaron una cuota de doscientos mil pesos a cada excombatiente que recibiera la renta básica que les otorgaba el Estado colombiano como parte de su proceso de reincorporación a la vida civil.

A Tierra Grata el agua llegaba en carrotanques. El abastecimiento alcanzaba para el consumo humano, pero no bastaba para los proyectos productivos. Por eso los excombatientes se juntaron con la vecina comunidad de El Mirador, en el corregimiento de San José, para implementar la campaña por el agua. El acueducto comunitario se hizo realidad cuando la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y

la Agricultura, conocida como FAO, entregó la manguera necesaria para conducir el líquido hasta ambas comunidades. Luego, los reincorporados y los campesinos pusieron la mano de obra.

El primer día, cuenta Zule Mesa, habitante de El Mirador, fueron apenas diez las personas de la comunidad y cincuenta las de Tierra Grata. Luego esta proporción se equilibró y trabajaron en masa. Entre todos cargaron los diez kilómetros de manguera como llevando una serpiente gigante. Primero monte arriba y luego rumbo a la quebrada o al sacrificio, como solían decir. “El primer día que llegó agua a mi casa todas las mangueras botaban caucho por todos lados, el fontanero me llamaba y me decía: ‘Qué hacemos, se va a explotar, está rebotando...’ Yo decía: ‘Toño, abra todas las mangueras, abra todas las llaves, no hay más que hacer, ¡hay agua!’”, narra Zule.

Hasta el ejército y la policía ayudaron a regar manguera en Tierra Grata. “Eso fue muy importante porque mientras a nivel nacional el Centro Democrático atacaba el Acuerdo de Paz, en los territorios se vivía la reconciliación de otra manera”, afirma Abelardo Caicedo. Además, la alcaldía del municipio de La Paz y la Agencia de Reincorporación Nacional también ayudaron con mano de obra calificada para el desarenador.

Con la plata que habían recogido y que les sobró de la campaña *Un metro de manguera por el agua de Tierra Grata*, los excombatientes y la comunidad le apostaron a la electrificación. Para ello abrieron otro fondo con las cuotas que pagaban los socios de las cooperativas. Con los recursos recaudados compraron postes, guayas y transformadores. Nuevamente, hombres y mujeres de la comunidad aportaron 465 jornales de manera voluntaria. Así, con autogestión y trabajo comunitario, llegó también la luz a la vereda Tierra Grata.

Cooperativismo: la clave de la autogestión

La organización colectiva en torno a proyectos económicos articulados en la cooperativa rinde sus frutos más visibles en el proyecto de autoconstrucción asistida de vivienda. Pero en la cooperativa también se enlazan la ferretería, la carpintería, un minimercado, el proyecto de ecoturismo Ecotours, el colectivo de comunicaciones La Rotativa, el billar y la Asociación de Pequeños Ganaderos —Asopegan—.

Aquí la disputa es por no dejar morir la reincorporación económica en un modelo de “paz con legalidad” que favorezca las iniciativas individuales. Gracias a la cooperativa, en Tierra Grata los reincorporados han gestionado el lote para las casas, el acueducto y la electrificación para toda la vereda, incluyendo el territorio indígena. También compraron colectivamente un camión turbo para transportar materiales y productos, y una retroexcavadora para los banqueos y la adecuación de terrenos, por la que cada socio paga a cincuenta mil pesos la hora de trabajo para cubrir el operario y el combustible.

Yaka cuenta que la cooperativa también les dio la oportunidad a algunos excombatientes de decir “yo voy a sacar mi poquito de dinero de ahí y lo voy a invertir en una vaca o lo voy a invertir en un puerco, o lo voy a invertir en no sé qué cosa”. De allí, dice, nació Asopegan, conformada por veintisiete reincorporados que retiraron una parte de los recursos que habían depositado en la asignación única, cuyo monto era de dos millones de pesos. “Cada uno puso lo que pudo. Uno puso doscientos mil pesos, otro quinientos mil, otro ochocientos, otro un millón. Compraron ganado y crearon la asociación que hoy existe todavía”.

El trabajo cooperativo también les permitió a otras personas articularse en torno a sus temas de interés. Las mujeres, cuenta Yaka, dijeron: “Vamos a organizarnos en una mesa de

género'; y la conformaron. Luego otros expresaron: 'Somos treinta indígenas, ¿nos vamos a quedar atrás? Vamos a crear la mesa indígena'. Y después algunos reclamaron: 'Necesitamos comunicaciones', y se creó el colectivo de comunicaciones".

Anochece y no amanece

Jesús Santrich es recordado en el ETCR como un juglar, un poeta, un gran conversador, un artista. Después de haber estado durante más de un año en una tormenta jurídica que lo involucraba con el tráfico de cocaína, de la que salió gracias a los argumentos de su defensa ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), llegó a Tierra Grata, su espacio de reincorporación, y de allí partió de manera definitiva para el monte, a continuar la lucha armada con la llamada Nueva Marquetalia. Esta situación abrió una herida en el espacio territorial. Yaka relata la fuga de su camarada de la siguiente manera:

"Aquí llevaba como ocho días. Los periodistas de RCN se mantenían en la entrada esperando a que él saliera del espacio y les diera una entrevista, pues porque él era un gran referente. Pero él se decide, hace su plan solito, arranca y se va con su persona más allegada, porque ni a los escoltas les dijo, los despachó muy temprano, cerraron servicio y se acostaron.

»Eso hizo él: cogió a su persona más allegada, que no es ni escolta ni es nada, sino con el que él se mantenía para arriba y para abajo, obviamente el que lo ayudaba mucho, porque él es una persona ciega, entonces el que lo lidiaba. Pues decidió desaparecerse con él. Anoheció, pero no amaneció en Tierra Grata.

»Nos ha tocado llevar eso encima de los hombros. Consideramos que fue una decisión propia de cada quien y en ese momento que llegábamos cada quien hacía con su vida lo

que quería, pero no lo sentimos como traicionero, le respetamos su decisión de haberse ido. Aun así, nosotros decidimos quedarnos.

»Pero el caso de Santrich pues sí nos afectó muchísimo. Hoy todavía nos estigmatizan por eso. A nosotros nos afectó mucho más que a él porque quedamos como cómplices para el Estado, para el gobierno y para las autoridades: ejército y policía. Uno no deja de pensar que ellos lo miran a uno como cómplice de esa huida, en la que es el camarada el que decide.

»Recuerdo que, días antes de huir, Santrich compartió mucho con los muchachos, él era muy recochero, muy currambero, le gustaba cantar mucho, tocar la flauta. Para nosotros ese era el Santrich con el que todo el tiempo estuvimos. Era una persona de mucha visión política, ideológica, y muy firme, y su pensar o su visión ante el proceso de paz era muy clara.

»Aparte de Santrich no hay poeta aquí en este Caribe. Santrich era nuestro poeta, el poeta de los momentos difíciles, de los momentos fáciles, era un hombre muy completo. Que realmente esté vivo o esté muerto, me quedan grandes sus zapatos”.

Una Junta de Acción Comunal para el arraigo y la convivencia

Sentada en el jardín de su casa y con la mirada cargada de esperanza, Yaka recuerda su arribo al ETCR y la creación de la JAC: “Llegamos aquí el 26 de noviembre del 2016. En diciembre hicimos la primera rumba, imás bacana! Pisamos de una vez 2017, se viene lo de la acreditación con la ONU, el papeleo bancario para la asignación mensual y la dejación de armas. Y ya el 19 de septiembre constituimos la JAC. Dijimos: la reincorporación lo amerita y lo exige, ya no podemos tener la misma estructura que nos une, que nos organiza. ¡Ajá! Y en-

tonces quedamos cada quien encerrado en un 6x4 y, de ahí para delante, ¡qué!. Tiene que haber algo que nos una y que nos organice, que nos convoque, que nos guíe y que nos diga para dónde vamos, qué tenemos que conversar, qué tenemos que discutir. Entonces vamos para la acción comunal”.

De inmediato, cuenta Yaka, los excombatientes adelantaron la papelería y los trámites para crear la junta. No había pasado ni una semana y ya estaban creándola. Fueron al municipio, hicieron la solicitud, pensaron en las directivas y los diferentes comités. Y cuando la JAC de Tierra Grata, la primera en un ETCR, estuvo constituida legalmente, el 19 de septiembre del 2017, Yaka asumió su liderazgo.

“Le agradezco a la comunidad que al sol de hoy me ha tenido allí. Me dispongo a escuchar, a sugerir, a plantear, voy, vengo, veo en qué es lo que se puede contribuir, miro lo que se tiene que mejorar, y todo eso”, explica Yaka, quien agrega que los firmantes de la paz persisten en el proceso de reincorporación y en la construcción de su propio tejido social, aun después de las rupturas internas. Para ella no hay otro camino, los excombatientes deben generar arraigo y afianzarse en lo pactado.

Buscando fortalecer ese arraigo, una de las primeras iniciativas de la JAC fue contribuir a mejorar la convivencia en el territorio y conservar las costumbres que como comunidad habían construido los excombatientes. Por eso institucionalizaron el *Lunes de convivencia*, que en la guerra equivalía a la reunión de célula, un espacio de balance en el que se pasaba revista a la tropa. Hoy en Tierra Grata esta práctica permite mantener la convivencia en la paz, que no deja de ser compleja, y un orden interno en la comunidad.

El *Lunes de convivencia* comienza a las seis de la mañana. El sonido de una trompeta es la señal para que las personas se

congreguen en la plaza del ETCR. Yaka preside cada jornada. En las reuniones se abordan desde proyectos como la Escuela de Arquitectura para la Reconciliación, hasta asuntos internos de la comunidad que se resuelven al fragor de las veintinueve normas de convivencia de Tierra Grata que, entre otras, incluyen el silencio total en los alojamientos después de las ocho de la noche. “En el día puede prender su equipo, si quiere reventarse sus oídos, obviamente teniendo algunas consideraciones. Pero en la noche, a las ocho, puedes estar con muchas ganas de parrandear, con muchas ganas de disfrutar, pero debes trasladarte de tu alojamiento a los lugares públicos, donde vas a poder seguir disfrutando. Esos lugares son dos: el salón comunal, un espacio amplio y colectivo, y el billar. Cuando suena un equipo que se pasa de las ocho de la noche, me llegan aquí: ‘Son las ocho de la noche y mire este equipo’. Entonces yo me levanto y les digo: ‘Compañeritos, miren el reloj’. Y al siguiente lunes de convivencia, primer punto: ‘Compañero, incurrió en esta falta, la multa es de cien mil de pesos’. Cuando nos tocan el bolsillo es que nos sentimos obligados”.

La escuela yukpa que le da la vuelta al sol

Cuando las universidades extranjeras llegaron al ETCR, gracias a la gestión de Fredy Escobar, comprendieron que la territorialidad de Tierra Grata se extiende y se articula con la comunidad yukpa, cuyos niños estudian bajo un árbol, moviéndose a su alrededor, en busca de sombra, a medida que el sol va cambiando su posición.

La escuela Puesta de Sol es puro realismo mágico. Fue un motivo para vincular a los yukpa con los arquitectos en los proyectos de las zonas comunes, y para pensar la escuela como parte de ese hábitat para la paz que pretende ser Tierra

Grata. Fue un reincorporado el que les dijo a los profesionales de las universidades: “Allí hay una escuela yukpa, bajo un árbol; me gustaría que la incluyeran en el proyecto”. Así puso en contacto a los arquitectos con los maestros indígenas para dibujar ese sueño en un papel y fortalecer esta escuela a la que llaman Puesta de Sol. Para los arquitectos fue interesante poder pensar una escuela que se mueve, que camina y que funciona al aire libre.

Esta iniciativa hace parte de los proyectos que lidera la Escuela de Arquitectura para la Reconciliación, que se propuso fortalecer seis proyectos colectivos: las unidades productivas, el hogar de cuidado, los patios productivos de la mesa de género Red Verde de Ciudadelas de Paz y Siembra Productiva, el ecoturismo, la Rotativa Comunicaciones y la escuela Puesta de Sol.

Para destacar el potencial transformador que tienen estos proyectos, Yácana termina con un clamor: “A esa lucha se le tiene que meter bastante pueblo, y a veces es al pueblo al que hay que convencer. Que la gente sienta que ese proceso que se firmó es de la sociedad, y si se ponen a mirar todos los puntos del acuerdo, que se empoderen, que ese acuerdo es el que puede dar una transformación social al país”.

Es por eso que hoy en Tierra Grata los excombatientes siguen madrugando a trabajar en la bloquera, aplanando terrenos con la máquina, sembrando huertas y gestionando la vida comunitaria. El espacio lo visitan muchos extranjeros a los que Ecotours les hace un recorrido por la historia guerrillera del Caribe. Para los anfitriones es enriquecedor intercambiar con personas de varios países, aunque ahora no asisten en masa, atraídas por la curiosidad de ver y hablar con un guerrillero, como ocurría cuando recién se había firmado el Acuerdo de Paz.

Referencias

- Escobar, F. (2021). *Reconstruye 2016-2021* (documento inédito).
- La Rotativa (2020). Llegó la energía eléctrica a Tierra Grata. <https://youtu.be/mJ59r0oq02Y>.
- Mesa, P. (2021). Excombatientes construyen sus propias casas en el Cesar. *Hacemos Memoria*. <https://hacemosmemoria.org/2021/12/14/excombatientes-construyen-sus-propias-casas-en-el-cesar/>.
- Organización Nacional Indígena de Colombia —ONIC— (2021). Los indígenas yukpa, de invisibles a invencibles. <https://goo.su/G9iEUF>.

Las hijas del trueno

Por Natalia Duque Vergara

Natalia Duque Vergara es periodista egresada de la Universidad de Antioquia. Ha contribuido con procesos de comunicación en comunidades campesinas de varias regiones del país. Sus intereses profesionales están relacionados con las problemáticas rurales, la política de drogas, la movilización y los derechos humanos. Actualmente se desempeña como periodista con enfoque en derechos humanos, en la organización Mutante.

En las montañas del Catatumbo un grupo de mujeres tiene una antigua amistad con las plantas. Dicen que esta relación es una herencia de sus ancestras. Gracias a ese vínculo, han adquirido conocimientos sobre las medicinas tradicionales que les permiten curar las dolencias de los vecinos de la región. Ellas, que hace diez años empezaron a cuestionar el mundo patriarcal en el que viven, hoy se consideran feministas campesinas y populares. Desde el Comité de Integración Social del Catatumbo (Cisca) luchan por el reconocimiento de su rol histórico como cuidadoras y por mantener una voz representativa en este movimiento social, que defiende los derechos de la población campesina y su autonomía alimentaria y territorial.

A las cinco de la mañana empieza a amanecer en la finca de Andrea Lisbet Jiménez Coronel, cerca del casco urbano de Guamal, en el corregimiento de Convención, Norte de Santander. A esa hora en que se escuchan los pájaros y se siente el olor a café, Andrea se toma el primer tinto del día. Luego se pone las botas, sale a la huerta y les habla a las plantas. “Yo considero que las plantas son como comadres. Las abuelas nos dicen que, por ejemplo, el tabaco es masculino y la coca, femenina. Que hay plantas dulces, otras amargas; unas son calientes, otras más frescas”, comenta.

Andrea tiene el cabello oscuro, la tez blanca y los ojos claros. Nació hace 39 en la finca de su familia, donde vive con sus padres y sus dos hijos. Mientras camina por la huerta, dice que “las mujeres y las plantas somos las mismas”.

Hace esta afirmación para explicar que a las personas que nacieron en la imponente región del Catatumbo les enterraron el ombligo en la tierra. En tono poético afirma que el Río de Oro y el río Catatumbo atraviesan la sangre de este pueblo, y que los relámpagos que cada noche iluminan el cielo han marcado su memoria y su carácter aguerrido.

El Catatumbo es una región selvática, con ríos y montañas que se entrelazan para formar las vértebras de la cordillera Oriental. Está ubicado en Norte de Santander y lo conforman diez municipios: Ocaña, La Playa de Belén, Convención, El Tarra, Teorama, Tibú, Sardinata, Hacarí, San Calixto y El Carmen. En las noches la oscuridad no es total: dicen que el

Catatumbo es *la casa del trueno*, pues es posible ver hasta dos relámpagos por minuto que iluminan el contorno del horizonte; un fenómeno atmosférico que se gesta en el lago Maracaibo, en Venezuela.

Andrea salió de Guamal hacia Ocaña en el 2002, cuando el Catatumbo vivía uno de los peores momentos del conflicto armado. En ese momento ella tenía dieciocho años y, como muchos jóvenes de su generación, se fue en busca de un futuro próspero. En Ocaña empezó a estudiar idiomas, pero se casó pronto y tuvo dos hijos. Por eso abandonó los estudios superiores y durante ocho años dedicó todo su tiempo al cuidado de la familia, como lo impone la distribución de roles de género en las sociedades patriarcales. “Como se dice: uno está enjaulado. No sabía qué hacer con mi vida, esa era la gran incógnita, porque sentía que me había absorbido el sistema”, recuerda.

En los quince años que estuvo lejos de Guamal, su tierra natal, Andrea nunca dejó de sentirse una mujer campesina. En el 2015, por invitación de su hermana, asistió a una reunión del comité de mujeres que hace parte del Comité de Integración Social del Catatumbo —Cisca—, una organización social que defiende los derechos de los campesinos y los indígenas, promueve la autonomía de los habitantes rurales y emprende acciones de resistencia frente a los proyectos extractivos y las violencias asociadas al conflicto armado que se presentan en la región.

La reunión, que tuvo lugar en Ocaña, le partió la vida en dos. Cuenta que se vio reflejada en las otras asistentes y entonces pensó que otras formas de vida eran posibles. Por eso, después del encuentro buscó a María Ciro, una lideresa de la región, reconocida por su labor en el Cisca, y le dijo que necesitaba cambiar de ambiente, salir de la casa donde pasaba la mayor parte del tiempo cuidando a los hijos y al marido.

“Salí de esa burbuja y terminé mi relación con mi pareja de ese momento”, cuenta.

Desde entonces se dedicó a caminar por las trochas del Catatumbo para ayudar a construir el tejido social de las mujeres del Cisca. “Abandonó al esposo y a los hijos”, “y ahora de qué va a vivir”. Estos fueron algunos de los comentarios que escuchó Andrea y que, según ella, responden a lo que una sociedad machista considera que es una mala mujer. Pero “entendí que mis hijos no son solo mi responsabilidad, también son responsabilidad de él. Y que el hecho de que estemos separados no quiere decir que yo deje de estar pendiente de ellos”, explica la lideresa.

Su historia se repite en las familias de muchas otras mujeres que han querido trascender el escenario de la casa. De hecho, las mismas integrantes de la organización cuentan que empezar a ir a reuniones y participar en escenarios políticos les ha traído consecuencias, principalmente con sus esposos, quienes esperan que ellas se queden en las casas y se limiten al trabajo del cuidado. Incluso los hombres del Cisca reconocen que este sigue siendo uno de los principales obstáculos para que más mujeres se puedan organizar.

“Estamos haciendo pedagogía a nivel familiar, porque si no hay ese apoyo de la familia, de la pareja, de los hijos, que deben entender por qué estamos haciendo esto, es difícil que haya resultados”, asegura Andrea. También cuenta que en el camino como lideresa ha descubierto que para muchos vecinos es indispensable que los proyectos generen dinero, de lo contrario no les parecen atractivos. “Y resulta que nosotras no queremos hacernos ricas”, dice.

Hace siete años nació la otra Andrea, como ella misma lo afirma. Reconoce en su historia las huellas de sus abuelas, de su madre, y la fortaleza de sus compañeras, que han sido sus

maestras y que, en su momento, también fueron su espejo. De ellas aprendió a trabajar la tierra, a compartir sus historias sobre la vida en el campo y a conservar y transmitir los conocimientos sobre las plantas para hacer medicinas y cuidar el entorno. Así, una a una, dice ella, las mujeres volvieron a nacer en Ocaña y en municipios como El Tarra, Convención, Hacarí, Teorama y Tibú, lugares en los que hasta hace poco tiempo el ejercicio de los liderazgos sociales era una labor exclusiva de los hombres.

Semillas de rebeldía

En la tierra donde Andrea les habla a las plantas nacieron generaciones de hombres y mujeres, descendientes de los indígenas motilón-barí, que durante la colonización lucharon contra los españoles para defender su vida y su territorio.

En el último siglo, los hijos y las hijas del trueno se han plantado para contener a las multinacionales que explotan el petróleo y el carbón, a los terratenientes que han impulsado el monocultivo de palma africana de aceite y a los narcotraficantes que han promovido el cultivo de coca. Andrea dice que para imponer ese modelo económico se ha usado la guerra, con los paramilitares y con las fuerzas armadas del Estado, que llegan a desalojar las montañas con la intención de controlar la riqueza y las rutas de la región. A pesar de las amenazas, la población campesina ha luchado por conservar el territorio y ha demandado la satisfacción de sus derechos.

Hay un antecedente que los más viejos de la región recuerdan. Ocurrió entre el 6 y el 11 de junio de 1987, cuando miles de campesinos, habitantes del Catatumbo, ocuparon los parques principales de Ocaña, Tibú y Valledupar. Durante una semana protagonizaron el Paro del Nororiente, en el que exi-

gieron a los gobiernos de la época la construcción de vías, la electrificación de las veredas y la atención de sus necesidades en materia de educación y salud. Estas demandas siguen al orden del día.

La respuesta del Gobierno nacional, en cabeza del presidente Virgilio Barco (1986-1990), fue la misma que han recibido históricamente las comunidades marginadas cuando protestan: disparos, garrotazos, gases lacrimógenos y detenciones. A esto se sumó la estigmatización de los campesinos por parte de algunos dirigentes políticos del ámbito nacional, quienes aseguraron que los grupos insurgentes estaban detrás de las movilizaciones.

Los ochenta y el comienzo de los noventa fueron años fértiles para la consolidación de semillas de rebeldía que se expresaron desde las movilizaciones de 1987. Las cooperativas, las juntas de acción comunal y las reuniones fortalecieron un tejido de hombres catatumberos que salieron de sus casas para nutrir organizaciones como la Central de Servicios Cooperativos de Ocaña (Cencooser), la Asociación de Juntas de Acción Comunal del Catatumbo y el Movimiento Cívico. Al tiempo, y de manera mucho más sigilosa, las mujeres cocinaron durante las jornadas de protesta, para alimentar a los líderes. Así sostuvieron la rebeldía.

Un estado de supervivencia

Por su riqueza y su ubicación entre la cordillera Oriental y la frontera con Venezuela, el Catatumbo ha sido atractivo para diversos grupos armados, legales e ilegales. En la década de los setenta llegaron las guerrillas del Ejército de Liberación Nacional —ELN— y el Ejército Popular de Liberación —EPL—. En los ochenta entraron las Fuerzas Armadas Revolucionarias

de Colombia —FARC—. A finales de los noventa incursionaron los grupos paramilitares.

Esta región se divide en tres zonas: el Alto Catatumbo, donde se encuentran los municipios de El Carmen, Convención, Teorama, San Calixto, Hacarí, La Playa, Ocaña y Ábrego. El Bajo Catatumbo, donde se encuentran Tibú y Sardinata. Y el Medio Catatumbo, donde el municipio de El Tarra hace de cuña que conecta a toda la región.

La entrada al Bajo Catatumbo queda por el municipio de Tibú, ubicado aproximadamente a tres horas y media de Cúcuta. Según el informe *Catatumbo: memorias de vida y dignidad*, publicado por el Centro Nacional de Memoria Histórica en el 2018, por ese municipio ingresaron 220 paramilitares en mayo de 1999, bajo el mando de Salvatore Mancuso, se dieron a conocer como integrantes de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá —ACCU— e iniciaron desde ese territorio la ocupación de toda la región. Los investigadores afirmaron que los hombres de las ACCU fueron enviados desde el Urabá antioqueño y que para llegar atravesaron cinco departamentos (Córdoba, Sucre, Bolívar, Magdalena y César), sin que fueran retenidos por las fuerzas armadas del Estado.

Según el artículo *Sentencia contra Mancuso confirma vínculos de AUC con militares, empresarios y políticos*, publicado por *Verdad Abierta* en el 2014, los paramilitares, enviados por los hermanos Carlos y Vicente Castaño, contaron con la complicidad del ejército, que facilitó las condiciones para su incursión en el territorio. El documento del Centro Nacional de Memoria Histórica precisa además que en varias acciones de los paramilitares hubo participación directa de miembros activos de la fuerza pública, como Harvey Hernández Correa y Alexander Gutiérrez Castro, excomandantes del Distrito de Policía de Tibú; Mauricio Llorente, excomandante del Batallón de Con-

traguerrillas Héroes de Saraguro, en Tibú; y Luis Fernando Campuzano Vásquez, excomandante de la base militar en La Gabarra, quienes, según el documento, “fueron condenados por las masacres de La Gabarra y Tibú y confesaron el maridaje Ejército-AUC”.

Desde que los paramilitares entraron a la región, el 29 de mayo de 1999, cometieron una serie de masacres. En la noche del 21 de agosto de 1999 llegaron al corregimiento de La Gabarra, en el municipio de Tibú, y en medio de la oscuridad asesinaron a 35 personas. Estos acontecimientos marcaron el inicio de una época de terror.

Entre 1999 y el 2005 el Catatumbo se paralizó. Los paramilitares se ubicaron en los caminos que años antes habían construido los vecinos y, con lista en mano, mataron y desaparecieron a sus habitantes. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, en ese periodo 599 personas fueron asesinadas en las masacres, 403 víctimas fueron atribuidas a los paramilitares y 142 a los grupos insurgentes.

Con la violencia que desplegaron, los integrantes del bloque Catatumbo de las Autodefensas Unidas de Colombia, como después se le conoció al grupo paramilitar, buscaron destruir el trabajo social y comunitario que se había desplegado desde la década de los ochenta en la región, que incluía el establecimiento de cooperativas, tiendas comunitarias, juntas de acción comunal y procesos de movilización. Quienes resistieron en el territorio recuerdan que vivieron ese periodo en un estado de supervivencia, y aseguran que el objetivo último de la violencia paramilitar en la región era desplazar a los catatumberos y las catatumberas, desocupar las montañas e imponer una región fantasma.

Aunque las acciones de guerra que han ocurrido en el Catatumbo han estremecido al país, sus pobladores sienten que

habitan una región abandonada por el Estado y por una sociedad que no se conmueve con lo que ha sucedido. En el interior de Colombia, la región y sus habitantes todavía son estigmatizados. Entre tanto, hoy parece que está lejos la posibilidad de que se acaben las confrontaciones, pues en el territorio persisten la insurgencia del ELN, las disidencias de las FARC y otros grupos armados que controlan las dinámicas del narcotráfico y las economías ilegales de la zona fronteriza.

Repartir el miedo para cuidar la vida

“¿Qué podemos hacer para quedarnos aquí y también morir aquí de viejos?”, fue la pregunta que desató la articulación de las comunidades del Catatumbo en el 2004, cuando empezaron a retornar los campesinos que se habían desplazado hacia Ocaña y Cúcuta a causa de la violencia.

En septiembre de ese año, después de varios encuentros municipales, llegaron vecinos de toda la región al corregimiento de San Pablo, en el municipio de Teorama, donde llevaron a cabo el Encuentro Comunitario Integración, Vida y Territorio, que marcó la fundación del Cisca.

En medio de la muerte que producía la guerra, proteger la vida fue un reto y un mandato. Después del encuentro y hasta el 2005, los líderes que asumieron la recuperación del territorio se movieron de nuevo de vereda en vereda, pero lo hacían entre la clandestinidad y el silencio, para evitar a los grupos armados. “Nos tocaba ir por caminos de herradura para que no nos vieran, porque ellos se hacían con las listas en los otros caminos”, cuenta Ismael López, líder de la región que participó del proceso de conformación del Cisca. En ese tiempo, agrega, los campesinos se juntaron en lo que denominaron talleres de recuperación del tejido social: “En ellos

nos tuvimos que repartir el miedo, cargarlo entre todos para poder trabajar de nuevo”.

A los talleres asistían líderes, personas interesadas y presidentes de las juntas de acción comunal. Todos hombres, excepto María Ciro, una de las primeras mujeres que salió del escenario privado de la casa y, con el Cisca, impulsó el trabajo organizativo en el Catatumbo. “Frente a las agresiones que ha sufrido el territorio, las comunidades nos hemos organizado una y mil veces; el Cisca es reflejo de eso, es una expresión de resistencia que nace en el 2004, en un contexto de desarraigo, de despojo y de desplazamiento, tras la ocupación paramilitar que desoló el territorio y llenó de sangre nuestros ríos”, explicó María en la serie documental *Con los pies en la tierra*, realizada por jóvenes del Catatumbo en el 2021.

Andrea dice que, en esos primeros años del Cisca, “por cada veinte hombres llegaban dos o tres mujeres, entonces no era una participación suficiente para tocar temas que eran interesantes para nosotras, que se veían en el territorio; por ejemplo, el tema de género, las violencias. Y si no había compañeras que pudieran describir esa situación, pues era muy difícil ser tenidas en cuenta”.

A pesar de la predominancia masculina y de que a las mujeres se les relegó a las casas, las huertas y las cocinas, María dice en el documental que cuando nació el Cisca ellas estaban “en las comunidades y entendiendo cuál es su papel en la defensa del territorio; ellas sí conocen las luchas y han participado en ellas”.

Fue en el 2010 cuando las pocas mujeres que participaban activa y visiblemente en el trabajo político, como María Ciro y Luz Marina Prieto, se juntaron para consolidar los liderazgos de las catatumberas. Recorrieron los caminos de las veredas, casa por casa, convocaron a las vecinas y, poco a poco, se fue-

ron volviendo cada vez más, al punto en que organizaron comités veredales, corregimentales y municipales.

El reto de un feminismo campesino y popular

Cuando Andrea entró al Cisca, en el 2015, ya se reconocía a sí misma como feminista, a pesar de que no sabía muy bien lo que eso significaba. Dice que terminó de darle sentido al término cuando empezó a ir a las reuniones femeninas del colectivo. En ese momento, inspirada por sus compañeras, inició un proceso personal que desencadenó cuestionamientos sobre la relación con su esposo y que terminó con la ruptura de esta. El feminismo le puso nombre a la sensación de libertad con la que se quedó después de tomar esa decisión.

La palabra *feminismo* es poderosa, pero ha sido estigmatizada, especialmente en contextos rurales donde las prácticas machistas están mucho más arraigadas. Por eso, hablar desde esa postura en el Catatumbo es difícil; como dice Andrea, “nosotras hablamos de feminismo campesino y popular porque somos las mujeres que estamos en lo rural y que también estamos en las bases organizativas, compartiendo con las otras mujeres que están en el mismo contexto”.

Su identificación como feministas campesinas y populares es el resultado de reflexiones internas del Cisca que dialogan con las de otras organizaciones de mujeres, nacionales e internacionales. Y aunque no todas se autodenominan como feministas, sí tienen un consenso con respecto a cuatro retos que deben enfrentar. En primer lugar, para ellas la conexión entre las mujeres y la tierra es poderosa, por eso la defensa de la vida y del territorio es el corazón del feminismo campesino y popular. En segundo lugar, reconocen que viven en un contexto rural donde opera el patriarcado, un sistema

que oprime a las mujeres y las margina en todos los escenarios de la vida. En tercer lugar, existe una división del trabajo según el sexo, que les asignó a las mujeres el cuidado del hogar y les delegó a los hombres el escenario de lo público. Y, en cuarto lugar, para ellas su trabajo es el resultado de un proceso colectivo, pero saben que también depende de los contextos familiares y personales. Por eso, según expresan, el feminismo no se manifiesta de una sola forma ni de un solo color.

“Algo en particular que se viene mirando es el futuro. No solo miramos a los jóvenes, también a la niñez. Cuando vamos a los espacios de mujeres y llevamos a nuestros hijos e hijas, ellos también tienen un espacio. Los temas que trabajamos nosotras también los trabajan ellos, incluso de género, de economía; según el tema que estemos trabajando se adecuaba una metodología para los niños”, explica Andrea.

Una de las principales dificultades para que muchas mujeres puedan asistir a las reuniones es que no tienen con quién dejar a sus hijos e hijas. Por eso estos espacios resultan muy funcionales, ya que les permiten llevarlos con ellas. Así se empiezan a vincular con el proceso del Cisca y a entender lo que hacen sus madres. Muchos de los niños incluso terminan por pertenecer al eje de jóvenes que actualmente se dedican a las comunicaciones y al cine.

Las mujeres organizadas del Cisca no solo hablan de temas relacionados con el feminismo, sino que su labor es transversal. Ellas están presentes en todos los ejes de trabajo del colectivo: los derechos humanos, la economía solidaria, la soberanía alimentaria y los jóvenes. Doña Luz Marina Prieto, por ejemplo, encarna la defensa de los derechos humanos y del territorio, pero al tiempo hay mujeres en otros municipios aportando a la siembra de comida, haciendo productos natu-

rales para la autogestión y apoyando los espacios de formación con niños y jóvenes.

“Hay compañeras que han hecho cosas inimaginables y nunca sus nombres salieron, nunca fueron reconocidas. Sin embargo, tienen dentro de su cosmovisión lo comunal y están bien arraigadas a la tierra, como un árbol que echa sus raíces, y venga la tormenta que venga nunca las van a tumbar. Son compañeras que yo considero madres, hermanas, y están allá en la región, en sus fincas”, comenta Andrea.

“Yo ya no quiero ser secretaria. Quiero ser presidenta”

Doña Luz Marina Prieto es una mujer fuerte. Desde pequeña le enseñaron a hacer las tareas de la casa: lavar la ropa, cocinar, alimentar los pollos y cuidar a los hijos. Durante años vivió casada, dedicada a los trabajos del hogar, pero tal como ocurrió con Andrea, cuando doña Marina empezó a cuestionar su lugar en la comunidad y a participar de espacios políticos, se separó de su esposo.

Vive en la vereda Piedras de Moler, en el municipio de Teorama, y es presidenta de la Junta de Acción Comunal, en la que relevó a un hombre que se había atornillado en ese puesto durante las últimas dos décadas. Hasta hace poco las mujeres que hacían parte de las juntas solo ocupaban un lugar de asistencia. Incluso era mal visto que las familias enviaran a las mujeres como representantes para las reuniones. En algunos casos, incluso les cobraban una multa por esta falta.

Cuando doña Marina fue postulada a la presidencia tuvo que enfrentar comentarios de personas que la desacreditaban por ser mujer. “Es que siempre que habla llora”, “ella está muy enferma”, “no sabe hablar”, fueron algunas de las frases que le expresaron sus vecinos. A pesar de eso, en agosto del

2021 ganó las elecciones. “Empecé a trabajar y a la primera reunión no fueron las compañeras que no querían que yo fuera presidenta por ser mujer. Pero fui dando pasos y ya todo el mundo decía que yo era una mujer, pero una mujer valiente. Pasan los días y el compañero que me había ofendido tanto me dijo: ‘perdóneme, doña Marina, no pensé que una mujer fuera fuerte y fuera capaz de hacer esto’”, cuenta ella.

Doña Marina ingresó al Cisca en el 2006, cuando era secretaria de la Junta de Acción Comunal de su vereda. Junto a María Ciro, fue una de las mujeres que hizo germinar los liderazgos femeninos en la organización. De esos primeros años recuerda las conversaciones sobre la defensa de los derechos territoriales, en medio de la amenaza de los paramilitares, y los conocimientos que adquirió sobre la soberanía alimentaria.

“Me explicaban que nosotros, teniendo los alimentos nuestros en nuestra finca, no debíamos pasar hambre, que cultiváramos sin químicos porque dañan nuestra salud. También, que la soberanía alimentaria no era sembrar tomate o cebolla, también tener ají, cilantro, pimentón, aguacate, guanábanas, mango, piñas, yuca y plátano. Una finca surtida con un poquito de cada cosa”, relata doña Marina en la serie documental *Con los pies en la tierra*.

Pero durante el 2022 doña Marina ha tenido que hacer frente a la compleja situación humanitaria que atraviesa la vereda Piedras de Moler. En marzo del 2018, al final del Gobierno de Juan Manuel Santos (2014-2018), el ejército instaló una base militar a pocos metros de las casas y los enfrentamientos entre ellos y el ELN comenzaron a afectar directamente a la comunidad. Las paredes tienen agujeros y marcas de las balas, en los patios han caído cilindros bomba y, según los campesinos, el ejército sembró minas en el sector.

La finca de doña Marina es una de las más afectadas; los militares ocuparon una parte del terreno en el que tiene sembrados aguacates y cacao. A principios de agosto del 2022 tuvo que desplazarse hacia el casco urbano del corregimiento de San Pablo, en el municipio de Teorama, junto a más de cien familias de su vereda y de la vecina vereda Caño Seco.

Recuerda que ese sábado 6 de agosto estaba en su casa, en la cocina pequeña y de color blanco que utiliza solo para preparar cremas, jabones y ungüentos medicinales, cuando escuchó los disparos. Rápidamente se puso las chanclas y empezó a bajar la montaña; no tuvo tiempo de llevarse nada, ni de ponerse las botas. El fogón quedó apagado y sobre este quedó una olla con la pasta a base de achiote que nunca llegó a convertirse en jabón.

Los campesinos desplazados se refugiaron en la Casa Campesina de San Pablo, en situación de hacinamiento. Como presidenta de la Junta de Acción Comunal, doña Marina sintió la responsabilidad de cuidar a toda su comunidad; yendo de un lado a otro, conversando y ayudando en la cocina.

Poner los pies en la tierra

Cada encuentro de las mujeres del Cisca empieza con un ritual con frutas, plantas, banderas, velas y escritos que forman un mandala en el piso. Alrededor se ubican ellas, se toman de las manos, se miran unas a otras y se reconocen a sí mismas en sus compañeras. En ese momento sus dolores, sus preocupaciones y sus rabias se hacen colectivos.

Para Andrea los espacios de autocuidado son lo más importante de los encuentros: “Cuando estamos en el hogar, en la comunidad o en la vereda, no hay tiempo ni para no-

sotras; o sea, realmente nuestros cuerpos están sometidos a todo tipo de presión. No hay tiempo para respirar, no hay tiempo para soltar las cargas”, dice. Por eso, lo primero en la agenda siempre es un momento de respiración, de escucha, de ‘soltar’”.

“Las madres nos hacemos cargo de muchas cosas: del cuidado del hogar, de los hijos, de los abuelos. Nos hacemos cargo también del cuidado de las comunidades. Y además no tenemos derecho a descansar”, asegura Andrea. Entre todas han llegado a la conclusión de que, si sus mentes y sus cuerpos no están sanos, no pueden avanzar ni proyectar su trabajo. “Cuando nos encontramos es fundamental poder poner los pies en la tierra, porque a veces estamos tan cansadas que un dolor no nos deja pensar”, dice.

Así, las reuniones se han convertido también en un espacio de sanación espiritual y física. Los comités de mujeres deben ser encuentros entre pares. “No deben ser de competencia, ni deben ser diseñados para acrecentar el maltrato y la violencia, sino para ser espacios agradables donde podamos descansar, reírnos, bailar y, en medio de todo, trabajar”, dice María en la serie documental *Con los pies en la tierra*.

En los encuentros comparten historias, recetas medicinales y secretos que se remontan a un conocimiento ancestral y colectivo que les ayuda a sanar. Los dolores en las rodillas, en los pies y en las articulaciones, y la tensión en los hombros son algunos de los problemas de salud física más comunes entre ellas. Al desgaste del cuerpo se suman el de la mente el de y las emociones, que son coletazos de la violencia simbólica, física, estructural y armada que viven en su región. Según el Observatorio de Género del Norte de Santander, en el 2021 se registraron en el Catatumbo 14 feminicidios, 54 amenazas, y 36 mujeres desplazadas.

Los secretos de las abuelas

Las abuelas han transmitido los conocimientos sobre las plantas a sus nietas, les han dado las recetas de los remedios y menajes que usan para aliviar las enfermedades y los dolores de sus familias, como los baños con manzanilla para bajar la fiebre, los purgantes con ajo, la cama de matarratón para aliviar la gripa o la infusión de coca para los dolores en el cuerpo.

“Últimamente las personas alrededor me dicen la señora de las plantas, de las matas, de las hierbas, porque allá en el campo o aquí en Ocaña encuentro plantas medicinales, ornamentales o para la alimentación”, dice Andrea. En la finca de sus padres, en el corregimiento de Guamal, Andrea sembró una huerta con plantas como cúrcuma, jengibre, llantén, orégano y caléndula. “Estas plantas tienen un conocimiento infinito que se ha ido perdiendo con el tiempo, pero que queremos recuperar”, dice.

Evocando esa amistad ancestral que tienen las mujeres del Catatumbo con las plantas, María Ciro escribió un poema que reivindica los poderosos saberes que han nacido de esta antigua relación:

*Las mujeres y las plantas somos las mismas, hemos vivido juntas,
hemos evolucionado juntas, nos hemos transformado juntas,
hemos resistido juntas.*

*Una conexión natural, única, inexplicable, nos buscamos,
nos reproducimos, nos acompañamos, nos protegemos.*

*Como el tomillo, sintiéndonos pequeñas, diminutas,
somos capaces de hacerlo todo.*

Estar aquí y allá, darle un mejor sabor a la vida.

Como la ruda, tan amadas como odiadas,

*la que hoy recibe la rosa es la que mañana recibe la bofetada,
el estrujón, el golpe.*

*Como la coca, condenadas por largos periodos por brujas,
por prostitutas, ignorando que venimos de un ayer ancestral,*

*milenario, sagrado, donde esa condena es tan solo un momento
en la larga historia de nuestras luchas.*

Como el jengibre, frescas y picantes.

Como la ortiga, urticantes.

*Eso somos, mujeres-plantas que habitamos territorios más allá de los
tiempos, más allá de este tiempo, de este ahora.*

Para Andrea, lastimosamente, este “es un universo de conocimiento que se ha ido perdiendo, mucho más con el capitalismo con el que el campesinado empezó a cambiar su forma de cultivar”. Ella explica que los monocultivos y los agroquímicos llegaron al campo como parte de un modelo de producción y consumo que exige más rendimiento en menos tiempo, dejando de lado la economía campesina basada en la siembra de comida y el pancoger.

“Nosotras consideramos que la sociedad que se está construyendo no es en pro de la vida. Este modelo nos tiene dependiendo del acetaminofén, de la aspirina, de la leche que nos venden en la tienda. Eso es lo que estamos tratando de cambiar”, afirma Andrea. Por eso, en las reuniones las mujeres cuentan historias de las plantas, de los remedios que hacen con ellas y de cómo las procesan, pero también hacen talleres de formación a partir de su historia y sus propiedades curativas.

El cuidado y la pandemia

“Cuando por fin nos pudimos volver a ver, luego de la cuarentena, lloramos”, cuenta Andrea refiriéndose a la primera reunión que tuvieron después de un año de encierro y de restricciones de movilidad decretadas por los gobiernos debido a la pandemia del covid-19. Aunque murieron compañeros y compañeras de la región, y el confinamiento reveló situaciones complejas de convivencia al interior de las comunidades y

de los hogares, las mujeres del Cisca coinciden en que fue un hito fundamental para ellas. Según Andrea, “ya no era con lo que lidiábamos todos los días, como la guerra, sino algo invisible. Al virus no lo podíamos ver, pero estaba ahí”.

El coronavirus dejó al descubierto en Colombia las falencias de un sistema de salud volcado al capital, así como la fragilidad humana. Las mujeres del Cisca, además de cuidar a sus hijos y sus esposos, también organizaron brigadas pedagógicas y de salud para atender a las personas enfermas en varios de los municipios del Catatumbo. Andrea, por ejemplo, se contagió con covid-19 durante una de esas jornadas.

“Ahí fue, como se dice, que nos pusieron a probar de qué estábamos hechas, y nos dimos cuenta de que nosotras somos capaces de combatir hasta un virus”, asegura. En la pandemia las mujeres tuvieron la oportunidad de poner en práctica, a mayor escala, la funcionalidad de sus conocimientos y de la medicina ancestral que han heredado de sus abuelas y que, desde el Cisca, han intentado rescatar desde hace más de diez años.

Un ungüento similar al *VapoRub* es uno de sus productos insignia. Las mujeres del Cisca lo preparan con hojas de eucalipto y mentol que recogen de sus huertas, y este tiene un olor mucho más fuerte que el de producción industrial. Las familias que lo usaron corrieron la voz sobre los milagros curativos del producto artesanal, y de esa manera ellas ganaron reconocimiento en la región.

Eso también pasó con varias plantas y productos elaborados por ellas. Andrea cuenta que, por ejemplo, “la cúrcuma sube las defensas, entonces las compañeras que tenían el cultivo de cúrcuma empezaron a vender, a procesar. Hubo mucho, mucho dinamismo”.

Luego de un año se vieron unas a otras más fuertes. Se contaron cómo preparaban los bebedizos, las infusiones, las

medicinas, las cremas que habían elaborado para cuidarse a ellas mismas, a sus familias y a sus comunidades. “Lloramos al ver lo que éramos capaces de hacer... Como que nos reinventamos; o sea, nosotras de la nada somos capaces de hacer muchas cosas”, dice Andrea.

La coca es una mujer

El departamento con más cultivos de coca en el país es Norte de Santander. Los cultivos se concentran en la región del Catatumbo. Según un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, en el 2020 esta región tenía 40.116 hectáreas cultivadas de coca.

Los más viejos recuerdan que la coca llegó primero con las FARC. Luego el cultivo se expandió y se consolidó con la incursión paramilitar a finales de los noventa. Sin embargo, en los últimos cinco años ha aumentado el número de hectáreas cultivadas a causa de factores como la difícil comercialización de otros productos, la presencia de grupos armados y la migración venezolana. Este incremento ha contribuido al deterioro de la economía campesina en las familias y le ha restado fuerza al Catatumbo como despensa agrícola para el departamento y el país.

El Cisca, como proyecto político y social, se ha distanciado de este monocultivo, impulsando la cosecha de alimentos y su comercialización en tiendas comunitarias y cooperativas. Las mujeres del colectivo son conscientes de que el cultivo de coca, además de cambiar el paisaje, trae consecuencias económicas, violencias asociadas al narcotráfico y cambios culturales. Además, agudiza las dinámicas patriarcales.

Pero en esta región la coca no siempre se usó para producir cocaína. Las mujeres del Cisca han investigado sobre los

orígenes de la planta y los usos de la misma. Se dieron cuenta de que hay una semilla endémica en la región que cultivaban los indígenas barí, quienes la consideraban una diosa, a la que le hacían rituales espirituales. “La coca era una diosa que se convirtió en un árbol para poder estrechar un vínculo con la humanidad. Después se convirtió en alimento, en medicina”, explica Andrea.

Las campesinas del Cisca han aprendido que la coca tiene un gran porcentaje de calcio, que sirve para calmar los dolores musculares y que tiene potencial como energizante. Con lo que han aprendido en sus pesquisas han dado talleres en veredas donde el cultivo de esta planta es la única alternativa que tienen las familias para subsistir. “Llegar a cambiar el chip de una planta tan estigmatizada es algo muy poderoso, muy político”, dice Andrea, al agregar que la intención de las mujeres es rescatar los saberes ancestrales de las propiedades curativas y nutritivas de la coca.

Con el conocimiento recuperado las mujeres trascendieron de las aromáticas y las infusiones, y ahora también producen macerados, cremas para el dolor y *boleccoca*, una variación del *bolegancho*, el licor artesanal del Catatumbo, hecho con destilado de caña. Todo esto lo hacen con las plantas que ellas mismas cultivan en sus huertas y que no tienen ningún tipo de agroquímico ni veneno. “Ese es el reto de nosotras; utilizándola en nuestros preparados como medicina, poder enseñar y llevar a las comunidades a la reflexión de que la coca en sus orígenes es una planta espiritual, alimento y medicina”, dice Andrea.

La casa de Filogringo y el poder de la autogestión

El viernes 3 de marzo del 2000 los paramilitares incendiaron el corregimiento Filogringo, en el municipio de El Tarra.

Desde febrero de ese año, este poblado era un caserío fantasma, porque las ciento dieciséis familias que vivían allí huyeron ante la presencia de los paramilitares que se enfrentaron a las guerrillas por el control de la zona.

Veintidós años después, las montañas de Filogringo otra vez están cultivadas con alimentos y coca. Para llegar hay que recorrer las trochas que las mismas comunidades han construido y atravesar algunos de los peajes comunitarios que instalaron los campesinos para recoger fondos y hacerles mantenimiento a las vías. En este corregimiento, donde sus habitantes recuerdan ese pasado de violencia, funciona uno de los comités de mujeres del Cisca que tiene más integrantes: veinte campesinas.

En medio del caserío está la Casa de la Mujer, uno de los logros más importantes de este grupo de mujeres. Es un espacio amplio, con varias habitaciones, similar a la sede de una junta de acción comunal. Fue construida con la venta de productos hechos por ellas y hoy funciona como un lugar para las reuniones del colectivo, pero también para otros eventos de la comunidad.

“Los primeros ungüentos que hacían nuestras abuelas eran derretir manteca de cerdo conservada con un poquito de sal. Y ahí, en ese preparado al baño María se agregaban las plantas”, cuenta Andrea. Son conocimientos que nacieron y se han mantenido durante siglos entre las mujeres de cada familia. Según ella, los hombres no se han interesado por aprenderlos, “no saben distinguir entre la maleza y las plantas medicinales de la huerta”, afirma.

Las mujeres llevan la teoría a la práctica con la elaboración de cremas, jabones y ungüentos que preparan con los insumos de sus huertas. Tienen cremas para el dolor, macerados para mejorar la respiración, jabones para el cuidado de la piel, *bo-*

lecoca y nutrimaquillaje. Con las recetas de sus madres y sus abuelas han aprendido a conocer la materia prima, a procesar las plantas y practicar su correcta aplicación. Según Andrea, “todo esto lo hacían las abuelas, nosotras lo que hemos hecho acá es aprender a hacerlo más cosmético, más práctico”.

Para la elaboración de los productos se han organizado en pequeños y grandes colectivos, desde un núcleo familiar de madre y hermanas, hasta veinte mujeres reunidas en la Casa de la Mujer de Filogringo. Además de la producción, generan espacios de encuentro para la formación y la discusión política en torno a la salud de las comunidades. Esta labor se ha convertido también en un proyecto de autogestión. Su marca se llama La Campesina y en la etiqueta se lee: “Mujeres de la región del Catatumbo que construimos alternativas de salud para la vida digna”.

Como la producción no es a gran escala, su comercialización se realiza a partir del voz a voz, en los puestos comerciales en eventos a los que son invitadas y en pequeñas ventas a organizaciones cercanas. “Aquí no hay intermediarios, los vendemos de tú a tú, porque de esa manera podemos explicar un poco las propiedades, los beneficios, cómo se elabora y también nuestra apuesta de medicina ancestral para el cuidado de la vida y la salud”, explica Andrea.

Con este trabajo muchas de ellas han mantenido un ingreso económico que les ha dado independencia y autonomía para ir a las reuniones y suplir otros gastos. Además, han gestionado festivales y construido espacios comunitarios, como dos casas de la mujer, una en Filogringo y otra en San José. Ningún otro eje del Cisca, dicen ellas, ha logrado tener ese nivel de organización y autogestión.

Estas mujeres no solo saben cultivar las plantas y procesarlas, sino que también conocen las formas de aplicar los

productos y las dosis correctas. Poco a poco y de manera colectiva han rescatado los pasos de sus ancestras y ahora son, en esencia, un comité de mujeres médicas, curanderas y cuidadoras que recuerdan lo que han aprendido en la huerta y en el fogón, y que caminan por las montañas y los caminos del Catatumbo replicando su lema: “Mujeres del Cisca: sabiduría, lucha y resistencia”.

Referencias

- Amaya, J., Cifuentes, S., Rincón, D., Lemus, J., y Nayib, J. (2021a). *Lucha. Con los pies en la tierra*. https://www.youtube.com/watch?v=Af34BQ2V_hU.
- ____ (2021b). Resistencia. *Con los pies en la tierra*. <https://www.youtube.com/watch?v=OLnJta96Wq0>.
- ____ (2021c). Sabiduría. *Con los pies en la tierra*. https://www.youtube.com/watch?v=4ao_HyGpba8.
- Centro Nacional de Memoria Histórica (2018). Catatumbo: memorias de vida y dignidad. Bogotá: Centro Nacional de Memoria Histórica. <https://centrodememoriahistorica.gov.co/micrositios/catatumbo/descargas/catatumbo-informe.pdf>.
- Comisión de la Verdad (s. f.). El paro de Nororienté. <https://bit.ly/3wZy1a3>.
- Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2021). *Colombia. Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2020*. https://www.unodc.org/documents/crop-monitoring/Colombia/Colombia_Monitoreo_de_territorios_afectados_por_cultivos_ilicitos_2020.pdf.
- Orozco, L. F. (2021). El Catatumbo, territorio de riesgo para las mujeres. *El Espectador*. <https://www.elespectador.com/colombia/el-catatumbo-territorio-de-riesgo-para-las-mujeres/>.
- Rojas, T. (2021). Una revolución feminista crece en el Catatumbo. *Consejo de Redacción*. <https://consejoderedaccion.org/sello-cdr/investigacion/una-revolucion-feminista-crece-en-el-catatumbo>.
- Rutas del Conflicto (2019). Masacre de La Gabarra mayo de 1999. <https://rutasdelconflicto.com/masacres/la-gabarra-mayo-1999>.

Verdad Abierta (2014). Sentencia contra Mancuso confirma vínculos de AUC con militares, empresarios y políticos. <https://verdadabierta.com/sentencia-contramancuso-confirma-vinculos-de-auc-con-militares-empresarios-y-politicos/>.

Una bandera roja en el desierto de La Guajira

Por Alfredo González
y Juan Camilo Castañeda Arboleda

Alfredo González Núñez (indígena wayuu, La Guajira). Comunicador social y periodista de la Universidad Católica Cecilio Acosta de Venezuela. Experto en Pueblos Indígenas, Derechos Humanos y Cooperación Internacional de la Universidad Carlos III de Madrid (España). Ha escrito para el periódico *Wayuunaiki*, la Corporación Otraparte y *Hacemos Memoria*. Actualmente hace parte del equipo de redacción de la sección Colombia de *Presenza International*.

Juan Camilo Castañeda Arboleda (Medellín, 1992). Periodista de la Universidad de Antioquia, magíster en Cultura de Paz, Conflictos, Educación y Derechos Humanos de la Universidad de Granada (España). Trabaja como periodista e investigador en el proyecto Hacemos Memoria de la Facultad de Comunicaciones y Filología de la Universidad de Antioquia.

María Rosario Ruiz Ipuana citó a las autoridades del pueblo wayuu en la enramada Katzaliamana, el 6 de diciembre del 2016, para buscar soluciones a la situación de los niños que mueren por desnutrición en La Guajira. Ese día, 60 líderes se declararon en asamblea permanente y fundaron el Movimiento Indígena Nación Wayuu. Desde entonces, le exigen al Estado, a través de acciones legales, protestas y bloqueos en la vía férrea Cerrejón, la atención efectiva de los problemas que causan la desnutrición infantil. En la reunión, designaron a José Silva como coordinador de la organización. En estos cinco años, él ha documentado y orientado el proceso de resistencia pacífica.

José Silva salió de la comunidad de Petsuapa, en el municipio de Manaure, a los siete años, rumbo a Riohacha, la capital del departamento de La Guajira. Se fue por decisión de sus padres, quienes con mucho esfuerzo pagaron el viaje y su estadía en la ciudad, para que el pequeño pudiera estudiar. Ellos lo hicieron con la convicción de que así José podría mejorar sus condiciones de vida. En esa época, a mediados de la década de los ochenta, los habitantes de la ranchería Petsuapa estaban sumidos en la pobreza. No tenían agua, ni escuelas apropiadas, ni centros de salud.

José, quien afirma que maduró precozmente, se preguntaba en aquellos días por qué tenía que irse de su tierra, lejos de la familia, para tener una vida mejor. Cuestionaba por qué en los parajes guajiros, donde habita el pueblo indígena wayuu, la gente vivía tan mal. Cuando se marchó también pensó que irse a estudiar era un privilegio, algo que resultaba impensable para otras familias vecinas.

Después de estudiar unos años en Riohacha, sus padres le dijeron que debía irse para Barranquilla. Él obedeció. En la capital del Atlántico, en 1998, José Silva hizo los cursos básicos que ofrecía la Policía Nacional de Colombia. En el 2002, se fue para Bogotá a estudiar la especialización en manejo de explosivos. Cuando terminó el curso, regresó a Barranquilla para integrar el grupo de antiexplosivos de la Seccional de Investigación Judicial —Sijín—.

José recuerda esa labor como un sacrificio, pues tenía de cerca la muerte. En el 2004, lo mandaron a una misión en Mai-

cao, una pequeña ciudad de La Guajira, en la frontera con Venezuela, donde debía desactivar un *cilindrobomba*. El artefacto explotó mientras lo revisaba. Sus compañeros le dijeron que la onda explosiva lo había hecho volar a más de siete metros de altura. Perdió el 70 % de la audición del oído izquierdo. Según José, no murió ese día gracias a los equipos de seguridad que llevaba puestos.

Por su valentía, en las oficinas de la Sijín lo llamaban el Loco Silva. Este indígena wayuu, del clan apüshana, contó que aprovechó sus años de servicio en la policía para formarse en derechos humanos. En parte, porque nunca dejó de pensar en las duras condiciones de vida de las que fue testigo en las rancherías de La Guajira cuando era un niño. José no pudo olvidar la pobreza extrema en la que vivían sus coterráneos, afectados por las mineras de carbón, que vulneraban muchos de sus derechos, incluso bajo el amparo del Estado colombiano. Así se despertó su sensibilidad y surgió su motivación para defender causas nobles y justas, dijo.

Junto a otros compañeros, fundó una oficina jurídica para asesorar y librar casos jurídicos en reivindicación de los derechos de las comunidades wayuu. “Era una forma de ayudar a mis hermanos indígenas. Sentía que en la policía ya trabajaba por los derechos humanos de la población, pero aun así me sentía atado a una institucionalidad, pudiendo hacer mucho más. Por ello, invité a otros compañeros sensibles con las buenas causas, para hacer un aporte como responsabilidad social, pero en este caso a los hermanos wayuu, quienes por ignorancia de las leyes y de sus derechos son víctimas de atropellos”, explicó José.

El pueblo wayuu

El departamento de La Guajira se ubica en la zona más septentrional de Colombia. Está bordeado por el mar Caribe.

Tiene una superficie de 20.848 kilómetros cuadrados y está conformado por 15 municipios: Riohacha, Uribia, Manaure, Maicao, Dibulla, Albania, Hatonuevo, Barrancas, Fonseca, Distracción, San Juan del Cesar, El Molino, Villanueva, Urumita y La Jagua del Pilar.

En el 2019, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística —DANE— determinó que en La Guajira viven 1.067.063 personas, de las cuales 380.460, es decir, el 35 % de los guajiros, se reconocen como indígenas wayuu. Ellos están organizados en 21 resguardos indígenas reconocidos por el Estado. De acuerdo con la Organización Nacional Indígena de Colombia —ONIC—, los wayuu conforman el pueblo indígena más grande del país.

En lengua wayuunaiki, la península de La Guajira, el territorio ancestral de los wayuu, se llama *Jepira*. En español, la tierra de los guajiros muertos. Y aunque el territorio de la península es compartido por los Estados de Venezuela y Colombia, para el pueblo étnico es indivisible.

Los wayuu son un pueblo de tradición oral. A través de cuentos, relatos y canciones en wayuunaiki transmiten desde tiempos remotos sus prácticas, tradiciones, saberes, mitos, creencias y valores. Para ellos, su lengua es el patrimonio más importante, porque gracias a la palabra pueden establecer la comunicación necesaria para resolver conflictos pacíficamente y, por lo tanto, preservar la integridad de todos los individuos y de la nación wayuu.

La organización social de estos indígenas de La Guajira es compleja. Se dividen en 22 clanes y en cada uno de ellos la línea sanguínea de las madres marca la jerarquía. De hecho, las mujeres wayuu son las que conducen los clanes y tienen la responsabilidad de representarlos en espacios públicos.

“Dentro de la familia extendida, la autoridad máxima le corresponde al tío materno, quien interviene en todos los problemas familiares y domésticos”, explica la ONIC en una descripción sobre el pueblo wayuu que se encuentra en su página web. Sobre los hijos, por ejemplo, el documento anota que son orientados por el hermano de la madre, más que por el padre biológico.

La mayor parte del territorio guajiro es árido, desértico. Allí la población wayuu vive en vecindarios que se dividen en núcleos más pequeños, a los que llaman rancherías.¹ Estas se componen de cinco o seis casas, en las que viven familias matrilineales. Las paredes están hechas en bareque, una técnica de construcción en la que se utilizan cañas y palos unidos con una mezcla de barro y paja, y con yotojoro, una madera que obtienen de los cactus secos. En el interior de las viviendas suele haber dos habitaciones, donde las personas duermen en hamacas.

“Los nombres de las rancherías hacen referencia a la naturaleza y al apellido transmitido por la matrilinealidad, es decir, que los miembros de una misma casta son parientes uterinos y al mismo tiempo comparten derechos y recursos”, así lo explica el Ministerio de Cultura de Colombia en una caracterización sobre los pueblos indígenas del país.

En medio del desierto, este pueblo ha vivido históricamente de la cría de chivos, cabras y vacas. Así como de pequeñas huertas cultivadas con maíz, frijol, yuca, ahuyama, pepinos, melones y patilla. En las zonas costeras, algunas rancherías sacan provecho de la pesca, y en las últimas décadas se han dedicado al comercio de sus artesanías, en especial, de sus mochilas tejidas que son reconocidas en todo el país. Un in-

1 De acuerdo con el Fondo de Adaptación, en el 2018 existían 2.553 rancherías en la península de La Guajira.

forme estadístico del DANE, publicado en el 2021, mostró que el 88,5 % de la población wayuu vive en áreas rurales.

En el país, las condiciones de vida de estos indígenas son de las más indignas. Según el DANE, el 90,6 % de su población no tiene acceso a agua potable (345.000 personas); el 78 % no tiene electricidad en sus hogares; y el 93,4 % no tiene alcantarillado. Además, solo el 2,8 % ha logrado entrar a la universidad. Teniendo en cuenta estas estadísticas, el DANE concluyó en el 2021 que el 53,3 % de los indígenas wayuu vive en condiciones de miseria.

Tierra rica, tierra usurpada

Mientras los indígenas wayuu viven en esas condiciones, frente a sus rancherías, en sus narices, cinco trenes de ciento cuarenta vagones transportan diariamente ochenta mil toneladas de carbón.

La línea férrea del carbón es propiedad de la multinacional Cerrejón y tiene una extensión de 150 kilómetros. El ferrocarril atraviesa La Guajira, desde el municipio de Albania, ubicado en el sur, en donde se encuentra una de las minas a cielo abierto más grandes del mundo, hasta Puerto Bolívar, en el extremo norte de la península, donde embarcan todo el carbón para enviarlo a otros países, especialmente de Europa.

Un estudio que publicó el Centro de Investigación y Educación Popular —Cinep— en el 2020 reveló que Cerrejón tiene concesionadas 69.393 hectáreas (la mitad del territorio de los municipios de Barrancas, Hatonuevo y Albania), de las cuales 14.493 ya se encuentran en explotación.

Según el documento, 24 comunidades de campesinos, indígenas y afrodescendientes fueron desplazadas por la empresa minera entre 1985 y el 2020; los territorios de 12 de ellas

desaparecieron porque fueron absorbidos por la mina. Estos desarraigos ocurrieron a través de la “compra irregular de predios, amenazas de expropiación, desalojos violentos con la fuerza pública, confinamientos como una estrategia de expulsión del territorio y desplazamiento forzado por los actores armados”, expuso el Cinep.

Además de las consecuencias territoriales, la mina de Cerrejón tiene efectos sobre el medioambiente. El más doloroso para las comunidades de La Guajira, probablemente, son las afectaciones al agua disponible para el consumo humano. Según el Cinep, en la operación minera se utilizan veinticuatro millones de litros de agua diariamente. “La actividad minera es la mayor causante de contaminantes de agua en la región, pues no solo desvían y utilizan una enorme cantidad de arroyos y afluentes, sino que los devuelven contaminados con metales pesados, químicos y sedimentos. [...] Y ha intervenido más de diecisiete arroyos y afectado otros treinta, [...] causando daños irreparables en el río Ranchería”.

El problema de la disponibilidad de agua se agudiza en La Guajira con las largas sequías relacionadas con el fenómeno de El Niño, un evento meteorológico que cada año se agudiza con el cambio climático global. Además, en el 2010 se construyó el embalse El Cerrado sobre el río Ranchería, que tenía el propósito de nutrir un sistema de riego para los cultivos y los acueductos de varios municipios guajiros. Pero la obra se quedó a mitad de camino porque no se terminaron las líneas de conducción del líquido, por lo que su única función es regular el caudal del río. “Para los wayuu, lo que prometía ser esperanza se convirtió en muerte. Después de la construcción de la represa los caudales del agua superficial y subterránea disminuyeron, intensificando los efectos de la extrema sequía que se experimenta en sus territorios”, explicó el Observato-

rio de Conflictos Ambientales de la Universidad Nacional de Colombia en una publicación del 2019.

Cuando la mina de Cerrejón se abrió, en 1985, prometió el desarrollo económico para la región. La Contraloría General de la Nación rebatió esa idea en un informe que dio a conocer en el 2016, donde afirmó que una de las razones por las cuales la pobreza persiste en La Guajira tiene que ver con “la baja capacidad de la minería para generar desarrollo local, lo que lleva a que la economía de las regiones productoras tienda a ser de enclave”.

En ese informe, la Contraloría evaluó el manejo de los 1,8 billones de pesos que recibió el departamento de La Guajira por regalías entre el 2012 y el 2015. Entre sus conclusiones, la institución destacó que los proyectos ejecutados en ese período no atienden las necesidades básicas de la población, que solo el 30 % de los proyectos contratados fueron finalizados y que casi el 80 % de los recursos se entregó en concursos a los cuales se presentó un solo oferente. Situaciones que son un síntoma grave de corrupción.

Movimiento Indígena Nación Wayuu

Entre el 2008 y el 2015, murieron en La Guajira 4.770 niños debido a la falta de acceso al agua potable y al grave estado de desnutrición. La cifra, que da cuenta de la emergencia humanitaria que vive el pueblo wayuu, la dio a conocer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos —CIDH— en la resolución 60 del 11 de noviembre del 2015.

En ese documento, la CIDH dictó medidas cautelares al Estado colombiano para que “adopte las medidas necesarias para preservar la vida y la integridad personal de las niñas, niños y adolescentes de las comunidades de Uribia, Manuaure, Riohacha y Maicao del pueblo wayuu, en el departamento de La Guajira”.

La CIDH le pidió al Estado que tomara las medidas necesarias para que esta población tuviera acceso al agua potable y a los servicios de salud de calidad, además de que garantizara que tuviera comida suficiente para satisfacer las necesidades alimentarias.

En la comunidad Katzaliamana, que está ubicada en el kilómetro setenta de la línea férrea de Cerrejón, justo antes de la cabecera municipal de Uribia, la líder María Rosario Ruiz Ipuana vive esa dura realidad que describió la CIDH en la resolución. Ella, preocupada por el panorama sombrío, citó a una reunión a las autoridades tradicionales de La Guajira. Al encuentro, que se llevó a cabo el 6 de diciembre del 2016, llegaron 60 representantes de clanes wayuu de Uribia, Manaure, Riohacha, Albania, Hatonuevo, Distracción y Fonseca.

“La idea de esta reunión fue conversar y reflexionar sobre el papel que teníamos como personas mayores, líderes y autoridades de nuestras comunidades frente a la situación de pobreza, desnutrición y abandono estatal que sufrimos. Después de años de ver cómo saquean las riquezas de La Guajira, años de denuncias, tutelas, reuniones con distintos actores, acuerdos y promesas no cumplidas por parte de Cerrejón y también del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, institución que no hace un trabajo adecuado ni ajustado a nuestra realidad étnica, teníamos que pensar qué hacer. Porque solo veíamos, cada día, más y más pobreza, con su signo más dramático: la desnutrición y la muerte de niños wayuu. Y nosotros confiábamos siempre en la buena fe de los que llegaban con sus falsas promesas, pero a los que solo les interesaban los recursos de nuestra madre tierra”, relató la señora María Rosario Ruiz Ipuana.

En la reunión, los líderes indígenas estaban preocupados particularmente por los operadores de alimentación que fueron contratados por el Instituto Colombiano de Bienestar Fa-

miliar —ICBF— en el 2016. Según explicó Ruiz Ipuana, esta institución del Estado, encargada de proteger los derechos de los niños y las niñas del país, elaboró los contratos sin hacer la consulta previa a las comunidades wayuu.

Para los indígenas ese gesto fue de suma gravedad, pues la consulta previa es un derecho fundamental a través del cual pueden decidir, entre muchos otros asuntos, sobre los proyectos que el Estado va a desarrollar en las comunidades; en ese caso, la alimentación y la salud de los niños y las niñas, que para los wayuu debían ser coherentes con su cosmovisión. Por eso, una de las decisiones que tomaron en la reunión fue declararse en asamblea permanente hasta que sus demandas fueran atendidas por el ICBF.

A esa reunión asistió José Silva, quien recordó: “Para este momento yo estaba recién pensionado de la Policía Nacional y con muchas fuerzas para explayar todas mis energías en la causa de la defensa de los derechos humanos. Ya de forma libre e independiente, sin las ataduras de la institucionalidad policial. Por eso me uní a la causa de las autoridades tradicionales reunidas en la casa de la señora María Rosario, buscando visibilizar los problemas que estaban causando en nuestros territorios las actividades de extracción y las operaciones de las distintas instituciones del Estado, que no eran coherentes con nuestro contexto indígena, como en el caso del ICBF”.

Ese 6 de diciembre del 2016, las autoridades también crearon el Movimiento Indígena Nación Wayuu, una colectividad a la que le encargaron la misión de defender los derechos humanos, el gobierno propio y el ejercicio de autoridad del pueblo étnico de La Guajira, y que en el 2017 consiguió su personería jurídica como organización no gubernamental.

A José Silva, por su experiencia, su conocimiento pleno de la cultura, su manejo de la lengua wayuunaiki y su compro-

miso con la defensa de la dignidad de los pueblos indígenas, las autoridades tradicionales lo nombraron líder de la Nación Wayuu. En ese momento, José empezó a documentar detalladamente el conflicto que tenían con el ICBF, institución que vulneró el derecho fundamental a la consulta previa.

La palabra y el diálogo

Ante los conflictos que enfrentaba la comunidad en su territorio, una de las medidas que tomaron las autoridades tradicionales wayuu fue citar en La Guajira a entidades de los gobiernos local y regional, a la minera Cerrejón y al ICBF para expresarles cuáles eran las necesidades de las comunidades y pedirle a esta última institución que cumpliera con la consulta previa para designar a los operadores de los programas de alimentación.

Rápidamente, el 21 de diciembre del 2016, se dio el encuentro entre las autoridades wayuu y Gloria Brito Choles, directora regional encargada del ICBF, en la sede de esa institución, ubicada en pleno centro de la ciudad de Riohacha. Según José Silva, la directora encargada Brito Choles les respondió que el ICBF es una entidad autónoma en sus decisiones, y que la consulta previa no aplicaba en el caso de la selección de los operadores de los programas de alimentación.

Los ánimos se caldearon ante la respuesta de la funcionaria. Los órganos de control del Estado y los empleados de la minera Cerrejón, que hacían las veces de garantes, mediaron entre los indígenas y Brito Choles. Así, acordaron otra reunión para el 27 de diciembre, esta vez en la comunidad de Katzaliamana, donde las autoridades indígenas se encontraban en asamblea permanente. Pero ese día llegó y la directora regional no asistió al encuentro. Envío a Milene Palacio,

coordinadora zonal del ICBF de Manaure, quien reiteró que la entidad era autónoma en sus decisiones.

Al día siguiente, en las primeras horas de la mañana, los indígenas, que continuaban en asamblea, salieron al kilómetro setenta de la línea férrea de Cerrejón y bloquearon el paso de los trenes que sacan el carbón, como protesta por las negativas y la intransigencia de los funcionarios del ICBF.

Hasta la comunidad de Katzaliamana llegaron rápidamente Wilson Rojas Vanegas, secretario de asuntos indígenas de la Gobernación de La Guajira; Xiomara Curvelo, secretaria de Gobierno de Uribia; funcionarios de la Defensoría del Pueblo y directivos de Cerrejón, quienes, según contó José, se solidarizaron con los protestantes, y como medida para resolver el problema, citaron a una mesa de concertación el 11 de enero del 2017.

La mesa de concertación se llevó a cabo en la enramada de María Rosario Ruiz Ipuana, otra vez en Katzaliamana, que para ese momento ya se había convertido en el punto de la resistencia indígena. Ese 11 de enero asistieron Juan José Robles Julio, alcalde de Manaure; Luis Enrique Solano Redondo, alcalde de Uribia; y Wilmer González Brito, entonces gobernador de La Guajira. Pero, nuevamente, los funcionarios del ICBF faltaron a la cita.

Ante el desplante, las autoridades wayuu nombraron al gobernador González Brito como *putchipuu* (palabrero), la persona de la comunidad que ayuda a resolver los conflictos, con la misión de ir a Bogotá y decirle al entonces presidente Juan Manuel Santos que lo esperaban en Katzaliamana para hablar sobre la atención a los niños.

El 17 de enero del 2017, en la sede de la Gobernación de La Guajira, representantes de las autoridades wayuu, entre los que se encontraba José Silva, se reunieron con Carlos Eduar-

do Correa Escaf, alto consejero presidencial para las regiones que fue enviado por el presidente Santos, y con el gobernador del departamento. Durante cuatro horas hablaron del conflicto que tenían con el ICBF, y José Silva le entregó a Correa Escaf un extenso documento donde se plantearon otros problemas del pueblo wayuu.

Al final del encuentro, el funcionario del Gobierno central dijo que se tenía que hacer un censo de la población infantil para que el ICBF atendiera al 100 % de los niños, y aseguró que revisaría los conflictos que los indígenas tenían con la entidad. “Y otros temas que me llevo en un documento, el cual será analizado en una mesa de trabajo interna para hacerle seguimiento y darles solución a las problemáticas”, dijo Correa Escaf a la periodista Sandra Guerrero del diario *El Herald*o.

Al sentir que fueron escuchados y percibir las buenas intenciones del gobernador González Brito y del alto consejero Correa Escaf, las autoridades indígenas pusieron fin a la asamblea permanente que habían declarado el 6 de diciembre del 2016.

Pocos días después de la reunión con el delegado del Gobierno nacional, los líderes indígenas empezaron a recibir amenazas. El 24 de enero del 2017, José Silva, Judith Rojas, Yelencia Gutiérrez, Cristóbal Cuadrado, Luis Carlos Blanco, Laurina Gutiérrez, Edis González, Rosa Iguarán y Pablo Ojeda recibieron mensajes de texto en sus celulares, que decían: “Desistan de las denuncias o morirán porque a todos los tene-mos ubicados”.

A la señora Judith Rojas, que interpuso una denuncia en la Fiscalía el 27 de enero, le llamó la atención que las amenazas empezaran a llegar justo un día después de la admisión de una tutela en un juzgado de Riohacha. La acción había sido interpuesta por Pablo Ojeda en contra del ICBF y de los opera-

dores de alimentos. De hecho, a él le remitieron un mensaje particular: “Señor Pablo Ojeda, párele a la denuncia con ICBF si no se quiere morir. Ojo, están todos ubicados”.

Amenazas y atropellos

Ante las amenazas de muerte y la desprotección, las autoridades indígenas wayuu se volvieron a declarar en asamblea permanente el 30 de enero del 2017. Como no recibieron respuesta por parte de las instituciones que debían protegerlas, a las seis de la tarde del 31 de enero, un grupo de hombres y mujeres de la comunidad salió de nuevo a bloquear la vía férrea de Cerrejón y una carretera nacional. Llevaron consigo una bandera roja con letras blancas que se agitaba con el fuerte viento guajiro y que decía: Nación Wayuu.

En lugar de recibir a funcionarios del Estado, el 2 de febrero, cuando ya completaban 36 horas de bloqueo, encontraron nuevos panfletos amenazantes en la comunidad Katzaliama-na. “Advertencia. Tienen 24 horas para que desalojen la vía y se retiren del proceso que ustedes ya saben. Están todos identificados y ubicados. No se hagan matar por lo que no es de ustedes y si quieren saber quiénes somos... Rastrojos de Colombia”.

Al día siguiente, como aquella vez que hicieron el bloqueo, cuando los funcionarios del ICBF los dejaron plantados, llegaron al kilómetro setenta Luis Enrique Solano, alcalde de Uribia; Wilson Rojas, secretario de gobierno municipal; el coronel Tito Yecid Castellanos Tuay, comandante de la Policía del departamento de La Guajira; el general Pablo Alfonso Bonilla, comandante de la Décima Brigada del Ejército; Soraya Mercedes Escobar, de la Defensoría del Pueblo, y directivos de la minera Cerrejón. “Supuestamente, con la finalidad de

brindarnos seguridad a los líderes y autoridades tradicionales”, dijo José Silva.

Pero al otro día, el 4 de febrero, a las 11:40 de la noche, un operativo policial a cargo del Escuadrón Móvil Antidisturbios —Esmad— sorprendió a los indígenas wayuu que estaban en el bloqueo. “Llegaron hasta el territorio indígena y ancestral de Katzaliamana, ingresaron aproximadamente doscientos hombres, fuertemente armados y vestidos de negro, lanzando gases tóxicos, cortando las sogas de los chinchorros en donde se encontraban mujeres y niños descansando. Sin piedad ni compasión golpearon brutalmente a 15 miembros de la comunidad. En esta incursión ilegal, este grupo despojó a las lideresas y autoridades de sus propiedades, tales como dinero en efectivo, un computador portátil, chinchorros, mochilas, teléfonos celulares, víveres, sillas, mesas, entre otras pertenencias”, narró José Silva.

En el operativo, los agentes del Esmad retuvieron a Alberto Uriana, autoridad tradicional de Yawasira; José Luis Uriana, autoridad tradicional de Irrotca; Ulitojoy Ipuana Epieyu, autoridad tradicional de Juyaparalen; Salvatin Urariyu, autoridad tradicional de Oulushen; Ramiro Uriana, autoridad tradicional de Sikep; José Gómez, autoridad tradicional de Pioulekat; y a un adolescente, quienes a punta de golpes fueron montados a un camión y trasladados a la Fiscalía de Maicao.

Un día después del operativo policial, doce mujeres wayuu salieron nuevamente a la vía férrea de Cerrejón, donde todavía estaban haciendo guardia los hombres del Esmad. Una de las mujeres que acudió para continuar con la manifestación fue Matilde López Arpushana, lideresa emblema de la región por haber sido una de las primeras personas que denunció las condiciones de vida de los niños en La Guajira, en distintos escenarios públicos.

Ese día, Matilde López vestía una manta guajira negra, estampada con pequeñas mariposas blancas. En la cabeza llevaba una pañoleta gris que era agitada por el viento. Notoriamente indignada, habló en un video que publicó Miguel Iván Ramírez Boscán en un canal de Youtube: “Realmente esta es una situación que es muy dura, crítica. No puede ser posible que el Estado colombiano, en respuesta de nuestras peticiones como pueblo indígena, como pueblo wayuu, venga y nos atropelle de tal manera. No es posible que la respuesta del Esmad sea el desalojo a la fuerza”.

Otra lideresa que salió a la vía férrea fue Rosmeri Pushaina, de Manaure. “¿Por qué somos mujeres en lucha? Porque como no respetan a nuestros hombres, a nuestras autoridades, pues se los llevan, con todo y sillas, como si fueran delincuentes. Entonces, nosotras las mujeres somos las que estamos acá dando la cara por ellos, porque somos mujeres valientes”, dijo en el mismo video.

Horas después de esa grabación, según los registros de José Silva, “el grupo armado vestido de negro [el Esmad] redobló su fuerza para desalojar a las mujeres indígenas, a través del uso excesivo de la fuerza, de sustancias químicas (gases lacrimógenos) y otras armas que usaron contra ellas”.

La resistencia sigue

Después de los atropellos de febrero del 2017, las autoridades del pueblo wayuu continuaron en asamblea permanente. En el kilómetro setenta, al lado de la vía férrea de Cerrejón, construyeron una enramada donde se reunían para hablar de las situaciones que enfrentaban y buscar soluciones.

José Silva, junto con líderes de Manaure y Uribia, hizo una base de datos con los nombres de mil quinientos niños wayuu

de esos municipios, que habían sido excluidos de los programas de alimentación del ICBF. Enviaron esa información a la institución en mayo del 2017 para que fueran incluidos, pero la entidad estatal respondió que quinientos de ellos ya estaban dentro de los programas.

José Silva se dio cuenta de que había irregularidades en los registros del ICBF cuando vio que en las estadísticas aparecían niños atendidos en las comunidades de Katzaliamana, Ishapa, Ishirruwow, Warrarrat, Parillen, Damasto, Irruain Ichichon y Juliakat, pero que según su documentación a esas rancherías no habían llegado los operadores de los programas de alimentación en ningún momento del 2017.

Debido a esas irregularidades, y a que cinco meses después de enviada la base de datos más de cien niños seguían sin estar incluidos en el programa de alimentación, las autoridades de Nación Wayuu, representadas por José Silva, interpusieron una tutela ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha el 17 de octubre. Exigían que el ICBF garantizara el derecho fundamental a la consulta previa.

Un mes después, el 15 de noviembre, la Sala de Decisión Civil, Familia y Laboral de ese Tribunal concedió la tutela a las autoridades indígenas wayuu representadas por José Silva, y ordenó a “las señoras directoras de los niveles central y regional del ICBF priorizar la realización de la consulta previa con las comunidades indígenas accionantes, exclusivamente para la aplicación del enfoque diferencial en los programas de primera infancia que involucren a los menores miembros de la comunidad wayuu, trámite que no puede exceder el término de tres meses para su finalización”, dice en la sentencia que tiene el consecutivo 122 de dicho tribunal. A pesar de que la orden del juez fue clara, hasta agosto del 2022 el ICBF no había hecho la consulta previa.

Defender al pueblo wayuu en medio de la persecución

Cuando José Silva se fue de ronda por algunas rancherías en Riohacha, Manaure y Uribia para comunicar a las autoridades wayuu sobre la decisión del Tribunal, ocurrió un incidente extraño. Él viajaba en su carro particular con Herminia Granadillo Uriana y Eber de Jesús Epinayu Epinayu. Cuando estaban por llegar al centro urbano de Manaure, los detuvo un grupo de policías. Les pidieron los documentos de identidad para verificar si tenían antecedentes penales y detuvieron a José porque, según ellos, figuraba con antecedentes.

En cuanto los líderes indígenas pudieron verificar que no era cierto, y José fue dejado en libertad, él mismo puso una denuncia ante el Juzgado 177 de Instrucción Penal Militar del Departamento de Policía de La Guajira. Para José esa fue una acción más en la sistemática persecución que estaba viviendo.

Y es que las amenazas que llegaron en enero del 2017 empezaron a materializarse. El 27 de agosto de ese año, José viajaba en su carro desde Riohacha hacia la comunidad de Petsuapa, en Maicao, con sus dos hijos y su madre. Apenas había recorrido un kilómetro por la carretera cuando dos hombres dispararon contra el vehículo y alcanzaron a dañar el vidrio de una ventana.

Después de esos hechos en la carretera, siguieron más amenazas. El 20 de marzo del 2018, por ejemplo, en el municipio de Uribia circularon panfletos en los que un grupo que se autodenominó Equipo Contrainsurgencia de la Alta Guajira declaró objetivo militar a Ylenka Gutiérrez, Brandon González, Laurina Gutiérrez y Donald Iguarán, miembros del Movimiento Indígena Nación Wayuu.

Diez días después, cuando José Silva y Ramón Viecco Ariza viajaban en su carro entre Manaure y Uribia, fueron alcanzados por dos personas en motocicleta que dispararon cinco veces

contra el vehículo. “Estos hechos ocurrieron en el lugar conocido como Casa Azul, cuando el señor Ramón se dio cuenta de que lo venían siguiendo en la moto, por lo que aumentó la velocidad para tratar de evadirlos. Y es cuando los antisociales abren fuego contra el vehículo y logran impactarlo en varias ocasiones”, explicó Nación Wayuu en un comunicado del 1 de abril del 2018.

Entre noviembre del 2020 y febrero del 2022, José Silva sufrió otros cuatro atentados. Uno de ellos ocurrió en su casa, cuando un grupo de hombres armados intentó ingresar a la vivienda.

En estos años de persecuciones y atentados, un hecho fue particularmente doloroso para la comunidad. Ocurrió en la madrugada del 11 de febrero del 2019. Un grupo de extraños ingresó a los predios de la comunidad Katzaliamana y quemó la enramada que habían construido al lado de la línea férrea de Cerrejón, el mismo lugar que se había convertido en símbolo de la resistencia wayuu. A pesar de las agresiones y de lo riesgoso que se ha vuelto el liderazgo para la vida de los integrantes de Nación Wayuu, las autoridades indígenas dicen que no renuncian a la defensa de la dignidad de su pueblo.

Un jalón de orejas para el Bienestar Familiar

El 8 de mayo del 2017, la Corte Constitucional de Colombia declaró el Estado de Cosas Inconstitucional en La Guajira, mediante la Sentencia T-302-2017, debido a las vulneraciones sistemáticas de los derechos de los niños y las niñas wayuu. En el texto, la Corte dictó 210 órdenes para que veinticinco instituciones trabajaran por la protección de los derechos al agua, la alimentación y la salud, entre otros.

En la sentencia, la Corte pidió información a cada una de las entidades que tienen responsabilidades en la protección

de los derechos de los niños wayuu. En cuanto al ICBF, dijo que pudo constatar que la institución tenía en marcha programas de atención alimentaria. Sin embargo, le pidió a la entidad que ampliara la cobertura, mejorara la ejecución presupuestal y reformulara sus lineamientos para que fueran compatibles con la cultura wayuu.

El 13 de mayo del 2022, la Corte Constitucional emitió el Auto 1193-21, en el cual hizo seguimiento al cumplimiento de la Sentencia T-302 del 2017. El tribunal confirmó que los indígenas estaban disgustados con el ICBF porque la entidad no consultaba su opinión antes de ejecutar los programas de atención alimentaria, y porque difundía la falsa idea de que las comunidades indígenas dificultan la implementación de las políticas públicas.

Por eso, la Corte le ordenó a Lina Arbeláez, entonces directora del ICBF, hacer un acto de reconocimiento simbólico a los wayuu como sujetos de derecho, para abrirles la puerta de la participación en las decisiones que los afectan y “tener en cuenta su cosmovisión y prácticas ancestrales, particularmente en lo concerniente a las medidas adoptadas para garantizar el derecho a la alimentación”. El evento se llevó a cabo el 6 de mayo del 2022 en el Cerro de la Teta del Cabo de la Vela, pero los indígenas wayuu no se sintieron reconocidos con las palabras de la directora, quien entregó un informe de ejecución.

Han pasado casi seis años desde que las 60 autoridades wayuu se declararon en asamblea permanente en la comunidad Katzaliamana. En ese tiempo, según las cifras del DANE recogidas por el periodista Ricardo Cruz en el diario *El Tiempo*, murieron en La Guajira 364 niños menores de cinco años por causas asociadas a la desnutrición. José Silva manifestó que su trabajo por los derechos humanos y la resistencia de su pueblo terminarán cuando los wayuu puedan disfrutar de una vida

plena y no tengan que irse a las grandes ciudades para buscar un mejor futuro. Mientras eso no ocurra, agregó, la bandera roja de la Nación Wayuu ondeará en La Guajira.

Referencias

- Centro de Investigación y Educación Popular —Cinep— (2016). *Minería, conflictos agrarios y ambientales en el sur de La Guajira*. http://biblioteca.clacso.edu.ar/Colombia/cinep/20160930114209/20160501_informe_especial_mineria.pdf.
- (2022). *Minería a gran escala y derechos humanos. Lo que el des-arroyo traajo a La Guajira*. https://www.cinep.org.co/publi-files/PDFS/20220628_Mineria_gran_escala_DDHH.pdf?
- Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2015). Medidas cautelares N.º 51/15. <http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2015/mc51-15-es.pdf>.
- Consejo Regional Indígena del Cauca (2017). Llueven las amenazas de muerte contra líderes wayuu. *CRIC*. <https://www.cric-colombia.org/portal/llueven-las-amenazas-de-muerte-contralideres-wayuu/>.
- Contraloría General de la República (2016). *Uso y manejo de las regalías, La Guajira 2012-2015*. <https://observatoriofiscal.contraloria.gov.co/Publicaciones/Uso%20y%20manejo%20de%20las%20Regal%C3%A1Das%20La%20Guajira.pdf>.
- Corte Constitucional de Colombia (2017). Sentencia T-302-2017. <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/t-302-17.htm>.
- (2022). Auto A1193. <https://www.corteconstitucional.gov.co/Relatoria/autos/2021/A1193-21.htm>.
- Cruz, R. (2022). La historia de 327 niños muertos por hambre y sed en La Guajira. *El Tiempo*. <https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/la-guajira-ninos-mueren-de-hambre-y-sed-en-esta-zona-de-704>
- Departamento Administrativo Nacional de Estadística —DANE— (2021). Informes de estadística sociodemográfica aplicada. N.º 3. Información sociodemográfica del pueblo Wayuu. <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/informes-de-estadistica-sociodemografica-aplicada>.

- Guerrero, S. (2017). El icbf atenderá el 100 % de los niños wayuu menores de 5 años. *El Heraldo*. <https://www.elheraldo.co/la-guajira/el-icbf-atendera-el-100-de-los-ninos-wayuu-menores-de-5-anos-320719>.
- Hernández, E. (2018). Minería y desplazamiento: el caso de la multinacional Cerrejón en Hatonuevo, La Guajira, Colombia (2000-2010), “Nuestra tierra es nuestra vida”. *Ciencia Política*, 13(26), 97-125. <https://revistas.unal.edu.co/index.php/cienciapol/article/view/68300/66957>.
- Madrid, M. (s. f.). La lucha contra el hambre wayuu en cinco escenas. *Dejusticia*. <https://www.dejusticia.org/especiales/30-anos-de-la-constitucion-de-1991/cronicas/la-lucha-contra-el-hambre-wayuu-en-cinco-escenas/>.
- Martínez, B. (2022). Acto simbólico de reconocimiento al pueblo wayuu ordenado por la Corte Constitucional al icbf carece de toda legitimidad. *Tüü Pütchika*. <https://www.tuuputchika.com/2022/06/04/acto-simbolico-de-reconocimiento-al-pueblo-wayuu-ordenado-por-la-corte-constitucional-al-icbf-carece-de-toda-legitimidad/>.
- Ministerio de Cultura (s. f.). Caracterizaciones de los pueblos indígenas de Colombia. Wayuu, gente de arena, sol y viento. *Mincultura*. <https://www.mincultura.gov.co/prensa/noticias/Documents/Poblaciones/PUEBLO%20WAY%20C3%9AU.pdf>.
- Organización Nacional Indígena de Colombia —ONIC— (2017). Onic alerta y denuncia ataque desmedido del Esmad al pueblo wayuu en Katzaliamana – en mediaciones de El Cerrejón. <https://www.onic.org.co/comunicados-onic/1639-onic-alerta-y-denuncia-ataque-desmedido-del-esmad-al-pueblo-wayuu-en-katsaliamana-en-mediaciones-de-el-cerrejon>.
- Observatorio de Conflictos de la Universidad Nacional (2019). El Cercado, ¿nuevo elefante blanco en La Guajira? *Periódico UNAL*. <https://unperiodico.unal.edu.co/pages/detail/el-cercado-nuevo-elefante-blanco-en-la-guajira/>.
- Procuraduría General de la Nación (2019). Pueblo indígena wayuu. Caracterización. <https://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/Caracterizacion%20Wayuunaiki.pdf>.
- Ramírez, B. (2020). La Guajira: 40 años de minería y no llega el desarrollo prometido. *Verdadabierta.com*. <https://verdadabierta.com/la-guajira-40-anos-de-mineria-y-no-llega-el-desarrollo-prometido/>.

- Ramírez, M. (2017). Esmad atenta contra comunidades wayuu – Katzalliamana. *Youtube*. <https://youtu.be/Vle7Y3CGqbQ>.
- Sarralde, M. (2017). La Guajira pagó \$650.000 millones por una represa que no le da agua. *El Tiempo*. <https://www.eltiempo.com/justicia/servicios/la-guajira-pago-650-000-millones-de-pesos-por-una-represa-que-no-le-da-agua-162286>.
- Silva, J. (2017). Acción de tutela contra Bienestar Familiar. <https://www.ramajudicial.gov.co/documents/10635/15103304/ESCRITO+DE+-TUTELA+2017-00209-00+-+JOSE+BLADIMIR+SILVA+DUARTE+%281%29.pdf/f70ad6ea-f1ec-44f9-aeb6-3f1d4f3c1a67>.
- Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha (2017). Sentencia de Tutela Acta N.º 122. <https://www.ramajudicial.gov.co/documents/10635/15103194/FALLO+2017-00209-00+-+JOSE+BLADIMIR+SILVA+DUARTE%2811%29.pdf/94b60f9d-a994-4ffd-bb5e-63d9e082114d>.



“Los territorios colombianos se convierten pues en ese espacio protagonista de las experiencias más comunes de supervivencia que oscilan entre la desazón y la esperanza. *Defender el territorio* nos guía por los conflictos y las luchas de los habitantes de la región del Guayabero, situada entre los departamentos del Meta, Guaviare y Caquetá; el resguardo ancestral de San Lorenzo, en Riosucio, Caldas; el municipio de Tumaco, en Nariño; el Suroeste antioqueño; la ciudad de Popayán, en el Cauca; el corregimiento Tierra Grata, municipio de Manaure, en el Cesar; la región del Catatumbo en Norte de Santander, y el pueblo Wayuu en La Guajira”.

Claudia Morales
Periodista